



3



**CODIFICACIÓN DEL DERECHO FEDERAL  
Y SU JURISPRUDENCIA**

<b>BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA</b>	
<b>Nº DE REGISTRO</b>	<b>3838</b>
<b>UBICACIÓN</b>	<b>F. 75</b>
<b>FICHA MATERIA</b>	

## OBRAS DEL AUTOR

*Los Nuestros.* — Estudio de crítica literaria, histórica y sociológica. (Rosas y su tiempo, La gloria de don Ramiro, La guerra gaucha, Del régimen federativo al unitario, La restauración nacionalista y El cascabel del halcón). Un volumen de 250 páginas. Buenos Aires 1910.

*La compraventa del trabajo.*—Tesis laureada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Estudio sobre el contrato de trabajo. (La fisiología del trabajo y cuestiones de orden sociológico y jurídico). Un volumen de 260 páginas, Buenos Aires 1911.

*Geografía física y humana de América.* — Segunda edición, ampliada y corregida. — Un volumen de 160 páginas, Buenos Aires 1918.

**EDUARDO ACEVEDO DIAZ (h)**

Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad  
de Buenos Aires.



# **CODIFICACIÓN**

DEL

# **DERECHO FEDERAL**

## **Y SU JURISPRUDENCIA**

- JUEZ FEDERAL.**— I. Conocimiento en primera instancia.  
II. Conocimiento en segunda instancia.
- CÁMARA FEDERAL.**— I. Conocimiento en segunda y última instancia.  
II. Conocimiento en segunda instancia preparatoria de la tercera de la Corte.  
III. Conocimiento en cuestiones de competencia.
- SUPREMA CORTE.**— I. Conocimiento en única instancia (Jurisdicción originaria).  
II. Conocimiento en tercera instancia.  
III. Conocimiento en instancia extraordinaria (Recurso extraordinario).  
VI. Conocimiento en consulta y en cuestiones de competencia.
- LEYES DE PROCEDIMIENTOS NACIONALES.**—

Para la venta:  
**LIBRERÍA "EL ATENEO" de PEDRO GARCÍA y Cía.**  
371 - Florida - 371

**BUENOS AIRES**  
1919

***Es propiedad del autor.***

---



# ÍNDICE GENERAL



**Prefacio** .....

## I PARTE

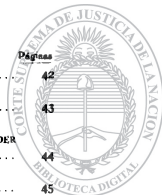
### **Codificación de las leyes sobre jurisdicción e instancias de los tribunales nacionales y su jurisprudencia**

#### SECCIÓN I.

### **JUEZ FEDERAL**

#### CONOCIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA

<b>CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES</b> .....	<b>23</b>
Texto de la ley. — Excepciones. — Jurisdicción no concurrente. — Derecho aplicable.	
<b>NACIONALIDAD</b> .....	<b>27</b>
Texto de la ley. — Requisitos del fuero. — Sociedades. — Prueba del fuero. — Prórroga de jurisdicción. — Excepciones al fuero.	
<b>VECINDAD</b> .....	<b>34</b>
Texto de la ley. — Derecho aplicable. — Requisitos del fuero. — Sociedades. — Modo de adquirirse la vecindad. — Excepciones al fuero. — Prueba del fuero. — Prórroga.	
<b>NEGOCIOS DE CÓNSULES Y VICECÓNSULES</b> .....	<b>41</b>
Texto de la ley. — Requisitos del fuero.	



ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL .....	Página 42
Texto de la ley. — Requisitos del fuero.	
ACCIONES FISCALES .....	43
Texto de la ley	
CAUSAS EN QUE LA NACIÓN SEA PARTE. — LA NACIÓN COMO PODER	
PÚBLICO O PERSONA DE DERECHO PÚBLICO .....	44
Requisitos del fuero.	
LA NACIÓN COMO PERSONA JURÍDICA .....	45
Requisitos del fuero	
CAUSAS DE ALMIRANTAZGO .....	49
DERECHO MARÍTIMO .....	49
Texto de la ley. — Requisitos del fuero	
CONTRABANDO .....	54
JURISDICCIÓN CRIMINAL .....	55
JURISDICCIÓN CONCURRENTES .....	57
Con justicia de paz. — Con justicia militar.	
HABEAS CORPUS .....	58
Texto legal. — Competencia del Juez Federal. — Incompe-	
tencia originaria de la Suprema Corte.	

## CONOCIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

DERECHO MARÍTIMO. — ORDENANZAS DE ADUANAS .....	61
IMPUESTOS INTERNOS .....	62

## SECCIÓN II.

## CAMARAS FEDERALES

JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LAS CÁMARAS FEDERALES .....	65
---	----

## CONOCIMIENTO EN SEGUNDA Y ÚLTIMA INSTANCIA

RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS	
JUECES DE SECCIÓN .....	67
Leyes Nacionales. — Nacionalidad y vecindad. — Negocios	
de cónsules y vicecónsules. — Actos administrativos del go-	
bierno nacional. — La Nación como parte. — Derecho ma-	
rítimo. — Acciones fiscales. — Contrabando. — Causas cri-	
minales.	
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LOS JUECES	
LETRADOS DE LOS TERRITORIOS NACIONALES .....	73



	Páginas
CONOCIMIENTO EN CONSULTA Y RECURSO DE QUEJA POR RETARDO O DENEGACIÓN DE JUSTICIA .....	73
CONOCIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA PREPARATORIA DE LA TERCERA INSTANCIA DE LA SUPREMA CORTE	
RECURSO DE APELACIÓN .....	75
La Nación como parte. — Acciones fiscales. — Causas de almirantazgo. — Extradicción. — Causas criminales.	
RECURSO DE REVISIÓN .....	77
CONOCIMIENTO EN CUESTIONES DE COMPETENCIA .....	77

### SECCIÓN III.

## SUPREMA CORTE

### CONOCIMIENTO EN ÚNICA INSTANCIA (Competencia originaria)

CONTIENDAS ENTRE PROVINCIAS .....	83
CONTIENDAS ENTRE PROVINCIAS Y PARTICULARES .....	83
Texto de la ley. — Requisitos del fuero. — Modo de adqui- rirse la vecindad. — Prórroga.	
CONTIENDAS ENTRE PROVINCIA E ESTADO EXTRANJERO .....	88
DIPLOMÁTICOS Y CONSULES .....	88
RECURSO DE REVISIÓN DE LAS CAUSAS DE COMPETENCIA ORIGINARIA ..	89
Texto de la ley. — Interposición. — Substanciación.	
RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD .....	93
La Nación como parte. — Acciones fiscales. — Causas de almirantazgo. — Extradicción. — Causas criminales.	
RECURSO DE REVISIÓN .....	96
Sentencias que originan el recurso. — Hechos que fundan el recurso. — Substanciación.	
RECURSO POR RETARDO O DENEGACIÓN DE JUSTICIA .....	98

### CONOCIMIENTO EN INSTANCIA EXTRAORDINARIA

RECURSO EXTRAORDINARIO .....	99
Recaudos del recurso. — Procedimiento	
CONOCIMIENTO EN CONSULTA .....	115
CONOCIMIENTO EN CUESTIONES DE COMPETENCIA .....	117
Texto de la ley. — Requisitos.	





## II PARTE

### Leyes de Procedimientos de los Tribunales Nacionales nacionales

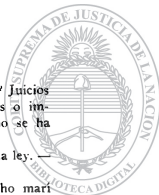
	Páginas
CONSTITUCIÓN NACIONAL .....	123
Ley n° 27, sobre organización de los tribunales nacionales ....	124
"  "  48, sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales .....	129
"  "  927, sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales .....	138
"  "  1467, adicional de la ley 48 .....	139
"  "  1893, sobre organización de los tribunales de la Capital .....	139
"  "  3952, sobre demanda contra la Nación .....	142
"  "  4055, sobre reformas de la Justicia Federal .....	143
"  "  7055, sobre reformas de la Justicia de la Capital .....	153
"  "  7099, creando una Cámara Federal en el Rosario .....	153

## III PARTE

### Leyes de Procedimientos de los tribunales Nacionales

Ley n° 50, de Procedimientos de los tribunales nacionales ...	157
"  "  935, sobre recusación o impedimento de los jueces fede- rales .....	224
"  "  3266, sobre recusación sin causa de los miembros de la Suprema Corte Nacional .....	225
"  "  3365, sobre nombramiento de médico o químico por los jueces nacionales, para expedir informes o practi- car pericias .....	225
"  "  3367, sobre representación del fisco y sobre nombramien- tos de árbitro .....	226
"  "  3375, incorporando a la ley 50, los títulos XIII y XIV del Código de Procedimientos vigente en la capital de la República .....	227
"  "  3549, sobre notificaciones .....	229
"  "  3981, modificatoria de la ley de procedimientos de los tri- bunales nacionales .....	230
"  "  4162, sobre integración de los tribunales federales, en casos de recusación, impedimento, vacancia o li- cencia .....	232
"  "  514, suprimiendo la prisión por deudas .....	236
"  "  4550, sobre perención de la instancia en materia civil y comercial .....	237
"  "  4560, prohibiendo se confiera funciones de ingenieros ci- vil, mecánico, arquitecto, químico, agrónomo y agri- mensor, a las personas que carezcan de título .....	239

# ÍNDICE ALFABÉTICO (1)



- ACCIONES FISCALES. — 39. Texto de la ley. — 40. Excepciones: 1º Juicios universales; 41. — 2º Acciones fiscales relativas a rentas o impuestos de la Capital Federal; 42. — 3º Lugar donde no se ha establecido juez federal. Además. 71. 80. 98.
- ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL. — 37. Texto de la ley. — 38. Requisitos del fuero.
- ALMIRANTAZGO. — 49. Además. 81. 99. Véase también, Derecho marítimo.
- CÁMARAS FEDERALES. — Conocimiento en segunda y última instancia. 66 y sigts. — Conocimiento en consulta. 76. — Conocimiento en segunda instancia preparatoria de la tercera instancia de la Suprema Corte. 78 y sigts. — Conocimiento en cuestiones de competencia. 85.
- CÁMARAS FEDERALES DEL INTERIOR Y LITORAL. — 74. 83.
- CÁMARA FEDERAL DE LA CAPITAL. — 65. 74. 83.
- CÁMARA FEDERAL DE CÓRDOBA. — 65. 83.
- CÁMARA FEDERAL DE LA PLATA. — 65. 75. 83.
- CÁMARA FEDERAL DE PARANÁ. — 65. 75. 83.
- CÁMARA FEDERAL DEL ROSARIO. — 65. 83.
- CAUSA CIVIL. — 10. 24.
- CHACO. — 65.
- CAPITAL FEDERAL. — 65.
- CIUDADANÍA. — 8.
- CÓDIGO. — 3.
- COMPETENCIA DEL JUEZ FEDERAL. — 1.
- COMPETENCIA DEL JUEZ DE PAZ. — 57.
- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL MILITAR. — 58.
- CONSTITUCIÓN. — 1. 66.

---

(1) Los números indican los parágrafos, no las páginas.



- CÓNSULES Y VICECÓNSULES. — 34. — Texto de la ley. — 35. Requisitos del fuero. Además, 68. 95.
- CONSULTA. — 75. 113.
- CONTRABANDO. — 55. 73.
- CÓRDOBA. — 65.
- CUESTIONES DE COMPETENCIA. — 114. I Texto de la ley. — 114 bis. Requisitos. Además, véase 85.
- DERECHO MARÍTIMO. — 50. I Texto de la ley. 51. — Requisitos del fuero: 1º Actos que tienen por objeto la navegación y los medios que ele son necesarios; 52. — 2º Navegación internacional o interprovincial; 53. — 3º Que no se trate de juicio universal. 54. — 4º Que el buque esté anclado en la jurisdicción del juez. Además, ver 62. 70.
- DIPLOMÁTICOS. — 94.
- EXTRADICCIÓN. — 82. 100.
- EXTRANJERO. — 6.
- HABEAS CORPUS. — 59. I Texto legal. — 60. II Competencia del Juez Federal. — 61. III Incompetencia originaria de la Suprema Corte.
- IMPUESTOS INTERNOS. — 64.
- IMPUESTOS DE LA CAPITAL. — 41.
- JUICIOS UNIVERSALES. — 40. 53.
- JURISDICCIÓN CONCURRENT. — 57. I Con la Justicia de paz. — 58. II Con la justicia militar.
- JURISDICCIÓN CRIMINAL. — 56. 1º Delitos cometidos en jurisdicción marítima o fluvial; 2º Delitos cometidos en jurisdicción provincial; 3º Delitos cometidos en jurisdicción nacional; 4º Delitos de defraudación; 5º Violación de los reglamentos administrativos. Además, para apelación de causas criminales, 74. 83. 101.
- JURISDICCIÓN ORIGINARIA DE LA SUPREMA CORTE. — 86. Contiendas entre provincias y particulares. — 87. I. El texto de la ley. — II. Requisitos del fuero. — 88. 1º Causas civiles; 2º La provincia debe ser parte. — 89. 3º Derecho originario. — 90. III. Modo de adquirirse la vecindad. — 91. IV Prórroga. Contiendas entre provincia y estado extranjero. 93. — Diplomáticos. 94. — Cónsules. 95. — Revisión de las causas de competencia originaria. 96.
- JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LAS CÁMARAS FEDERALES. 65.
- LEYES PARA LA CAPITAL. 2.
- LEYES MIXTAS. 4.
- LEYES NACIONALES. I. — I. Texto de la ley. 2. — II. Excepciones: 1º Leyes de la Capital, 3. — 2º Códigos. 4. — 3º Leyes mixtas, 4 bis. — Jurisdicciones concurrentes, 5. — Derecho aplicable. Además, 66 bis.
- LA PLATA. 65.
- MUJER ARGENTINA (casada con extranjero). 8.
- NACIÓN. 43. — Causas en que la Nación sea parte como poder pú-



blico. I. Texto de la ley. — 43 bis. II. Requisitos. 1° Actos de poder público; 44. — 2° Venia del Congreso; 3° Venia innecesaria. 45. — Causas en que la Nación sea parte como persona jurídica. I. Texto de la ley. 46. — II. Requisitos del fuero. 1° Que la Nación sea parte; 47. — 2° Reclamación administrativa anterior; 47 bis. — 3° Reclamación administrativa innecesaria; 48. — 4° Acción civil; 48 bis. — 5° Cualquiera que sea la ley sobre que verse.

**NACIONALIDAD.** 6. I. Texto de la ley. 7. — II. Requisitos del fuero: 1° Distinta nacionalidad; 8. — 2° Que se sea siempre argentino: Nacionalidad de la mujer argentina casada con extranjero; Pérdida de la ciudadanía; 9. — 3° Nacionalidad argentina de las personas de existencia ideal; 10. — 4° Causa Civil; 11. — 5° Derecho originario; 12. — 6° Cualquiera que sea el derecho aplicable; 13. — 7° Solidaridad de fuero. III. Sociedades. 14. — 1° Sociedades anónimas argentinas; 15. — 2° Sociedades anónimas extranjeras; 16. — 3° Sociedades colectivas y otras. 17. — IV. Prueba del fuero. 18. — V. Prórroga de Jurisdicción. 19. — Excepciones al fuero. Además, 67.

**ORDENANZAS DE ADUANA.** 63.

**PARANÁ.** 65.

**PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL** (nacionalidad de). 9.

**PRÓRROGA.** — 18. 33. 92.

**PROVINCIA.** — 86. 87. 93.

**PRUEBA DEL FUERO.** — 16. 32.

**RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD** de las sentencias de los jueces federales y letrados de los territorios nacionales. 66 bis, 75. 78.

**RECURSOS DE APELACIÓN Y NULIDAD** de las sentencias de las Cámaras Federales. 97. — I. La Nación como parte. — 98. II. Acciones fiscales. — 99. III. Causas de almirantazgo. — 100. IV. Extradición. — 101. V. Causas criminales.

**RECURSO EXTRAORDINARIO.** I. Texto de la ley. 106. — II. Recaudos del recurso. 107. — 1° Sentencia de tribunales superiores. 107. — a) De última instancia; b) Tribunal que resuelva en última instancia la cuestión federal aun cuando hubiese otra instancia superior para recursos locales; c) Tribunales judiciales. — 2° Sentencia definitiva. 108. — a) Que no dé lugar a recurso alguno; b) Que no deje a salvo la acción invocada; c) Que sea agravante; d) Que no esté consentida. — 3° Fallo denegatorio del derecho federal invocado. 109. — a) Decisión contraria expresa; b) Decisión contraria tácita o falta de decisión. 4° Objeto del pleito. 110. — a) Cuestión litigiosa; b) Cuestión de hecho; c) Cuestión federal. 5° Oportunidad del planteo de la cuestión. 111. — a) Oportunidad; b) Modo de plantear.

**II. PROCEDIMIENTO.** — 1° Interposición del recurso. 112. — a) Término para interponer el recurso; b) Apelación denegada; c) Ejecu-



- ción de la sentencia. — 2º Substanciación del recurso. 112. —  
a) Obligación de fundar el recurso; b) Trámite; c) Resolución.  
RECURSO DE QUEJA POR RETARDO O DENEGACIÓN DE JUSTICIA. 77. 105.  
RECURSO DE REVISIÓN DE LAS CAUSAS DE JURISDICCIÓN ORIGINARIA DE  
LA SUPREMA CORTE. I. Texto de la ley 96. — II. Interposición.  
96 bis. — III. Substanciación. 96 ter.  
RECURSO DE REVISIÓN. — I. Sentencias que originan el recurso. 102. —  
II. Hechos que fundan el recurso. 103. — Véase, además, 84 y 96.  
ROSARIO DE SANTA FE. — 65.  
SOCIEDADES. — 14. 28.  
SUPREMA CORTE. — Tercera instancia. 97. — I. La Nación como parte.  
II. Acciones fiscales. 98. — III. Causas de almirantazgo. 99.  
IV. Extradición. 100. — V. Causas criminales. 101. — Véase  
Jurisdicción originaria.  
TRATADOS. — Véase Leyes Nacionales.  
VICECÓNSULES. — Véase Cónsules.  
VECINDAD. — 20. I. Texto de la ley. 21. — II. Derecho aplicable. —  
22. — Requisitos del fuero: 1º Vecinos argentinos; 23. — 2º  
Demanda ante juez de distinta vecindad; 24. — 3º Causa Civil;  
25. — 4º Derecho originario; 26. — 5º Cualquiera que sea el  
derecho aplicable; 27. — 6º Solidaridad de fuero. — IV. Socie-  
dades. 28. — 1º Sociedades anónimas; 29. — 2º Sociedades co-  
lectivas y otras. 30. — V. Modos de adquirirse la vecindad. 31. —  
VI. Excepciones al fuero. 32. — VII. Prueba del fuero. 33. —  
Prórroga. — Véase además, 67.  
VECINO. — 20.  
VENIA DEL CONGRESO. — 44.  
VIOLACIÓN DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. 74.

# ÍNDICE DE TEXTOS LEGALES



## Constitución Nacional

ARTÍCULOS	NÚMEROS	ARTÍCULOS	NÚMEROS
67—11º .....	3, 110.	101 .....	61.
100 .....	3.		

## Ley n° 27

ARTÍCULOS	NÚMEROS	ARTÍCULOS	NÚMEROS
2 .....	110.	7—3º .....	96.
4 .....	21.		

## Ley n° 48

ARTÍCULOS	NÚMEROS	ARTÍCULOS	NÚMEROS
1 .....	61.	3—3º .....	55, 74.
1—1º .....	86, 87.	3—4º .....	55.
1—2º .....	93.	5 .....	62.
1—3º .....	94.	7 .....	58.
1—4º .....	95.	8 .....	10, 25.
2—1º .....	1, 66 bis.	9 .....	14, 28, 70.
2—2º .....	6, 20, 67. .	10 .....	13, 16, 27, 29.
2—3º .....	34, 68.	11 .....	30, 91.
2—4º .....	37, 69	12—1º .....	19, 31, 40
2—5º .....	39, 72, 74, 56.	12—2º .....	42.
2—6º .....	43, 70.	12—3º .....	55.
2—8º .....	50, 71.	12—4º .....	18, 33, 92.
2—9º .....	50, 71.	14 .....	106.
2—10º .....	50, 71 y la nota nº 3	15 .....	110, 111, 112.
3 .....	55, 73.	16 .....	112.
3—1º .....	55.	20 .....	50, 60.
3—2º .....	55, 74.	21 .....	3.



### Ley n° 50

ARTÍCULOS	NÚMEROS	ARTÍCULOS	NÚMEROS
2 .....	17. 32.	243 .....	96 bis.
208, 229, 231 .....	112.	244 .....	96 bis.
232 .....	96.	245 .....	96 bis.
241 .....	96.	246 .....	96 ter.
242 .....	96.		

### Ley n° 927

ARTÍCULOS	NÚMEROS
I .....	4 bis. 57.

### Ley n° 1467

ARTÍCULOS	ARTÍCULOS
I .....	25, 67, 87, 90.

### Ley n° 1532

ARTÍCULOS	NÚMEROS
42 .....	76.

### Ley n° 1893

ARTÍCULOS	NÚMEROS	ARTÍCULOS	NÚMEROS
III—1° .....	2.	III—5° .....	41, 48 bis, 56, 98.
III—2° .....	20. 67.	III—7° .....	49. 50, 71.

### Ley n° 3764

ARTÍCULOS	NÚMEROS
27 .....	64.
29 .....	64.



### Ley n° 3952

ARTÍCULOS	NÚMEROS	ARTÍCULOS	NÚMEROS
1 .....	45, 48, 78.	2 .....	47.
1 (infine) .....	97.	6 .....	113.

### Ley n° 4055

ARTÍCULOS	NÚMEROS	ARTÍCULOS	NÚMEROS
3 .....	70 (la nota 3), 78, 97.	6 .....	83, 106, 110.
3—1° .....	79.	7 .....	112.
3—2° .....	70, 80, 81, 97, 98, 74.	8 .....	112.
3—3° .....	99, 74.	9 .....	114.
3—4° .....	81, 100.	12 .....	65, 75.
3—5° .....	74, 83, 101.	16 .....	70 (la nota 1), 78, 112.
5 .....	105.	17—2° .....	66 bis, 75.
4 .....	84, 102.	17—3° .....	67, 77.
		19 .....	85.

### Ley n° 7055

ARTÍCULOS	NÚMEROS
1 .....	101, 74.

### Ley n° 7099

ARTÍCULOS	NÚMEROS
1 .....	65.

### Código de Procedimientos en lo criminal de la Capital

ARTÍCULOS	NÚMEROS	ARTÍCULOS	NÚMEROS
551 .....	84, 102, 103.	617 .....	60.
553 .....	104.	618 .....	60.

### Ordenanzas de Aduana

ARTÍCULOS	NÚMEROS
1063 .....	63.





# ADVERTENCIA SOBRE EL MANEJO Y CONTENIDO DEL LIBRO

Las leyes que versan sobre la jurisdicción de los tribunales federales, adolecen del defecto de la mayoría de nuestras leyes: carecen de orden y método.

## LEYES SOBRE JURISDICCIÓN

Es así que los letrados se pierden en la busca de disposiciones dispersas en distintos textos: tal modifica un precepto legal adoptado anteriormente cuando no la deroga implícitamente, otras son adicionales o establecen una concordancia útil.

Este libro ha sido hecho para poner bajo los ojos del lector, el cuadro completo de la jurisdicción, evitando los inconvenientes apuntados. En una palabra, se han metodizado, glosado, adicionado y concordado las leyes, presentándolas en un texto único.

## LAS INSTANCIAS

La misma confusión se observa, cuando se quiere saber el número de instancias que ha de recorrer el pleito, vg: si la segunda instancia de la Cámara Federal es la definitiva o si la Suprema Corte conocerá en tercera instancia.

### RECURSO EXTRAORDINARIO

El libro se ocupa de él, tocando todas las cuestiones que se han promovido en la Corte, relativas a la procedencia y a la substanciación del recurso.

Han sido ordenadas prolijamente, nominándose cada una de ellas, método que se sigue en todo el libro.

### JURISPRUDENCIA

El texto está comentado por los fallos más fundamentales y reiterados de la Suprema Corte, escrupulosamente seleccionados y fechados. Se ha tenido el cuidado de no cargar el libro con fallos repetidos, habiéndose elegido los más demostrativos. Sólo a título de ejemplo, se citan algunos otros consagrados a aplicaciones particulares de los principios generales, y estos mismos no se hallan repetidos.

Se ha tratado de hacer un libro de derecho andante, valga la expresión, en el sentido de que se tocan exclusivamente las cuestiones prácticas.

### TRANSCRIPCIÓN DE LAS LEYES

A fin de que el lector tenga un volumen completo de derecho federal, se vuelven a transcribir por separado y en el ordenamiento originario de sus artículos, las leyes de jurisdicción, los artículos pertinentes de la Constitución Nacional y de la ley de Organización de los Tribunales de la Capital, agregándose la ley de Procedimiento de los Tribunales Nacionales con todas las adicionales y modificatorias.

## LOS INDICES

Tres índices contiene el libro: uno de materias, otro alfabético y el tercero de textos legales.

---

En síntesis, la línea general del libro es la siguiente:

### JUEZ FEDERAL

I. Conocimiento en primera instancia.

II. Conocimiento en segunda instancia.

(Se estudia la jurisdicción de los tribunales federales, al mismo tiempo que las instancias).

### CÁMARA FEDERAL

I. Conocimiento en segunda y última instancia.

II. Conocimiento en segunda instancia preparatoria de la tercera instancia de la Suprema Corte.

III. Conocimiento en cuestiones de competencia.

(Trata de las instancias).

### SUPREMA CORTE

I. Conocimiento en única instancia (Jurisdicción originaria).

II. Conocimiento en tercera instancia.

III. Conocimiento en instancia extraordinaria (Recurso extraordinario).

IV. Conocimiento en consulta.

V. Conocimiento en cuestiones de competencia.

(Trata de las instancias y de la jurisdicción).



## PRIMERA PARTE

### **Codificación de las leyes sobre organización e instancias de los tribunales nacionales**



SECCIÓN I

JUEZ FEDERAL





## CAPITULO I

### CONOCIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA

#### CONSTITUCION Y LEYES NACIONALES

##### I. — TEXTO DE LA LEY

**1. —** Los jueces nacionales de sección conocerán en primera instancia las causas que sean especialmente regidas por:

- 1° La Constitución Nacional;
- 2° Los tratados públicos con naciones extranjeras;
- 3° Las leyes que haya sancionado el Congreso;
- 4° Las leyes que sancionare el Congreso.

(Desdoblamiento del inciso 1° del art. 2 de la ley 48).

Para que una causa se diga especialmente regida por la constitución, las leyes sancionadas y que sancione el Congreso y los tratados públicos con naciones extranjeras y haga precedente la jurisdicción federal, es necesario que el derecho que se pretende hacer valer esté directa e inmediatamente fundado en los mismos. (*Suprema Corte Nacional*, T. 55, pág. 114. Marzo 3 de 1894).

La competencia de los tribunales nacionales por razón de la materia depende del hecho y no de las leyes que se invocan por las partes. (*Suprema Corte Nacional*, fallos T. 103, pág. 331, Febrero 20 de 1906).

## II. — EXCEPCIONES

### 2. — Se exceptúan:

1º Las leyes que se refieran al gobierno y administración de la Capital Federal. (Modificación de la ley número 1893, artículo 111, inciso 1º). Esta excepción no se aplica cuando se demanda a la Nación. (Véase demandas contra la Nación, nº 45).

3. — 2º Los Códigos, Civil, Comercial, Penal y de Minería, cuya aplicación corresponde a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. (Glosa de los arts. 100 y 67—11º, de la Constitución Nacional). Y por consiguiente, de las leyes modificatorias de esos códigos, ley de matrimonio, de accidentes del trabajo, de quiebras y de reformas al Código Penal.

No obstante, corresponde a la justicia federal el conocimiento de las demandas contra los ferrocarriles por daños y perjuicios procedentes de incendios causados por el fuego de sus locomotoras (*Suprema Corte Nacional*, fallo muy fundado, T. 41, pág. 260, Diciembre 2 de 1890), aun cuando esas demandas se funden en las disposiciones pertinentes del Código Civil.

También corresponde a la justicia federal, el conocimiento de una demanda por indemnización de daños y perjuicios, contra un ferrocarril, que tiene su fundamento y se basa en he-

chos de culpa atribuidos a los empleados de la empresa y en las disposiciones de la ley de ferrocarriles y decreto reglamentario de la misma, aun cuando el caso entrañe o pueda suscitar cuestiones que deban regirse puramente por los principios del derecho común, pues tales cuestiones deben resolverse como incidentales. (*Suprema Corte Nacional*, fallo muy fundado, T. 96, pág. 366, Noviembre 18 de 1902).

Esta jurisprudencia es muy resistida.

Puede verse en un fallo análogo de la Cámara Federal de la Capital, las disidencias de los doctores Matienzo y Arias. ("Gaceta del Foro", fallo n° 139, Noviembre 21 de 1917, página 133).

Esas disidencias se fundan en que el derecho invocado, no emana de una ley del Congreso, sino del Código Civil, citándose en apoyo una jurisprudencia de la Corte que establece, que no basta que una ley emane del Congreso para que su aplicación corresponda privativamente a los tribunales federales, sino que es menester también, que la materia sea de carácter federal. (Fallo de la *Suprema Corte Nacional*, interpretando la ley de defensa social, T. 113, pág. 263, Agosto 9 de 1910).

4. — 3° Las leyes mixtas. — La Cámara Federal ha declarado que la ley nacional n° 3972 sobre falsificación de moneda y billetes de banco es mixta de derecho federal y de derecho común, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o a los provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, aplicando la doctrina de la Corte, expuesta en la jurisprudencia transcrita en el número anterior. (Véase además en el n° 56, jurisprudencia relativa a la ley de papel sellado).

### III. — JURISDICCIÓN NO CONCURRENTE

4 (bis). — Corresponde a la justicia nacional el conocimiento de una demanda sobre daños y perjuicios causados por la demora en la entrega de un equipaje, puesto que las obligaciones de las empresas ferroviarias, relativas a los equipajes de los viajeros, están regidas por la ley general de ferrocarriles. En este caso no es concurrente la jurisdicción, sino privativa de los tribunales federales, porque se trata de interpretar una ley especial del Congreso, careciendo de aplicación la disposición del art. 1º de la ley 927. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 125, página 81, Febrero 8 de 1917).

La disposición citada atribuye a la Justicia de Paz, el conocimiento de las causas en las que el valor del objeto demandado no exceda de quinientos pesos fuertes, cuando por otra parte, el caso caiga bajo la jurisdicción de esa justicia, según las leyes de procedimientos vigentes en las provincias.

### IV. — DERECHO APLICABLE

5. — Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento, en el orden de prelación que va establecido. (Ley núm. 48, art. 21.).

## NACIONALIDAD

### I. — TEXTO DE LA LEY

6. — Los jueces nacionales de sección, conocerán en primera instancia en las causas civiles en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero. (Ley 48, art. 2 - 2°).

### II. — REQUISITOS DEL FUERO

7. — 1° DISTINTA NACIONALIDAD. — El pleito debe trabarse entre argentino y extranjero. Si ambos litigantes son extranjeros, la justicia federal es incompetente, a menos que exista otra razón que determine el fuero. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. I, pág. 451. Marzo 4 de 1865).

8. — 2° QUE SE SEA SIEMPRE ARGENTINO. — A) *Nacionalidad de la mujer argentina casada con extranjero.* — Puede darse el caso de que la persona demandada sea argentina originariamente y no obstante se le repute extranjera a los efectos del fuero. Por eso, en la demanda promovida ante tribunales locales por un argentino contra una argentina casada con un extranjero, procede la excepción de incompetencia que éste oponga, invocando el fuero federal por la

diversa nacionalidad de las partes. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 95, pág. 122, junio 12 de 1902).

Los fundamentos del fallo son los siguientes:

"El marido es quien tiene a su cargo la defensa judicial de los derechos de la mujer, haciendo en su salvaguardia los gastos judiciales que fuesen necesarios, y ya que pertenecen a la sociedad conyugal como gananciales, los frutos naturales o civiles de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, percibidos durante el matrimonio o pendientes al tiempo de concluirse la sociedad, la comunidad de intereses entre marido y mujer resulta evidente. En esa situación, que comporta una vinculación tan estrecha entre marido y mujer en lo que toca al patrimonio, la unidad de jurisdicción se impone, cuando, esa jurisdicción se basa en razón derivada de la distinta nacionalidad o vecindad de los litigantes, no habiendo controversia respecto de la última de esas situaciones desde que la mujer tiene el domicilio del marido. (Art. 90, inc. 9 del Cod. Civil).

Tratándose de bienes de la sociedad conyugal y no estando ésta separada, debe tenerse en consideración la nacionalidad del marido para determinar la competencia. (*Suprema Corte Nacional*, Fallos, T. 15, pág. 233, 11 de agosto de 1874).

La readquisición de la nacionalidad a los efectos del fuero, se produce si falleciere el marido. (Fallo de la *Cámara 1ª de Apelaciones* de La Plata. Revista de Legislación y Jurisprudencia, T. III, pág. 463, Sep. 13|1913).

B. *Pérdida de la ciudadanía*. — La pérdida de la ciudadanía, puede influir en la determinación del fuero. Así, el extranjero que no se hubiere enrolado dentro del plazo fijado por la ley N° 8129, pierde irremisiblemente la ciudadanía que hubiere obtenido y no podrá entonces hacer valer su naturalización para reclamar el fuero federal en juicio contra extranjero. (*Cámara de Comercio*, "Gaceta del Foro", pág. 12, fallo núm. 18. Noviembre 3 de 1916).

9. — NACIONALIDAD ARGENTINA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL. — La jurisprudencia ha decidido, que ciertas corporaciones debe equipararse a los ciudadanos argentinos.

Las municipalidades argentinas, son consideradas a los efectos del fuero, como personas de nacionalidad argentina. Los contratos de venta hechos por una municipalidad pueden ser traídos ante la justicia federal, para su cumplimiento, aunque haya procedido a hacerlos en virtud de sus facultades administrativas. (*Suprema Corte Nacional*, fallos T. 43, pág. 46, Marzo 14 de 1891).

Litigando el Banco oficial de una provincia, declaró la Suprema Corte, que corresponde a los jueces federales, el conocimiento de las causas en que la parte demandada es extranjera y la demandante un Banco, que a los efectos del fuero es argentino. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 91, pág. 132, Julio 20 de 1901).

10. — 4º CAUSA CIVIL O COMERCIAL. — No importa la naturaleza de la acción, ya se trate de una acción real o de una personal, pues la ley se refiere a toda clase de causas civiles, sin hacer distinción entre las que versan sobre derechos reales o personales. (Doctrina de la *Suprema Corte Nacional*, T. 42, página 148 sobre condominio, Febrero 7 de 1891. T. 125, página 295, Mayo 19 de 1917, sobre acción negatoria de servidumbre).

11. — 5º DERECHO ORIGINARIO. — En las causas entre un ciudadano y un extranjero, para que surta el fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa pertenezca originariamente, y no por cesión o mandato, a ciudadanos y extranjeros. (Ley 48, art. 8).

Por lo tanto, no corresponde al conocimiento de la justicia



federal la causa entre dos extranjeros, aunque uno de ellos sea cesionario de un argentino. (*Suprema Corte Nacional*, T. 71, pág. 352, Diciembre 18 de 1897).

Y aún, cuando el pleito se trabare entre extranjero y argentino, no corresponde al fuero federal por razón de las personas, si las acciones deducidas por el extranjero contra el argentino, se hacen valer en calidad de cesionario de otra persona de nacionalidad argentina. (*Suprema Corte Nacional*, T. 97, pág. 284, abril 2 de 1903).

No se considera cesión, el endoso que contiene todos los requisitos exigidos por el art. 626 (perfecto) del Código de Comercio, en cuyo caso, transfiere la propiedad de la letra o documento endosable y no es de aplicación entonces lo dispuesto en el art. 8 de la ley de jurisdicción nacional. (*Suprema Corte Nacional*, T. 95, pág. 233, Junio 28 de 1902).

**12. — 6º CUALQUIERA QUE SEA EL DERECHO A APLICARSE.** (Aplíquese por analogía la jurisprudencia transcripta en el nº 26).

**13. — 7º SOLIDARIDAD DE FUERO. —** En las sociedades colectivas, y en general, en todos los casos en que dos o más personas asignables pretendan ejercer una acción solidaria, o sean demandadas por una obligación solidaria, para que caigan bajo la jurisdicción federal, se atenderá a la nacionalidad de todos los miembros de la sociedad o comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tenga el derecho de demandar o pueda ser demandado ante los tribunales federales con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2º del art. 2 de esta ley número 48, es decir, con arreglo a lo establecido en este parágrafo II que versa sobre el fuero por razón de la distinta nacionalidad. (Ley 48, art. 10). De acuerdo con lo que dispone el artículo anterior, la justicia federal no es

competente para entender en la ejecución de un pagaré a la orden firmado por dos personas, respecto de una de las cuales no corresponde el fuero nacional. (*Suprema Corte Nacional*, T. 49, pág. 198, octubre 8 de 1890).

### III. — SOCIEDADES

**14. — 1° SOCIEDADES ANÓNIMAS ARGENTINAS.**—Las corporaciones anónimas creadas y haciendo sus negocios en una provincia serán reputadas, para los efectos del fuero, como ciudadanos vecinos de la provincia en que se hallen establecidas, cualquiera que sea la nacionalidad de sus socios actuales. (Ley número 48, art. 9).

Las sociedades anónimas no tienen nacionalidad extranjera a los efectos del fuero. (*Suprema Corte Nacional*, T. 21, pág. 433, Septiembre 4 de 1879).

**15. — 2° SOCIEDADES ANÓNIMAS EXTRANJERAS.**—Una sociedad constituida y domiciliada en el extranjero, donde ha formado su capital y celebra sus asambleas de socios, y funciona en el país autorizada por un decreto del Poder Ejecutivo, debe considerarse extranjera, y por tanto no corresponde al fuero federal, el conocimiento de una causa en que son parte una sociedad en esas condiciones y un extranjero. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos T. 102, pág. 153. Interpretación de la ley n° 3528, Julio 20 de 1905. Votaron en disidencia los doctores Bermejo y Daract).

**16. — 3° SOCIEDADES COLECTIVAS Y OTRAS.**—En la sociedades colectivas, y en general en todos los casos en que dos o más personas asignables pretendan ejercer una acción solidaria, o sean demandadas por una obligación solidaria, para que caigan bajo la jurisdicción federal, se atenderá a la nacionalidad

de todos los miembros de la sociedad o comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tenga el derecho de demandar o pueda ser demandado ante los tribunales nacionales, (Ley número 48, art. 10) siempre que se encuentren reunidos los requisitos que determinan el fuero, enumerados en este párrafo que trata de la Nacionalidad.

Para que una causa iniciada por un extranjero contra una sociedad comanditaria corresponda a la justicia nacional, es necesario que se pruebe la nacionalidad argentina de todos los miembros de la sociedad. (*Suprema Corte Nacional*, T. 17, pág. 168, Febrero 15 de 1876).

#### IV. — PRUEBA DEL FUERO

17.—Siempre que un ciudadano demande a un extranjero o un extranjero demande a un ciudadano, el demandante deberá presentar con la demanda documentos o informaciones que acrediten que el caso entra en la jurisdicción nacional. (Ley número 50, art. 2, su parte pertinente).

Por supuesto que al que alega la incompetencia por razón del fuero, corresponde la prueba sobre la nacionalidad de ambos litigantes. (*Cámara Civil*, fallos T. 141, pág. 16, Mayo 1º de 1902).

La nacionalidad, a los efectos de la competencia por razón del fuero, puede ser justificada por testigos. (*Cámara Civil*, T. 143, pág. 120, Junio 17/902. *Cámara de Comercio*, Gaceta del Foro, Mayo 8 de 1918, pág. 55, fallo 65).

#### V. — PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN

18. — Cuando siendo demandado el extranjero, conteste la demanda, sin oponer la excepción de declinatoria, se enten-

derá que la jurisdicción ha sido prorrogada, y la causa se substarciará y decidirá por los tribunales provinciales; y no podrá ser traída a la jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el artículo 14, es decir, el recurso extraordinario, (Ley 48, art. 12 - 4°).

Habiendo sido establecido en favor del extranjero, el fuero federal por razón de la distinta nacionalidad, puede renunciarlo, pero si litiga contra un ciudadano, no puede renunciar el fuero federal, sino en caso de ser demandante. (*Suprema Corte Nacional*, T. 24, pág. 389, Octubre 7 de 1882).

Siendo potestativa del extranjero la jurisdicción federal, el ciudadano demandado no puede excepcionarse por incompetencia de los tribunales ordinarios. (*Cámara Civil*, T. 48, pág. 159, octubre 1° 1892).

Si no se interpuso en tiempo la excepción de incompetencia en el juicio ejecutivo, el juez que ha conocido en éste, es competente para conocer en el juicio ordinario que se funde en el art. 500 del Código de Procedimientos de la Capital, porque en este caso el juicio ordinario viene a ser la consecuencia del juicio ejecutivo. (*Suprema Corte Nacional*, T. 123, pág. 138 Mayo 9|916).

La prórroga no tiene lugar, cuando el fuero federal procede por razón de la materia. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 70, pág. 23, Septiembre 21|1897).

## VI. — EXCEPCIONES AL FUERO

19. — En todos los juicios universales de concurso de acreedores y partición de herencia, conocerá el juez competente de provincia, cualquiera que fuese la nacionalidad de los directamente interesados en ellos y aunque se deduzcan allí acciones fiscales de la Nación. (Ley 48, art. 12 - 1°).

## VECINDAD

### I. — TEXTO DE LA LEY

**20.** — Los jueces nacionales de sección conocerán en primera instancia las causas civiles en que sean partes:

- 1º Un vecino de la provincia en que se suscite el pleito y un vecino de otra. (Ley número 48, art. 2 - 2º);
- 2º Un vecino de la Capital Federal y el de una provincia. (Adición de la ley número 1893, art. 111 - 2º).

### II. — DERECHO APLICABLE

**21.** — Cuando la justicia federal fuese llamada a juzgar las causas en que sean partes los vecinos de diferentes provincias, lo hará con arreglo a las respectivas leyes provinciales. (Ley nº 27, art. 4).

### III. — REQUISITOS DEL FUERO

**22.** — 1º VECINOS ARGENTINOS. — No basta la distinta vecindad. El fuero federal por razón de la distinta vecindad de las partes, sólo es procedente cuando ambas son argentinas. (*Suprema Corte Nacional*, Fallos, T. I, 452, Marzo 4 de 1865).

Porque como dice el fallo en sus fundamentos, el artículo 100 de la Constitución, distingue los casos en que los litigantes son vecinos de distintas provincias, de aquellos en que el uno es vecino de una provincia y el otro es un ciudadano extranjero, de donde se deduce que la vecindad hace relación a la que tienen los ciudadanos argentinos y no a la residencia de los extranjeros.

**23. — 2º DEMANDA ANTE JUEZ DE DISTINTA VECINDAD.**—El hecho de que exista distinta vecindad entre demandante y demandado, no autoriza en todos los casos el fuero.

Siendo demandado ante sus jueces el vecino de una provincia, corresponde el fuero local, aunque el demandante sea vecino de otra provincia, pues a éste y no a aquél, es a quién corresponde el fuero federal. (*Suprema Corte Nacional*, Fallos, Serie IV, T. 6, pág. 93, Junio 5|894).

**24. — 3º CAUSA CIVIL O COMERCIAL.**—No importa la naturaleza de la acción, ya se trate de una acción real o de una personal, pues la ley se refiere a toda clase de causas civiles, sin hacer distinción entre las que versan sobre derechos reales o personales. (Doctrina de la *Suprema Corte Nacional*, T. 42, pág. 148, sobre condominio, Febrero 7 de 1891 y "Gaceta del Foro", bimestre Mayo-Junio de 1917, pág. 145, fallo nº 211 Mayo 19 de 1917, sobre acción negatoria).

La justicia federal es competente para conocer en la demanda civil entre una Municipalidad de provincia y un vecino de la Capital. No obsta el ejercicio de esta jurisdicción, el carácter de contencioso-administrativo que se atribuya a la demanda, ni la disposición de la Constitución y leyes locales que crean para esa clase de demandas un fuero especial. (*Suprema Corte Nacional*, T. 46, pág. 389, Noviembre 19 de 1891).

**25. — 4º DERECHO ORIGINARIO.** — Para que surta el fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa pertenezca originariamente, y no por cesión o mandato:

1º A los vecinos de diversas provincias (concordancia de la ley número 48, art. 8) ;

2º A los vecinos de la Capital Federal y de provincias.

(Adición de la ley número 1467, artículo 1).

**26. — 5º CUALQUIERA QUE SEA EL DERECHO APLICABLE.**—

Por eso la Suprema Corte ha establecido, que aun cuando el contrato de transporte por un ferrocarril se encuentre legislado por el Código de Comercio, es competente la justicia federal para entender en la controversia, cuando se trata de vecinos de distinta provincia, ambos argentinos. (Fallos T. 113, pág. 235, Julio 19 de 1910). Este fallo ha sido repetido en una causa por devolución de fletes y pago de daños y perjuicios por retardo en la entrega de una carga, acción deducida por un argentino vecino de una provincia contra un ferrocarril cuya administración principal se halla en la Capital Federal. (Fallos T. 125, página 397, Julio 14 de 1917).

Según la doctrina de la Corte, el Código de Comercio (art. 205), al deferir el conocimiento de las cuestiones sobre cumplimiento de un contrato de transporte por ferrocarril, a la autoridad judicial del lugar en que se encuentra la estación de partida o la de su arribo, se ha referido y se refiere, a la autoridad judicial local dentro del orden jurisdiccional establecido por la Constitución y leyes orgánicas, que no ha podido ni entendido revocar.

**27. — 6º SOLIDARIDAD DE FUERO.** — En las sociedades colectivas y en general en todos los casos en que dos o más personas asignables pretendan ejercer una acción solidaria o sean demandadas por una obligación solidaria, para que caigan bajo

la jurisdicción nacional, se atenderá a la vecindad de todos los miembros de la sociedad o comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tenga el derecho de demandar o pueda ser demandado ante los tribunales nacionales, con arreglo a este párrafo III que versa sobre el fuero por razón de la distinta nacionalidad. (Ley número 48, art. 10).

Siendo así, no corresponde al fuero federal por razón de las personas, la causa en que uno de los demandados es de la misma vecindad que los demandantes. (*Suprema Corte Nacional*, T. 86, pág. 160, Julio 17 de 1900). Como dice este fallo en su fundamento, es necesario que sea parte en la causa, un vecino de la provincia donde se suscite el pleito y un vecino de otra.

#### IV. — SOCIEDADES

**28. — SOCIEDADES ANÓNIMAS.**—Las corporaciones anónimas creadas y haciendo sus negocios en una provincia, serán reputadas para los efectos del fuero, como ciudadanos vecinos de la provincia en que se hallen establecidas, cualquiera que sea la nacionalidad de sus socios actuales. (Ley número 48, art. 9). Por eso, el Ferrocarril del Sud, es reputado como ciudadano argentino y vecino de la capital de la República, y si el demandado es vecino de la provincia de Buenos Aires, surge el fuero federal por razón de la diversa vecindad si es argentino, o de la distinta nacionalidad, si es extranjero. (*Suprema Corte Nacional*, T. 96, pág. 274, octubre 14 de 1902).

**29. — SOCIEDADES COLECTIVAS Y OTRAS.** — Las sociedades son equiparadas a las personas a los efectos del fuero por razón de la diversa vecindad de las partes; como se ha dicho, en el número 6 del párrafo anterior, para que surta el fuero, se



atenderá a la vecindad de todos los miembros de la sociedad o comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tenga el derecho de demandar o pueda ser demandado ante los tribunales nacionales (Ley número 48, art. 10), siempre que se encuentren reunidos los requisitos que determinan el fuero, enumerado en este párrafo, que trata de la Vecindad. Así, por ejemplo, no corresponde el fuero federal, por razón de personas, si el demandante es extranjero y el demandado es una sociedad de que forman parte socios argentinos y extranjeros; la distinta vecindad concierne solamente a los argentinos. (*Suprema Corte Nacional*, T. 89, pág. 102, Noviembre 27 de 1900). En cambio, compete al juez federal, el conocimiento de un juicio contra una sociedad argentina iniciado por otra sociedad compuesta de dos socios, de los cuales uno es extranjero y el otro vecino de otra Provincia que la del domicilio de la compañía demandada.

#### V. — MODOS DE ADQUIRIRSE LA VECINDAD

30. — La vecindad en una provincia se adquirirá, para los efectos del fuero:

1º Por la residencia continua de dos años. (Ley número 48, artículo 11). Las funciones públicas, puramente accidentales, como las de los representantes ante las legislaturas del país, no causan residencia. La residencia a los efectos del fuero, no debe registrarse por el derecho común, sino por la Constitución y las leyes nacionales. Las disposiciones del Código Civil deben tenerse en cuenta como doctrinas concordantes. (*Suprema Corte de Justicia*. T. 109, pág. 446, septiembre 15 de 1908.)

2º Por tener en ella propiedades raíces. (Ley número 48, artículo 11). No basta ser propietario de un bien raíz en una provincia para ser vecino de ella, porque la vecindad en un lu-

gar supone la residencia en el mismo y no puede admitirse que una persona pueda ser vecino de varias provincias a la vez, por residir en una, tener en otra bienes raíces y en una tercera un establecimiento de industria o de comercio; se requiere el ánimo de permanecer. (*Suprema Corte Nacional*, fallos T. 118, página 236, diciembre 20 de 1913).

3° Por tener en ella un establecimiento de industria o de comercio. (Ley 48, artículo 11). Véase la jurisprudencia transcrita en el inciso anterior.

4° Por hallarse establecido de modo que aparezca el ánimo de permanecer. (Ley número 48, artículo 11).

#### VI. — EXCEPCIONES AL FUERO

31. — En todos los juicios universales de concurso de acreedores y partición de herencia, conocerá el juez competente de provincia, cualquiera que fuese la vecindad de los directamente interesados en ellos, y aunque se deduzcan allí acciones fiscales de la Nación. (Ley n° 48, artículo 12 - 1°).

#### VII. — PRUEBA DEL FUERO

32. — Siempre que el vecino de una provincia demande al vecino de otra, el demandante deberá presentar con la demanda, documentos o informaciones que acrediten que el caso entra en la jurisdicción nacional. (Ley n° 50, art. 2).

#### VIII. — PRÓRROGA

33. — Siempre que en pleito civil el vecino de una provincia demande al vecino de otra ante un juez o tribunal de pro-

vincia, o cuando siendo demandado el vecino de otra provincia, conteste a la demanda, sin oponer la excepción de declinatoria, se entenderá que la jurisdicción ha sido prorrogada la causa se substanciará y decidirá por los tribunales provinciales; y no podrá ser traída a la jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo el recurso extraordinario. (Ley número 48, artículo 12 - 4º).

## NEGOCIOS DE CONSULES Y VICECONSULES

### I. — TEXTO DE LA LEY

**34.** — Los jueces nacionales de sección conocerán en primera instancia, en las causas que versen sobre los negocios particulares de un cónsul o vicecónsul extranjero. (Ley número 48, art. 2 - 3°).

### II. — REQUISITOS DEL FUERO

**35.** — 1° NEGOCIOS PARTICULARES. — Esto es, ya sean asuntos civiles, comerciales o criminales. La generalidad de los términos, — dice el fallo que citamos, — en que se halla redactado el inciso tercero del artículo segundo de la ley N° 48, demuestra que el propósito de ella ha sido el de atribuir a la justicia federal el conocimiento de las causas, ya se trate de asuntos civiles o criminales. (*Suprema Corte Nacional*, fallos T. 10, pág. 324, Agosto 10 de 1871).

Así, una causa por daños y perjuicios contra un cónsul extranjero, corresponde a la justicia federal (*Suprema Corte Nacional*, T. 102, pág. 107, Junio 27|905), como también, la cau-

sa de divorcio en que es parte. (*Suprema Corte Nacional*, T. 70, pág. 298, Octubre 23 de 1897).

**36.** — 2º PRIVILEGIOS Y EXENCIONES INHERENTES A SU CARÁCTER PÚBLICO. — Dan origen a la jurisdicción originaria de la Suprema Corte.

## ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL

### TEXTO DE LA LEY

**37.** — Los jueces nacionales de sección conocerán en primera instancia, en todo pleito que se inicie entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del gobierno nacional. (Ley 48, art. 2, inc. 4º).

### II. — REQUISITOS DEL FUERO

**38.**—1º PLEITO ENTRE PARTICULARES.—Los tribunales nacionales no son competentes en las causas contra los empleados del gobierno nacional por sus actos administrativos, en lo que dependen solamente del gobierno. (*Suprema Corte Nacional*, T. 12, pág. 462, Diciembre 3 de 1872).

2º ACTOS ADMINISTRATIVOS. — Deben servir de fundamento inmediato y directo a las acciones y excepciones entabladas o alegadas en los respectivos pleitos. (*Suprema Corte Nacional*, T. 102, pág. 53, Junio 6 de 1905).

## ACCIONES FISCALES

### I. — TEXTO DE LEY

**39.** — Los jueces nacionales de sección conocerán en primera instancia, en toda acción fiscal contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades debidas o por cumplimiento de contratos. (Ley 48, art. 2, inc. 5°).

### II. — EXCEPCIONES

Esta regla tiene las siguientes excepciones:

**40.** — 1° JUICIOS UNIVERSALES. — En todos los juicios universales de concurso de acreedores y partición de herencia, conocerá el juez competente de provincia, aunque se deduzcan allí acciones fiscales. (Ley 48, art. 12, inc. 1°).

**41.** — 2° ACCIONES FISCALES RELATIVAS A LAS RENTAS O IMPUESTOS DE LA CAPITAL FEDERAL. — Tampoco son de la competencia del juez federal las acciones fiscales por cobro de impuestos que sean exclusivamente para la Capital y no generales para la Nación. (Modificación de la ley 1893, art. III, inc. 5°).

**42.** — 3° LUGARES DONDE NO SE HA ESTABLECIDO JUEZ FEDERAL. En los lugares en que no se haya establecido jueces de sección o se halle distante la residencia de éstos, los fiscales o colectores de rentas o individuos comisionados al efecto, podrán demandar a los deudores del fisco ante los jueces de pro-

vincia. (Concordancia de la ley número 48, artículo 12, inciso 2º).

## CAUSAS EN QUE LA NACION SEA PARTE COMO PODER PUBLICO O PERSONA DE DERECHO PUBLICO.—

### I. — TEXTO DE LA LEY

**43.**— Los jueces nacionales de sección conocerán en primera instancia en todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas, sea parte. (Ley 48, art. 2-6º).

### II. — REQUISITOS

**43 bis.** — 1º ACTOS DE PODER PÚBLICO. Cuando la Nación por medio de sus poderes organizados al efecto, dicta leyes creando impuestos y determinando la forma de su percepción, o reglamenta, con ese objeto, el ejercicio de una industria y pone en ejecución esas leyes, no procede en el carácter de persona jurídica o de derecho privado: en consecuencia, la demanda por daños y perjuicios contra la Nación, derivados del cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de una ley sobre impuestos, no entra en los términos de la ley sobre demandas contra la Nación, número 3952 (*Suprema Corte Nacional*), fallos, T. 100, página 103. Agosto 6 de 1904).

*Derogado* **44.** — 2º VENIA DEL CONGRESO. — Cuando la Nación es demandada en su carácter de Poder Público, se requiere venia del Congreso, puesto que no puede ser llevada a juicio sin

su consentimiento. (*Suprema Corte Nacional*, T. 2, pág. 43, Junio 1° de 1865, con exposición de doctrina y T. 23, pág. 103. Marzo 10 de 1881).

3° VENIA INNECESARIA. El que previa autorización legal ha seguido juicio contra el gobierno nacional, y ha obtenido sentencia declarando su derecho a ser indemnizado, no necesita otra autorización para demandar al gobierno por la liquidación y para la indemnización. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 90, página 58, Marzo 12 de 1901).

## CAUSAS EN LA QUE LA NACION SEA PARTE COMO PERSONA JURIDICA

### I.—TEXTO DE LEY

**45.** — Los jueces nacionales de sección conocerán en primera instancia en las acciones civiles que se deduzcan contra la Nación en su carácter de persona jurídica, sin necesidad de autorización previa legislativa. (Ley 3952, art. 1°).

Debe distinguirse entonces si la Nación ha actuado como poder público o como persona jurídica. La Corte ha resuelto, que cuando la Nación, por medio de sus poderes organizados al efecto, dicta leyes creando impuestos y determinando la forma de su percepción, o reglamenta con ese objeto, el ejercicio de una industria y pone en ejecución esas leyes, no procede en el carácter de persona jurídica o de derecho privado. En consecuencia, la demanda por daños y perjuicios contra la Nación, derivados del cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de una ley sobre impuestos, no entra en los términos de la ley número 3952, sobre demandas contra la Nación.



(*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 100, página 103, Agosto 6 de 1904).

La Nación — ha resuelto también la Corte, — al vender tierra fiscal procede como persona jurídica que realiza un acto legislado por el Código Civil.

No se opone a esta conclusión, el mandato o autorización de vender consignado en la ley, ya se trate de la ley general de 1882, o la especial que autorizó la que ha motivado esta causa, (ley 3683, artículo 8), pues éstas no tienen más objeto que dar a los representantes de la persona ideal, la capacidad de derecho necesaria para realizar ese acto de enajenación, deferido por la Constitución al Poder Legislativo. (Art. 67, inciso 4º de la Constitución Nacional). (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 100, página 326, Octubre 6 de 1904).

## II.—REQUISITOS DEL FUERO

**46. — 1º QUE LA NACIÓN SEA PARTE.** — No basta que la Nación tenga interés en un pleito para que el conocimiento de éste sea de la competencia de la justicia federal, si no que es necesario que ella sea parte en el mismo. Por eso, los Ferrocarriles del Estado son considerados como entidades independientes del Estado, con el que no es posible confundirlos, según reiterada jurisprudencia de la Suprema Corte.

La demanda debe entablarse directamente contra la Nación. Así, no puede promoverse, contra una repartición nacional para la ejecución de un contrato celebrado en representación del gobierno nacional. Es éste y no aquella la obligada por el contrato. (*Suprema Corte Nacional*, T. 15, página 5, Abril 30 de 1874).

**47. — 2º RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA ANTERIOR.**—Pero los jueces no podrán darles curso sin que se acredite haber

precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante el poder ejecutivo y su denegación por parte de éste. (Adición de la ley número 3952, artículo 1).

Pero la reclamación debe de ser denegada por decreto firmado por el Presidente de la Nación y refrendado por el ministro del ramo, y no por un simple decreto ministerial, pues el art. 3 de la ley 3952, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 74 de la Constitución Nacional y el art. 2-6º de la ley 3727, consagran la diferencia entre el P. E. y los Ministerios Nacionales. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 118, página 436, Abril 28 de 1914).

Si la resolución de la administración demorase por más de seis meses después de iniciado el reclamo ante ella, el interesado requerirá el pronto despacho, y si transcurriesen otros tres meses sin producirse dicha resolución, la acción podrá ser llevada directamente ante los tribunales, acreditándose el transcurso de dichos plazos. (Ley número 3952, artículo 2).

La reclamación puede acreditarse por vía judicial, solicitando en la demanda se requiera del P. E. el informe correspondiente (*Cámara Federal*, fallos, T. 4, página 261, Abril 22 de 1903).

**47 bis. — 3º RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA INNECESARIA.**

—Cuando la Nación sea responsable en materia de accidentes del trabajo, podrá ser sometida a la acción judicial sin necesidad de previa reclamación administrativa. (Artículo 28 de la ley 9688 sobre accidentes del trabajo).

**48. — 4º ACCIÓN CIVIL.** — Las acciones civiles contra la Nación, en su carácter de persona jurídica, a que se refiere la ley n° 3952, son las derivadas de la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, en los casos, por el modo y la forma que determina el Código Civil. (*Suprema Corte Nacional*, T. 100, pág. 103, Agosto 6 de 1904).

**48 bis. — 5º CUALQUIERA QUE SEA LA LEY SOBRE QUE VERSE.**  
— La ley 3952 sobre demandas contra la Nación, estatuye sobre los trámites especiales de las acciones civiles que se deduzcan contra la Nación en su carácter de persona jurídica en general, sin establecer que deben llevarse dichas acciones al fuero ordinario cuando se trate de actos de derecho común relacionados con el gobierno y la administración de la capital. Contrayéndose la expresada ley a determinadas relaciones de derecho, no se oponen a ello los incisos 1º del artículo III de la ley núm. 1893 y el 2º del artículo 3 de la ley núm. 4055. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 105, página 313, Noviembre 20 de 1906).

Versaba la causa que acaba de citarse, sobre el cobro de un premio de un billete de la Lotería Nacional, cuya ley ha sido dictada por el Congreso procediendo como legislatura local. El juez federal se declaró incompetente fundándose en que se trataba de la aplicación de una ley local, y que por lo tanto había que atenerse a la excepción del artículo III - 5º de la ley 1893 (*Ley de organización de los tribunales de la Capital*).

El fallo de la Corte revocó la sentencia, declarando, como se vé, la inaplicabilidad de la excepción mencionada.

## CAUSAS DE ALMIRANTAZGO

**49.** — Los jueces nacionales de sección conocerán en todas las causas a que den lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra (Ley n° 1893, art. 111 - 7°).

## DERECHO MARITIMO

### I. — TEXTO DE LA LEY

**50.** — Los jueces nacionales de sección conocerán en las causas siguientes:

1° Las que se originen por choques o averías de buques, o por asaltos hechos, o por auxilios prestados en alta mar, o en los puertos, ríos y mares en que la república tenga su jurisdicción. (Ley 48, artículo 2, inciso 8), y será competente el juez federal de la Capital Federal, si los puertos, ríos y mares, estuvieren más inmediatos a ella. (Ley 1893, artículo 111, inciso 7°).

2° Las que se originen entre los propietarios o interesados de un buque, sea sobre su posesión o sobre su propiedad; (Ley 48, artículo 2, inciso 9).

3° Las que versen sobre la construcción y reparos de un

buque, sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadía; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería simple y gruesa; sobre contratos a la gruesa ventura; sobre pilotajes; sobre embargos de buques o penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandonos, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán y tripulantes, y en general sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo. (Ley 48, artículo 2, inciso 10).

## II.—REQUISITOS DEL FUERO

**51. 1º ACTOS QUE TIENEN POR OBJETO LA NAVEGACIÓN Y LOS MEDIOS QUE LE SON NECESARIOS.** — Son actos y contratos marítimos al objeto de establecer la jurisdicción nacional, todos los que tienen por objeto la navegación y los medios que le son necesarios. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 21, página 433, Septiembre 4 de 1879).

El fallo citado confirmó la seentencia del inferior por sus fundamentos y de acuerdo con el dictamen del procurador general, doctor Eduardo Costa. El doctor Costa sostuvo la siguiente doctrina: Si la jurisdicción nacional hubiera de hacerse extensiva a todos los actos que tienen alguna atingencia con la navegación o los negocios marítimos; no sería posible determinar donde habría de detenerse, pues que todas las transacciones de comercio tienen por origen generalmente la exportación o la importación, operaciones esencialmente marítimas. De admitirlo se anularían por completo las jurisdicciones locales.

El alcance de este criterio ha sido establecido con mayor precisión en un fallo posterior, en el que se declara que un contrato de locación de servicios a prestarse en una agencia de vapores, no debe ventilarse en la jurisdicción federal. En los considerandos dice la Corte: "Es evidente que la regla general contenida en la última parte de ese inciso (art. 10 - 2º de la ley 48) sólo se refiere a hechos de la naturaleza especificados en el mismo" (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 66, página 448, Marzo 4 de 1897).

La regla aludida en el fallo es la siguiente: "Y en general, sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo".

Para reconstruir la doctrina que surge de estos fallos en forma fragmentaria, nos referiremos a otro, en el que la Corte declaró, que el contrato por el cual una persona se compromete a buscar comprador para un buque que se pretende enagenar, corresponde ser juzgado por los tribunales ordinarios. (*Suprema Corte Nacional*, T. 113, página 128, 26 de Abril de 1910).

A nuestro juicio puede concretarse la doctrina, en la siguiente forma: "No son actos y contratos concernientes a la navegación y comercio marítimo, y por lo tanto no corresponden su conocimiento al fuero federal, los que no hayan sido legislados en el libro tercero del Código de Comercio". Y esto es obvio, porque el art. 10 - 2º de la ley 48, no crea relaciones de derecho marítimo. No hace sino enumerarlas.

De acuerdo con esta interpretación, todo lo que no estuviera legislado en el libro tercero del Código de Comercio, no sería de la competencia federal. Así por ejemplo, una causa sobre locación de un buque, correspondería al fuero ordinario (1).

---

(1) Doctrina que sostenemos en una causa pendiente de resolución en la Corte. Boero versus Phillips y Cinollo Vernengo.

Por consecuencia corresponden al conocimiento de la justicia federal:

La demanda por daños y perjuicios que se dicen causados por culpa o negligencia de los empleados del vapor, en el acto de realizar la estiva. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos T. 76, pág. 382, Dic. 6 de 1898).

Las acciones por lanchaje, cuando la descarga de un paquete forma parte del contrato de fletamento. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos T. 20, pág. 156, Mayo 23 de 1878); la nulidad de una sentencia arbitral dictada sobre una cuestión de daños y perjuicios provenientes de un contrato de fletamento. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 13, pág. 344, Junio 14 de 1873), como así, el cobro de precio de artículos vendidos para construcciones navales y reparación de los buques. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 32, pág. 239, Octubre 18 de 1887).

**52. — 2ª NAVEGACIÓN INTERNACIONAL O INTERPROVINCIAL.**

—La jurisdicción federal se refiere a los buques que viajan de un puerto de la república a otro extranjero, o de una provincia a otra. Esa es la navegación que se relaciona con el comercio marítimo. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 6, página 400, Noviembre 10 de 1868). Sólo se extiende a los hechos o contratos concernientes a la navegación y comercio marítimo que se hace entre un puerto de la república y otro extranjero o entre diferentes puertos por los ríos interiores. (*Sup. Corte Nacional*, T. 12, pág. 233, Septiembre 5 de 1872).

No son de la competencia federal:

El conocimiento de las demandas que se refieren a lanchas que se ocupan dentro de un puerto a la descarga de mercaderías. Corresponden a la jurisdicción concurrente de los tribunales de la provincia. (*Sup. Corte Nacional*, T. 6, página 400, Noviembre 10 de 1868); las demandas sobre fletes

de lanchas empleadas en la descarga de buques anclados dentro de puertos (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 12, pág. 233, Septiembre 5 de 1872), ni lo relativo a una sociedad de lanchaje, cuyas embarcaciones han operado dentro de un puerto de la república, pues no son actos de comercio marítimo. (*Sup. Corte Nacional*, T. 53, pág. 224, Agosto 1º de 1893).

La Cámara Federal ha seguido la misma doctrina, estableciendo que es incompetente la justicia nacional para conocer de un juicio por avería o cabotaje, proveniente del transporte efectuado dentro del puerto de la Capital (*Cám. Federal de la Capital*, Fallos, T. 6, pág. 326, Diciembre 7 de 1903).

**53. — 3º QUE NO SE TRATE DE UN JUICIO UNIVERSAL. —** (Aplicación del artículo 12 - 1º, de la ley 48). No corresponde al conocimiento de la justicia federal, una demanda sobre venta de un buque, cuando uno de los copartícipes es una testamentaria no liquidada. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 12, página 216, Agosto 12 de 1872).

**54. — 4º QUE EL BUQUE ESTÉ ANCLADO EN EL LUGAR DE LA JURISDICCIÓN DEL JUEZ. —** El juez federal del lugar donde se encuentre anclado el buque, es competente:

Para conocer en la cuestión que sobre rescisión de contrato de locación de servicios, promuevan los marineros por razón de innavegabilidad del buque, aunque sea otro el puerto de la matrícula y de la terminación del viaje. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 26, pág. 247, Febrero 7 de 1884); para el conocimiento de una causa sobre cesación de condominio de un buque porque la acción es de naturaleza real. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 48, pág. 243, Junio 4 de 1892).



## **CONTRABANDO**

**55.** — Los jueces nacionales de sección conocerán en todas las causas de contrabando. (Ley número 48, art. 3).

## JURISDICCION CRIMINAL

**56.** — Los jueces de sección conocerán igualmente de todas las causas criminales, a saber:

### DELITOS COMETIDOS EN JURISDICCION MARÍTIMA O FLUVIAL

1º Los crímenes cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros, serán juzgados por el juez de sección del primer puerto argentino a que arribase el buque. (Ley 48, art. 3 - 1º).

2º Los crímenes cometidos en los ríos, islas y puertos argentinos serán juzgados por el juez que se halle más inmediato al lugar del hecho, o por aquel en cuya sección se encuentren los criminales, según sea el que prevenga en la causa. (Ley 48, art. 3 - 2º).

DELITOS COMETIDOS EN JURISDICCION PROVINCIAL.—Los crímenes cometidos en el territorio de las provincias en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas, u obstruyan o corrompan el buen servicio de sus empleados o violenten o estorben la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones na-

cionales o representen falsificación de documentos nacionales o de moneda nacional; o de billetes de bancos autorizados por el Congreso, serán juzgados en la sección judicial en que se cometieren. (Ley 48, art. 3 - 3°).

DELITOS COMETIDOS EN JURISDICCIÓN NACIONAL.—Los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, serán juzgados por los jueces de sección allí existentes. (Ley 48, art. 3 - 4°).

La justicia federal es incompetente para entender en el proceso por falsificación de sellos o estampillas nacionales, puesto que la ley de sellos es mixta y no corresponde exclusivamente a los tribunales federales, el conocimiento de la misma. (*Cámara Federal de la Capital*, "Gaceta del Foro", fallo número 244, Julio 31 de 1917 y jurisprudencia reiterada de la Suprema Corte).

Sin embargo, cuando se cometiere un crimen de los enumerados en los incisos anteriores, los jueces de provincia de cualquier categoría, podrán aprehender a los presuntos reos, que pondrán a disposición del juez nacional de sección correspondiente, con la remisión del sumario que hayan levantado para justificar la prisión. (Concordancia de la ley número 48, artículo 12, inciso 3°).

DELITOS DE DEFRAUDACIÓN.—Conocen en todas las causas que versen sobre defraudación de rentas nacionales, (Ley 48, artículo 2, inciso 5°); salvo fueren rentas exclusivamente para la Capital Federal y no generales para la Nación. (Aclaración de la ley 1893, artículo 111, inciso 5°).

VIOLACIÓN DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS.—Conocen en todas las causas que versen sobre violación de los reglamentos administrativos. (Ley 48, artículo 2, inciso 5°).

## JURISDICCION CONCURRENTENTE

### I. — CON LA JUSTICIA DE PAZ

**57.** — Están excluidas de la competencia de los Juzgados de Sección, todas aquellas causas de jurisdicción concurrente, siempre que se reúnan estas dos circunstancias:

1º Que el valor del objeto demandado no exceda de quinientos pesos fuertes;

2º Que el conocimiento del caso caiga bajo la jurisdicción de la justicia de paz de la provincia respectiva, según las leyes de procedimientos vigentes en ella. (Ley núm. 927, artículo 1).

3º Cualquiera que sea la naturaleza de la causa, pues la exclusión del fuero federal, comprende tanto las causas por cobros de pesos, como las que se refieren a otros objetos cuyo valor no supere a la cantidad de quinientos pesos; así en los pleitos de desalojo ese valor no puede ser determinado por la cosa misma, a que se refiere el desahucio, en el cual no se litiga sobre el dominio del inmueble arrendado, sino sobre el simple uso o goce temporal, cuyo valor está representado por el arrendamiento y según la duración fijada por éste en el contrato. (Interpretación de la *Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 108, página 140, Diciembre 17 de 1907).

## II. — CON LA JUSTICIA MILITAR

**58.** — El artículo 7 de la ley número 48 establece que:

La jurisdicción criminal atribuída por esta ley a la justicia nacional, en nada altera la jurisdicción militar en los casos en que, según las leyes existentes, deba procederse por consejos de guerra.

## HABEAS CORPUS

### I. — TEXTO LEGAL

**59.** — Cuando un individuo se halle detenido o preso por una autoridad nacional, o a disposición de una autoridad nacional o so color de una orden emitida por autoridad nacional; o cuando una autoridad provincial haya puesto preso a un miembro del Congreso, o a cualquier individuo que obre en comisión del gobierno nacional, la Corte Suprema o los jueces de sección podrán, a instancia del preso o de sus parientes o amigos, investigar sobre el origen de la prisión, y en caso de que ésta haya sido ordenada por autoridad o persona que no esté facultada por la ley, mandarán poner al preso inmediatamente en libertad. (Ley 48. art. 20).

### II. — COMPETENCIA DEL JUEZ FEDERAL

**60.** — Es competente:

- 1º Cuando un individuo se halle detenido o preso por una autoridad nacional;

- 2º Cuando haya sido puesto a disposición de una autoridad nacional;
- 3º Cuando se halle detenido o preso, so color de una orden emitida por autoridad nacional;
- 4º Cuando una autoridad provincial haya puesto preso a un miembro del Congreso;
- 5º Cuando una autoridad provincial haya puesto preso a cualquier individuo que obre en comisión del gobierno nacional; o como empleado del gobierno nacional. (Adición del artículo 617 del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital. Desdoblamiento del art. 20 de la ley nº 48. de 14 de Septiembre de 1863).
- 6º Cuando toda orden o procedimiento de un funcionario público, tienda a restringir sin derecho la libertad de una persona. Conocerán del recurso, los jueces federales, del crimen de la Capital y los de los Territorios Nacionales, con excepción de los siguientes casos:
  - 1º Cuando la orden de detención, arresto o prisión emanase de un superior en el orden judicial.
  - 2º Cuando fuese expedida por algunos de los Jueces Correccionales o del Crimen de la Capital en ejercicio de sus funciones.
  - 3º Cuando emanase de alguna de las Cámaras del Congreso. (Adición de los artículos 617 y 618 del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital y Territorios Nacionales, promulgado el 17 de Octubre de 1888).

### III. — INCOMPETENCIA ORIGINARIA DE LA SUPREMA CORTE

61. — El recurso de habeas corpus autorizado por la ley de 14 de Septiembre de 1863 sobre competencia de los tribunales nacionales, no pertenece al conocimiento originario de la Suprema Corte. (*Suprema Corte Nacional*, T. 82, pág. 107. Noviembre 9 de 1899). Argumenta el fallo, que el caso no es de la jurisdicción originaria de la Corte, de acuerdo con lo que disponen el art. 101 de la Constitución Nacional y el art. 1 de la ley 48.

## CAPITULO II

### CONOCIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

#### I. — DERECHO MARÍTIMO

**62.**— Las cuestiones que se susciten entre los individuos de la tripulación de un buque mercante, o entre alguno de ellos y su capitán, u otros oficiales del mismo, y cuya importancia no pase de cincuenta pesos, serán decididas en juicio verbal por el capitán del puerto donde se halle el buque, con apelación para ante el juez de sección que conocerá también en juicio verbal. (Ley 48, artículo 5).

#### II. — ORDENANZAS DE ADUANA

**63.**— Cuando la resolución de los administradores de Aduana, fuese condenatoria, los dueños o consignatarios de las mercaderías o transportes condenados, podrán entablar la vía contenciosa ocurriendo a la Justicia Nacional, haciéndolo saber por escrito al Administrador en el perentorio término de tres días hábiles, contados desde el de la notificación de dicha resolución. (Ordenanzas de Aduana, art. 1063).



### III. — IMPUESTOS INTERNOS

**64.** — Cuando la resolución de la Administración de Impuestos Internos fuese condenatoria, los dueños o consignatarios de los artículos, podrán ocurrir por la vía contenciosa antes el juez federal o letrado respectivo, dentro del perentorio término de cinco días hábiles, pasados los cuales sin haberse hecho uso de tal derecho, la resolución se tendrá por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada. (Ley 3764, artículo 27); pero si la multa no excediese de cien pesos sólo dará lugar al recurso de reposición ante la Administración de Impuestos Internos y la resolución que se pronuncie, sea que confirme o revoque, causará ejecutoria. (Art. 29 de la misma ley).

SECCIÓN II

CÁMARAS FEDERALES



## CAPITULO I

### JURISDICCION TERRITORIAL DE LAS CAMARAS FEDERALES.

**65.**—Existen cinco Cámaras Federales de Apelaciones. Cuatro han sido organizadas por la ley 4055 (de la Capital Federal, de La Plata, de Paraná y de Córdoba) y la quinta, por la ley 7099 (del Rosario).

**CÁMARA DE LA CAPITAL FEDERAL.**—Tiene jurisdicción sobre la primera circunscripción, que comprende la Capital de la República, provincias de San Luis, de Mendoza y de San Juan.

**CÁMARA DE LA PLATA.**—Tiene jurisdicción sobre la provincia de Buenos Aires, territorios de la Pampa, del Neuquén, del Río Negro, del Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego.

**CÁMARA DE PARANÁ.**—Tiene jurisdicción sobre la tercera circunscripción, que comprende las provincias de Entre Ríos, Corrientes y territorios del Chaco, de Formosa y de Misiones.

**CÁMARA DE CÓRDOBA.**—Tiene jurisdicción sobre la cuarta circunscripción que comprende las demás provincias y el territorio de los Andes. (Ley 4055, artículo 12).

**CÁMARA DEL ROSARIO.**—Tiene jurisdicción sobre la provincia de Santa Fe. (Ley 7099, art. 1°).



## CAPITULO II

### CONOCIMIENTO EN SEGUNDA Y ULTIMA INSTANCIA

**66.** — Conocen las Cámaras Federales en segunda y última instancia en los :

- 1° Recursos de apelación y nulidad contra las sentencias de los jueces de sección.
- 2° Recursos de apelación contra las sentencias de los jueces letrados de los territorios nacionales.
- 3° En las consultas que elevaren los jueces letrados de los territorios nacionales.
- 4° Recursos de queja por retardo o denegación de justicia por parte de los jueces de sección o de los jueces de los territorios nacionales.

### RECURSOS DE APELACION Y NULIDAD CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS JUECES DE SECCION

**66 bis.** — Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación y en última instancia los recursos que se deduzcan

contra las resoluciones de los jueces de sección en las causas de su competencia, y siempre que el valor disputado, en las causas civiles o comerciales, exceda de quinientos pesos. (Ley 4055, art. 17, inc. 2°).

Estas causas son:

## I. — LEYES NACIONALES

Las que sean especialmente regidas por la Constitución nacional, las leyes que haya sancionado y sancionare el Congreso y los tratados públicos con naciones extranjeras (ley 48, artículo 2 - 1°).

## II. — NACIONALIDAD Y VECINDAD

**67.** — Las causas civiles en que sean partes un vecino de la provincia en que se suscite el pleito y un vecino de otra, o en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero (ley 48, art. 2, inc. 2°), y en aquellas en que lo sea un vecino de la Capital Federal y el de una provincia. (Adición de las leyes número 1893, artículo III, inciso 2° y 1467, art. 1°). (1).

## III. — NEGOCIOS DE CÓNSULES O VICE CÓNSULES

**68.**—Las causas que versen sobre negocios particulares de un cónsul o vice cónsul extranjero. (Ley 48, art. 2, inciso 3°).

---

(1) Las sociedades están equiparadas a los efectos del fuero, a los ciudadanos vecinos de la provincia en que se hallen establecidas (ver núm. 14).

#### IV. — ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL

**69.** — Todo pleito que se inicie entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del gobierno nacional (Ley 48. artículo 2, inciso 4°).

#### V. — LA NACIÓN COMO PARTE

**70.** — En aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte actora (Ley 48, art. 2, inc. 6°), siempre que el valor disputado no excediere de cinco mil pesos. Si excediere, conocerá en tercera instancia la Suprema Corte. (Aplicación del art. 3, inc. 2 de la ley 4055).

Sobre lo que debe entenderse por cinco mil pesos, véase la jurisprudencia de la Suprema Corte Nacional, transcrita en el número 98.

Cuando la Nación es demandada en su carácter de poder público, no procede el recurso de apelación ante la Corte. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 113, pág. 315, Abril 4 de 1911).

#### VI. — DERECHO MARÍTIMO

**71.** — 1° Las que se originen entre los propietarios o interesados de un buque, sea sobre su posesión o sobre su propiedad; (Ley 48. art. 2, inciso 9°).

2° Las que versen sobre la construcción y reparos de un buque; sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadía; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil (1).

---

(1) Sobre salvamento militar, conocen las Cámaras Federales en segunda instancia preparatoria de la tercera instancia de la Corte, como se verá más adelante. (Véase núm. 80).



Sobre naufragios (1); sobre avería simple y gruesa; sobre contratos a la gruesa ventura; sobre pilotaje, sobre embargos de buques (2) y penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos, sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán, tripulantes, y en general, sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo. (Ley 48, art. 2º, inc. 10º).

3º Las que se originen por choques y averías de buques, o por auxilios prestados en alta mar, o en los puertos, ríos y mares en que la República tiene jurisdicción. (Ley 48, artículo 2, inciso 8). Y si estuvieren más inmediatos a la Capital de la República, entenderán las Cámaras Federales con asiento en ella. (Ley 1893, artículo III, inciso 7º in fine).

## VII. — ACCIONES FISCALES

**72.** — De las que recayesen sobre acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos. (Ley 48, artículo 2-5º).

## VIII. — CONTRABANDO

**73.** — En todas las causas de contrabando. (Ley número 48, art. 3).

---

(1) Naufragios por accidente, se sobreentiende, que son los que dan origen a las relaciones de derecho marítimo, legisladas en el Código de Comercio, arts. 1283 y siguientes. Si el naufragio es criminal o provocado, conocen las Cámaras Federales, en segunda instancia preparatoria de la tercera instancia de la Corte, a excepción de la Cámara Federal de la Capital que conoce en última.

(2) Pero no sobre embargo en tiempo de guerra.

**74.** — Cuando se trata de sentencias que versan sobre materia criminal, es menester hacer distinción entre las Cámaras Federales del interior de la República y la Cámara Federal de la Capital, que siempre conoce en instancia definitiva.

#### CÁMARAS FEDERALES DEL INTERIOR Y DEL LITORAL

**DELITOS COMETIDOS EN JURISDICCIÓN MARÍTIMA O FLUVIAL.** — Conocen en segunda instancia definitiva en todas las causas por crímenes cometidos en los ríos, islas y puertos argentinos. (Ley 48, artículo 3, inc. 2°).

**DELITOS COMETIDOS EN JURISDICCIÓN PROVINCIAL.** — Conocen en segunda instancia definitiva en todos los crímenes cometidos en el territorio de las provincias en violación de las leyes nacionales, como todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, obstruyan o corrompan el buen servicio de sus empleados o violenten o estorben la correspondencia de correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales o representen falsificación de documentos nacionales o de moneda nacional; o de billetes de bancos autorizados por el Congreso. (Ley 48, artículo 3, inciso 3°).

**DELITOS COMETIDOS EN JURISDICCIÓN NACIONAL.**—Conocen en segunda y definitiva instancia en los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción. (Ley 48, art. 3 - 3°).

**DELITO DE DEFRAUDACIÓN.** — Conocen en segunda y última instancia, de las sentencias que versen sobre defraudación de las rentas nacionales. (Ley 48, art. 2, inc. 5°), siempre que el valor disputado no excediere de cinco mil pesos. (Ley 4055, art. 3 - 2°).

**VIOLACIÓN DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS.**—Conocen en última instancia de las sentencias que versen sobre violación de los reglamentos administrativos. (Ley 48, art. 2, inciso 5°).

La última instancia de las Cámaras Federales del interior es relativa. Bien pudiera interponerse el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte Nacional. (Véase número 102).

#### CÁMARA FEDERAL DE LA CAPITAL

En materia criminal la segunda instancia es definitiva. (Ley 7055, art. 4). Las sentencias no originan recurso de apelación ante la Suprema Corte. Toda la materia criminal está comprendida así:

Los delitos enumerados en el párrafo anterior. Además:

Las sentencias que versen sobre delitos de traición, rebelión, sedición, y en las de homicidio, incendio o explosión, piratería y naufragios, cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros. (Ley 4055, art. 3, inciso 5°).

## **RECURSO DE APELACION CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LOS JUECES LETRADOS DE LOS TERRITORIOS NACIONALES.—**

**75.** — Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación y en última instancia de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales, aunque fueren dictados en causas criminales del fuero común. (Ley 4055, art. 17, inciso 2º), en la siguiente forma:

*Cámara Federal de La Plata.* — Sentencias de los jueces de la Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. (Artículo 12 de la ley 4055).

*Cámara Federal de Paraná.* — Sentencias de los jueces del Chaco, Formosa y Misiones. (Artículo 12 de la ley 4055).

### **CONOCIMIENTO EN CONSULTA**

**76.** — Las Cámaras Federales conocerán de las consultas que elevaren los jueces letrados de los territorios nacionales, aun cuando no se interpusiera el recurso de apelación, en asuntos en que sea parte el fisco, menores, incapaces. (Leyes 1532, artículo 42 y 4055, artículo 17, inciso 3º). Ver número anterior acerca de la jurisdicción territorial de cada Cámara.

**77.** — Las Cámaras Federales conocerán de los recursos por retardo o denegación de justicia por parte de los jueces de sección o de los jueces letrados de los territorios nacionales. (Ley 4055, art. 17, inc. 3).



## CAPITULO III

### CONOCIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA PRE- PARATORIA DE LA TERCERA INSTANCIA DE LA SUPREMA CORTE.—

#### RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS JUECES DE SECCIÓN

**78.**— Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación, en segunda instancia, de las sentencias de los jueces de sección en los siguientes casos: (Ley 4055, arts. 16 y 3).

#### I. — LA NACIÓN COMO PARTE

**79.**— De las que fueren dictadas en las acciones civiles que se deduzcan contra la Nación en su carácter de persona jurídica, a que se refiere la ley 3952, artículo 1. (Ley 4055, art. 3, inc. 1).

#### II. — ACCIONES FISCALES

**80.**— De las que recayesen sobre acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantida-

des adeudadas o por cumplimiento de contratos, y en general, en todos aquellos casos en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte actora, siempre que el valor disputado excediera de cinco mil pesos.

En la precedente disposición no se comprenden las acciones fiscales por cobro de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la Capital Federal y territorios nacionales, y no generales para la Nación. (Ley 4055, art. 3, inc. 2).

### III. — CAUSAS DE ALMIRANTAZGO

**81.** — De las que recayesen en todas las causas a que dieran lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles. (Ley 4055, art. 3, inc. 2).

### IV. — EXTRADICCIÓN

**82.** — De las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros. (Ley 4055, art. 3, inc. 4).

### V. — CAUSAS CRIMINALES

**83.** — Cuando se trata de sentencias que versan sobre materia criminal, es menester hacer distinción entre las Cámaras Federales del interior de la República y la Cámara Federal de la Capital, que siempre conoce en instancia definitiva.

Conocen en segunda instancia, preparatoria de la tercera instancia de la Suprema Corte, en las sentencias de los Jueces, de Sección que recayesen en las causas :

- 1° Por defraudación de las rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos, siempre que el valor disputado excediere de cinco mil pesos. (Ley 4055, artículo 3, inciso 2°). Pero no se comprenden las acciones por defraudación de rentas de la Capital y Territorios Nacionales. (Ley 1893, art. 111, inciso 5°).
- 2° Por los delitos de traición, rebelión, sedición, y en las de homicidio, incendio o explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros; y en todos aquellos casos en que la pena impuesta excediera de diez años de presidio o penitenciaria. (Ley 4055, art. 3°, inc. 5°).

#### CÁMARA FEDERAL DE LA CAPITAL

Las resoluciones de la Cámara Federal de la Capital causarán ejecutoria en materia criminal. (Ley 7055, art. 4°).

### RECURSO DE REVISION

**84.** — En los casos que con arreglo a lo establecido en el art. 551 del Código de Procedimientos en lo Criminal proceda el recurso de revisión contra las sentencias de las



Cámaras Federales, la Corte Suprema conocerá de dicho recurso por apelación. (Ley 4055, art. 4°). Esos casos son los siguientes:

- 1° Cuando consta de un modo indudable que el delito fué cometido por una sola persona y habiendo sido juzgado por dos o más jueces, aparecen como reos, en las respectivas sentencias ejecutoriadas, diversas personas;
- 2° Cuando se haya condenado a alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio cometido por otro y cuya existencia se acredite después de la sentencia;
- 3° Cuando se haya condenado a alguno por resolución cuyo fundamento haya sido un documento que después se ha declarado falso por sentencia ejecutoriada en causa criminal, o cuando el condenado hallase o cobrase documentos decisivos, ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte acusadora;
- 4° Cuando una ley posterior haya declarado que no es punible el acto que antes se consideraba como tal o haya disminuido su penalidad.

## CAPÍTULO IV

### CONOCIMIENTO EN CUESTIONES DE COMPETENCIA

**85.** — Las Cámaras Federales conocerán de las cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces de sección, entre los jueces letrados de los territorios nacionales y entre éstos y aquéllos. (Ley n° 4055, art. 19).



SECCIÓN III

SUPREMA CORTE NACIONAL



## CAPITULO I

### CONOCIMIENTO EN UNICA INSTANCIA JURISDICCION ORIGINARIA

#### CONTIENDAS ENTRE PROVINCIAS

86. — La Suprema Corte de Justicia Nacional conocerá originariamente las causas que versen entre dos o más provincias. (Ley núm. 48, art. 1, inc. 1°).

#### CONTIENDAS ENTRE PROVINCIAS Y PARTICULARES

##### I. — EL TEXTO DE LEY

87. — La Suprema Corte de Justicia Nacional conocerá originariamente las causas civiles que versen entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros. (Ley 48, art. 1, inc. 1°); y de las causas civiles que versen entre una provincia y algún vecino o vecinos de la Capital Federal. (Adición de la ley núm. 1467, art. 1°).

## II. — REQUISITOS DEL FUERO

**88.** — 1<sup>o</sup> CAUSAS CIVILES. — El fuero federal creado para las causas entre una provincia y un ciudadano extranjero, se refiere a las que versen sobre acciones civiles, no a las que se promueven para corregir la infracción de leyes dictadas por una provincia en materia de su exclusiva competencia, ni a las acciones que se intenten contra las sentencias que en ellas recaigan. (*Suprema Corte Nacional*, T. 7, pág. 373, julio 31 de 1869). Se refiere a las acciones civiles, cuyos derechos hubieren nacido de estipulaciones o contratos. (*Suprema Corte Nacional*, Gaceta del Foro, bimestre Enero - Febrero de 1917, fallo número 8, página 9).

En el caso del fallo anterior, se trataba de una acción por devolución de dinero cobrado por afirmados y multa.

Como dice la Corte, los tribunales nacionales no podrían conocer en esos casos, sin someter a juicio los procedimientos de autoridades independientes de los poderes de la Nación y que no les deben cuenta del uso que hacen de sus atribuciones peculiares.

**89.** — 2<sup>o</sup> — LA PROVINCIA DEBE SER PARTE. Sea como demandante o demandada. (*Suprema Corte Nacional*, Fallos T. I., página 485, Mayo 3 de 1865, muy fundado), pues por más inmediato que sea el interés en que una provincia tenga en una causa, si ella no es parte directa en el juicio, "de manera que la sentencia le sea obligatoria", no procede la jurisdicción originaria de la Suprema Corte (*Sup. Corte Nacional*, Fallos T. 28, pág. 78, Marzo 17 de 1885).

Como consecuencia, no es parte:

Cuando se la demanda por actos de una municipalidad, en la que no tiene ninguna responsabilidad propia, y sólo por-

que haya asumido provisoriamente su representación. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 49, pág. 74, Septiembre 22 de 1892). En tal caso la municipalidad no caduca, se halla acéfala.

Cuando se le cita de evicción en asunto gestionado entre particulares, y por derechos procedentes de convención entre ellos, y aunque la provincia haya constituido apoderado (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 84, pág. 257, Mayo 1º de 1900); a no ser que la provincia se presente a contestar la demanda pidiendo se le dé participación en la causa para hacer valer sus derechos. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 84, pág. 393, Mayo 17 de 1900). Tal participación importa aceptar la citación de evicción.

El hecho de ser una provincia accionista o propietaria del Banco demandado en juicio, no importa que aquella sea parte directa en el pleito, y en tal caso, la Suprema Corte no tiene la jurisdicción originaria para conocer en él. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 54, pág. 128, Octubre 17 de 1893). En este caso el Banco, como persona jurídica, tiene capacidad civil para contratar, doctrina igualmente adoptada por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Tampoco es parte una comisión administradora de fondos, destinados por una ley provincial a la ejecución de obras locales de desagüe en el territorio de la misma. (*Sup. Corte Nacional*, Fallos, T. 100, pág. 65, Agosto 4 de 1904). El principio es, como lo dice en síntesis el fallo, — que el funcionamiento de estas instituciones que se dan las provincias para fines de régimen interno, y sus posibles conflictos, no afectan el orden federal.

90.—3º DERECHO ORIGINARIO.—En las causas entre una provincia y vecinos de otra, o entre una provincia y súbdito extranjero, para que surta el fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa pertenezca a aquellos originariamente, y



no por cesión o mandato. (Ley número 48, art. 8). Igual principio rige, tratándose de vecinos de la Capital Federal. (Ley n° 1467, art. 1°).

### III. — MODO DE ADQUIRIRSE LA VECINDAD

**91.** — La vecindad en una provincia se adquirirá, para los efectos del fuero :

- 1° Por la residencia continua de dos años. (Ley número 48, artículo 11). Las funciones públicas, puramente accidentales como las de los representantes ante las legislaturas del país, no causan residencia. La residencia a los efectos del fuero, no debe regirse por el derecho común, sino por la Constitución y las leyes nacionales. Las disposiciones del Código Civil deben tenerse en cuenta como doctrina concordante. (*Suprema Corte de Justicia*, T. 109, pág. 446, Septiembre 15 de 1908).
- 2° Por tener en ella propiedades raíces. (Ley número 48, artículo 11). No basta ser propietario de un bien raíz en una provincia para ser vecino de ella, porque la vecindad en un lugar supone la residencia en el mismo y no puede admitirse que una persona pueda ser vecino de varias provincias a la vez, por residir en una, tener en otra bienes raíces y en una tercera un establecimiento de industria o de comercio; se requiere el ánimo de permanecer. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 118, página 236, Diciembre 20 de 1913).
- 3° Por tener en ella un establecimiento de industria o de comercio. (Ley 48, artículo 11). Véase la jurisprudencia transcrita en el inciso anterior.

- 4° Por hallarse establecido de modo que aparezca el ánimo de permanecer. (Ley número 48, artículo 11).

#### IV. — PRÓRROGA

92. — Cesa la jurisdicción originaria de la Suprema Corte en el siguiente caso:

Siempre que en pleito civil un extranjero demande a una provincia ante un juez o tribunal de provincia, o cuando, siendo demandado el extranjero o el vecino de otra provincia, conteste a la demanda, sin oponer la excepción de declinatoria, se entenderá que la jurisdicción ha sido prorrogada, la causa se substanciará y decidirá por los tribunales provinciales, y no podrá ser traída a la jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo el recurso extraordinario. (Ley número 48, artículo 12, inc. 4°).

La Constitución Nacional, al establecer en la parte final del artículo 101, que en los asuntos en que una provincia sea parte, la Suprema Corte tiene jurisdicción originaria y exclusiva, ha querido decir que sólo ella conozca de esas causas, cuando sea llamada a entender por demandas de extranjeros o vecinos de otra provincia y con exclusión de otros tribunales inferiores; pero de ninguna manera, que puede excluir a los propios tribunales de provincia cuando los que podían dudar de su imparcialidad quisieran ocurrir a ellos. (*Sup. Corte Nacional*, T. 104, pág. 323, Junio 21 de 1906).

Extranjeros y vecinos de otra provincia, — dice el fallo, — pueden renunciar el fuero, pues el fuero federal ha sido adoptado para favorecerlos, asegurándoles mayor imparcialidad al ser juzgados por tribunales ajenos a la provincia demandada. Al renunciar se someten al principio general de llevar a juicio a un estado, ante sus propios tribunales.

## **CONTIENDAS ENTRE PROVINCIAS Y ESTADO EXTRANJERO**

**93.** — La Suprema Corte conocerá originariamente las causas que versen entre una provincia y un estado extranjero. (Ley 48, art. 1, inc. 2°).

## **DIPLOMATICOS**

**94.** — La Suprema Corte conocerá originariamente las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación, a los individuos de su familia, o sirvientes domésticos, del modo que una Corte de Justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes. (Ley 48, art. 1, inc. 3°).

## **CONSULES**

**95.** — La Suprema Corte conocerá originariamente las causas que versen sobre los privilegios y exenciones de los cónsules y vice-cónsules extranjeros, en su carácter público. (Ley 48, art. 1, inc. 4°).

## REVISION DE LAS CAUSAS DE JURISDICCION ORIGINARIA

### I. — TEXTO DE LA LEY

**96.** — La Suprema Corte conoce en grado de revisión todas las causas que sean de su competencia originaria. (Ley número 27, art. 7, inciso 3°).

Este recurso sólo tendrá lugar en los siguientes casos: (Ley número 50, art. 241).

- 1° Cuando la sentencia definitiva de la Suprema Corte en primera instancia hubiere recaído sobre cosas no pedidas por las partes; (Inciso 1°).

El recurso de revisión procede, solo contra las sentencias que son definitivas, y en las que existe alguno de los defectos señalados por el artículo 241 de la ley de Procedimientos. Por lo tanto, no corresponde que se interpongan en un interdicto, que es un juicio sumarísimo de posesión que nada prejuzga sobre los derechos de propiedad que correspondan. (*Suprema Corte Nacional*, Fallos, T. 26, página 61, Octubre 2 de 1883).

- 2° Cuando en ella se omitiere proveer sobre alguno de los capítulos de la demanda o de la reconvención si la hubiere; (Inciso 2°).
- 3° Cuando después de pronunciada la definitiva, la parte perjudicada hallase o recobrase documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado; (Inciso 3°).

- 4° Cuando la definitiva se hubiere pronunciado en virtud de documentos reconocidos o declarados falsos, ignorándolo el recurrente, o cuya falsedad se reconociere o declarase despues; (Inciso 4°).
- 5° Cuando habiéndose dictado en virtud de prueba testimonial o de posiciones, alguno de los testigos o la parte absolvente fueren condenados como falsarios en sus declaraciones: (Inciso 5°).

Pero no habrá lugar al recurso de revisión por razón de oscuridad o ambigüedad de las cláusulas de la sentencia, por error material respecto de los nombres, calidades y pretensiones de las partes, o por simple error de cálculo en su parte dispositiva; pero se podrá pedir en estos casos, dentro de tres días, aclaración de la duda o rectificación del error. (Ley 50, artículos 242 y 232).

## II. — INTERPOSICIÓN

**96 bis.** — El recurso de revisión en los casos previstos por los incisos 1° y 2° del artículo 241, deberá interponerse dentro de ocho días, contados desde el siguiente a la última notificación. (Ley 50, art. 243).

En los casos expresados en el inciso 3°, el término para la interposición empezará a correr desde el día en que los nuevos documentos se descubrieren o recobraren. (Ley 50, artículo 244).

En los casos de los incisos 4° y 5°, desde el día en que se tuvo noticia del fraude o desde aquel en que se reconoció o declaró la falsedad. (Ley 50, art. 245).

### III. — SUBSTANCIACIÓN

**96** ter. — En la substanciación de este recurso se observará lo prescripto para el de apelación concedido libremente. (Ley 50, art. 246).



## CAPITULO II

### CONOCIMIENTO EN TERCERA INSTANCIA

#### RECURSOS DE APELACION Y DE NULIDAD

##### I. — LA NACIÓN COMO PARTE

**97.** — La Corte Suprema, conocerá en última instancia por apelación y nulidad de las sentencias definitivas de las Cámaras Federales en los siguientes casos: (Ley núm. 4055, artículo 3).

- 1º De las que fueren dictadas en las acciones civiles que se deduzcan contra la Nación en su carácter de persona jurídica. (Ley número 3952, artículo 1 - 1º).
- 2º De las que recayesen en todas las causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte actora, siempre que el valor disputado excediere de cinco mil pesos. (Ley 4055, artículo 3, inciso 2, su parte pertinente).
- 3º Cuando la Nación es demandada en su carácter de poder público, no procede el recurso de apelación ante la Corte. (*Suprema Corte Nacional*, fallos T. 113, pág. 315, Abril 4 de 1911).



## II. — ACCIONES FISCALES

98. — La Corte Suprema conocerá en última instancia por apelación y nulidad, las sentencias definitivas de las Cámaras Federales que recayesen:

Sobre acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos. (Ley número 4055, artículo 3, inciso 2°). Y en general todas aquellas causas en que un recaudador de las rentas de la Nación sea parte actora, siempre que el valor disputado excediere de cinco mil pesos. (Ley número 4055, artículo 3, inciso 2°): pero no se comprenden las acciones fiscales por cobro de rentas o impuestos para la Capital y territorios nacionales. (Adición de la ley número 1893, artículo III, inciso 5°).

Pero es el número de pesos y no la clase de moneda lo que debe tenerse en cuenta, aunque tratándose de pesos oro, su conversión excediera de cinco mil pesos moneda legal. (*Sup. Corte Nacional*, T. 97, pág. 289, Abril 4 de 1903).

El inciso 2° del artículo 3° de la ley número 4055, dice este fallo, — al fijar la cantidad de cinco mil pesos para los efectos del recurso de apelación, no ha expresado que esa cantidad sea en moneda fiduciaria o en billetes de curso legal.

Siendo la ley número 4055 de carácter permanente y estando las diferencias entre la moneda metálica y la fiduciaria argentinas, sujetas a alteraciones, no obstante lo dispuesto en la ley número 3871, debe entenderse necesariamente que los pesos de que habla el inciso 2° del artículo 3°, son los definidos por el artículo 1° de la ley número 1130.

De lo contrario estaría la jurisdicción de apelación de la Corte, subordinada a las variantes de la moneda fiduciaria, desde que dicha ley no ha tomado como base para la conver-

sión del oro a papel, el premio del primero en la fecha de su sanción u otra cualquiera.

### III. — CAUSAS DE ALMIRANTAZGO

**99.** — La Corte Suprema conocerá en última instancia por apelación y nulidad, las sentencias definitivas de las Cámaras Federales que recayesen en todas las causas a que dieran lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamente militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles. (Ley 4055, art. 3 - 3°).

### IV. — EXTRADICCIÓN

**100.** — La Corte Suprema conocerá en última instancia por apelación y nulidad, las sentencias definitivas de las Cámaras Federales que recayesen en las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros. (Ley 4055, artículo 3 - 4°).

### V. — CAUSAS CRIMINALES

**101.** — La Corte Suprema conocerá en última instancia por apelación y nulidad, las sentencias definitivas de las Cámaras Federales que recayesen en cualquier causa criminal:

- 1° Por defraudación de rentas nacionales, siempre que el valor disputado excediere de cinco mil pesos. (Véase la jurisprudencia aplicable, en el número 98).
- 2° Por violación de reglamentos administrativos. (Ley

4055, artículo 3, inciso 2º); pero no se comprenden las acciones por defraudación de rentas para la capital y territorios nacionales. (Ley número 1893, artículo III, inciso 5º).

- 3º Por los delitos de traición, rebelión, sedición y en las de homicidio, incendio o explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros; y en todos aquellos casos en que la pena impuesta excediera de diez años de presidio o penitenciaria. (Ley 4055, artículo 3, inciso 5º)

Pero no conocerá las sentencias de la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal que versen sobre materia criminal, puesto que según el artículo 4 de la ley 7055 de 16 de agosto de 1910, causan ejecutoria.

## RECURSO DE REVISION

### I. — SENTENCIAS QUE ORIGINAN EL RECURSO

**102.** — Procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte, contra las sentencias:

- 1º De las Cámaras Federales. (Ley 4055, artículo 4).
- 2º De las Cámaras de Apelaciones de la Capital Federal (Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital y Territorios Nacionales, art. 551).
- 3º De la Suprema Corte Nacional. (Cita anterior).

## II. — HECHOS QUE FUNDAN EL RECURSO

**103.** — Habrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, aunque hayan sido pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, en los casos siguientes:

- 1º Cuando consta de un modo indudable que el delito fué cometido por una sola persona y habiendo sido juzgado por dos o más jueces, aparecen como reos, en las respectivas sentencias ejecutoriadas, diversas personas.
- 2º Cuando se haya condenado a alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio cometido por otro y cuya existencia se acredite despues de la sentencia.
- 3º Cuando se haya condenado a alguno por resolución cuyo fundamento haya sido un documento que despues se ha declarado falso por sentencia ejecutoriada en causa criminal, o cuando el condenado hallase o cobrase documentos decisivos, ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte acusadora.
- 4º Cuando una ley posterior haya declarado que no es punible el acto que antes se consideraba como tal o haya disminuído su penalidad. (Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital y Territorios Nacionales, art. 551).

## III. — SUBSTANCIACIÓN

**104.** — Para que sea admisible el recurso deberá acompañarse al deducirse testimonios de la sentencia, los documen-

tos y pruebas correspondientes. En caso contrario será desechado de plano. (Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital y Territorios Nacionales, art. 556).

Para que la Suprema Corte pueda conocer por apelación del recurso de revisión autorizado por el art. 4 de la ley 4055, es necesario que la misma cámara que dió la sentencia de que se recurre, se haya pronunciado previamente, revisando o no su fallo. (*Suprema Corte Nacional*), fallos T. 103, pág. 233, Diciembre 2 de 1905).

#### **RECURSO POR RETARDO O DENEGACION DE JUSTICIA DE LAS CAMARAS FEDERALES.**

**105.** — La Suprema Corte conocerá de los recursos que se promovieran por retardo o denegación de justicia en los casos en que ella conozca en última instancia por apelación y nulidad de las sentencias definitivas de las cámaras federales de apelaciones y en los casos que conozca por apelación del recurso de revisión cuando éste procede contra las sentencias de las Cámaras Federales. (Ley núm. 4055, art. 5).

## CAPITULO III

### CONOCIMIENTO EN INSTANCIA EXTRAORDINARIA

---

#### RECURSO EXTRAORDINARIO

##### I. — TEXTO DE LA LEY

**106.** — Conocerá la Suprema Corte de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia (ley núm. 48, art. 14), pronunciadas por las Cámaras Federales de Apelaciones; por las Cámaras de Apelaciones de la Capital y por los Tribunales Superiores Militares (ley núm. 4055, art. 6), en los siguientes casos legislados por el art. 14 de la ley núm. 48:

- 1º Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez;
- 2º Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso y la decisión haya sido en favor de la ley o autoridad de provincia;

3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado o ley del congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio.

## II. — RECAUDOS DEL RECURSO

107. — A pesar de ser muy claro el texto, ha dado lugar a una copiosa jurisprudencia. Los litigantes usan el recurso como un medio de llegar a una tercera instancia, sin recordar que es un recurso de casación del derecho federal solamente. No dejando lugar a muchas dudas la ley, la jurisprudencia que citamos a continuación, es simplemente ejemplificativa.

Según se desprende del artículo, los recaudos del recurso son:

1° SENTENCIA DE TRIBUNALES SUPERIORES. — La sentencia debe ser pronunciada por los tribunales superiores. ¿Cuáles son?

Son:

1°. Los de última instancia.

2° Los que resuelven en última instancia la cuestión federal, aún cuando hubiera otra instancia superior para substanciar recursos locales.

3° Tribunales judiciales.

*Los de última instancia.*—La regla general es la siguiente:

En el concepto "tribunales superiores" se entiende en cada caso, los llamados a pronunciarse en última instancia o sin recurso para ante tribunal local. (*Sup. Corte Nacional*, T. 99, pág. 228, Mayo 24 de 1904).

¿Y qué se entiende por tribunal local? ¿Por qué no dice

la Corte "Tribunal Superiores de provincia" cómo se lee en el artículo 14 de la ley 48?

Porque es adicional el artículo 6 de la ley 4055, que equipara a los tribunales de provincia, las Cámaras de Apelaciones de la Capital, las Cámaras Federales de Apelaciones y los tribunales superiores militares.

Pueden considerarse consecuencias de esta regla general:

Es definitiva la sentencia pronunciada en segunda instancia por un juez de lo civil de la Capital Federal, en las causas que corresponden a la justicia de paz por la ley núm. 2860.

*Tribunal que resuelva en última instancia la cuestión federal, aún cuando hubiere otra instancia superior para recursos locales.*

Por eso, la Corte ha resuelto que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no es en lo local el tribunal de última instancia a que se refiere el art. 14 de la ley 48. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 114, pág. 16. Diciembre 6 de 1910).

*Tribunales judiciales.* — Son las Cámaras Federales de Apelaciones, las Cámaras de Apelaciones de la Capital, y los Tribunales Superiores Militares. De ahí que la Corte desestimara el recurso intentado por un concejal electo, contra una resolución de la Junta Electoral de la Capital. Causa Bavastro, (Noviembre de 1918).

**108.** — 2º. SENTENCIA DEFINITIVA. — A estar a la jurisprudencia de la Corte, se requiere que el fallo tenga estas condiciones:

- 1º Que no dé lugar a recurso alguno.
- 2º Que no deje a salvo la acción invocada.
- 3º Que sea agravante.
- 4º Que no esté consentido.



*Que no dé lugar a recurso alguno.* — El fallo debe tener el carácter de definitivo y la autoridad que lo ha dictado debe ser el Superior tribunal de la provincia, no importando que no haya sido pronunciada en juicio ordinario, pues puede haberlo sido en juicio contencioso administrativo. (*Suprema Corte Nacional*, fallos T. 76, pág. 351, Diciembre 3 de 1898).

*Que no deje a salvo la acción invocada.* — No es sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario, la sentencia que deja a salvo el derecho invocado por el recurrente para que lo haga valer en la estación oportuna del juicio. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 114, página 45, Diciembre 20 de 1910). Y es una consecuencia, que no procede el recurso extraordinario contra una sentencia de trance y remate, por cuanto queda expedita a las partes la vía ordinaria, y no puede considerarse, por lo tanto, como sentencia definitiva. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 117, pág. 379, Septiembre 23 de 1913).

Ni procederá contra una sentencia dictada en el juicio de alimentos.

*Que sea agraciante.* — No procede el recurso contra una resolución que, si bien declara constitucional una ordenanza que el recurrente impugnaba como violatoria de la carta fundamental, no es contraria al derecho gestionado por éste. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 115, pág. 263, Febrero 29 de 1912).

*Que no esté consentida.* — No procede el recurso, si el recurrente dejó consentir la resolución que en definitiva no hizo lugar a la excepción de incompetencia, fundada en el inciso 2º del art. 2 de la ley 48. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 98, pág. 140, Octubre 13 de 1903).

**109. — 3º FALLO DENEGATORIO DEL DERECHO FEDERAL INVOCADO.** — La ley no requiere mayores explicaciones. El fallo debe negar el derecho federal y la decisión puede ser expresa o tácita:

*Decisión contraria expresa.* — Puede serlo por estar comprendido el fallo en algunos de estos casos:

- 1º Decisión contraria a la validez del derecho federal puesto en cuestión, (tratado, ley del Congreso, autoridad ejercida en nombre de la Nación).
- 2º Decisión contraria al derecho federal en las controversias sobre inconstitucionalidad del derecho local.
- 3º Decisión contraria al derecho federal cuando su inteligencia haya sido cuestionada.

A riesgo de incurrir en superabundancia, transcribimos:

No basta que la sentencia sea definitiva; es indispensable que la decisión recaída sea contraria a la validez del título, derecho, privilegio o exención. (Fallos de la *Suprema Corte Nacional*, T. 91, pág. 128, Julio 18 de 1901). Así, no se da contra la sentencia que admite la procedencia del fuero federal invocado en la causa. (Fallos de la *Suprema Corte*, T. 96, pág. 404, Noviembre 25 de 1902).

*Decisión contraria tácita o falta de decisión.* — Igualmente, habrá decisión contraria tácita, cuando la sentencia no ha tomado consideración del derecho federal. La Corte la denomina "resolución implícitamente contraria", en el fallo del T. 97, pág. 214, del 16 de Mayo de 1903.

La doctrina ha sido establecida textualmente en un fallo anterior que se registra en el mismo tomo.

La circunstancia de no haberse discutido de contrario ni tomado en consideración por la sentencia de primera ni de

segunda instancia, el artículo constitucional invocado, no quita a la resolución apelada, el que ella sea contraria al derecho que se ha querido hacer valer fundado en dicho artículo. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 97, página 211, Mayo 14 de 1903).

#### 110. 4º OBJETO DEL PLEITO.

Habrà lugar al recurso, cuando se encuentren reunidas, las siguientes condiciones:

- 1º Que la cuestión sea litigiosa.
- 2º Que la cuestión sea de derecho y no de hecho.
- 3º Que la cuestión sea de derecho federal.

#### CUESTIÓN LITIGIOSA

El inciso 1º del art. 14, habla del pleito en que se haya puesto en *cuestión* el derecho federal.

Debe haberse litigado, puesto que la justicia federal, nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los *casos contenciosos* en que es requerida a instancia de parte. (Art. 2º, de la ley 27 de organización de los tribunales federales).

Corroborante es el art. 15 de la ley 48, que dice, en su parte pertinente:

El fundamento del recurso debe tener una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones *en disputa*.

La Suprema Corte ha subrayado invariablemente este requisito esencial. Así, un vecino de la provincia de Entre Ríos, se presentó ante ella, exponiendo, que la Cámara legislativa de la provincia, arrogándose facultades que la Constitución solo acuerda en casos muy especiales a los poderes de la Nación, había dictado una ley, creando un cuerpo de infantería, y disponiendo que al efecto fuera sorteada la Guarda Nacional de los

departamentos, en cuyo sorteo se pretendía que había sido designado el exponente para el servicio.

Pidió que la Suprema Corte, declarase inconstitucional, y por tanto nula y de ningún valor la ley mencionada. La Corte Suprema resolvió lo siguiente: No determinándose la persona del demandado, y no teniendo los tribunales nacionales jurisdicción para decidir cuestiones abstractas de derecho, ni para juzgar sobre la inconstitucionalidad de una ley, sino cuando se trata de su aplicación a los casos contenciosos que ocurran, se resuelve que la Suprema Corte es incompetente para hacer la declaración general que se solicita. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 12, pág. 372, Octubre 31 de 1872).

#### CUESTIÓN DE HECHO

El recurso extraordinario está destinado a impedir la violación del derecho federal, es decir, de la Constitución Nacional, las leyes del Congreso y los tratados con las potencias. Es ageno a las cuestiones de hecho y así lo ha resuelto la Corte.

Y en consecuencia no prospera, si la sentencia se limita a no dar por comprobada la calidad de extranjero invocada por éste, puesto que se trata de una cuestión de hecho y los hechos son indiscutibles ante la Corte, en un recurso de esta naturaleza. (*Suprema Corte Nacional*, T. 101, pág. 156, Febrero 23 de 1905).

Háse elegido este fallo, porque es claramente demostrativo de la peligrosa doctrina que encierra. En efecto, bastaría que la justicia ordinaria transformara un caso de derecho federal en una cuestión de hecho, para que pudiera burlarse la garantía que está destinado a servir el recurso extraordinario.

Esta jurisprudencia podrá siempre discutirse y en el pro, no será en vano citar un fallo fundamental de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que declara la procedencia del recurso, tan-

to en las cuestiones de derecho como en las de hecho, en la extensión que pueda ser necesaria para determinar la validez del derecho. El índice de ese fallo, del cual hemos extractado su doctrina, dice así:

In chancery cases, or in any other class of cases where all the evidence becomes a part of the record in the highest court of the State, and the record is brought here, this court can review the decision of that court on both the law and the fact, so far as may be necessary to determine the validity of the right so set up under the Act of Congress. (United States Supreme Court Reports, 92, página 515, Febrero 28 de 1876. causa *The Republican river bridge company v. the Kansas Pacific Railway Company*).

#### CUESTIÓN FEDERAL

Para que prospere el recurso, es indispensable, que se haya puesto en cuestión el derecho federal.

¿Qué es cuestión federal?

1º Es la que se funda en un tratado, ley del Congreso, autoridad ejercida en nombre de la Nación.

2º Es la que se suscita cuando se pretende que una ley, decreto o autoridad de provincia es repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados, o a las leyes del Congreso.

3º Es la que se suscita con motivo de la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional.

(Aplicación de los tres incisos del art. 14 de la ley 48).

Por consecuencia no es cuestión federal:

1º La interpretación o aplicación que los tribunales de provincia hicieren de los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, por el hecho de ser leyes del Congreso, dado lo dispuesto

en el artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional. (Art. 15 de la ley 48)

2º La misma interpretación o aplicación que hicieren las Cámaras Federales de Apelaciones, las Cámaras de Apelaciones de la Capital y los Tribunales Superiores Militares. (Aplicación adicional del art. 6º de la ley 4055, que equipara estos tribunales a los tribunales superiores de provincia).

Y por último se requiere:

1º Que la cuestión federal aparezca de los autos.

2º Que tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa. (Art. 15 de la ley 48, su parte pertinente).

Se da el recurso entonces:

Cuando se cuestiona la constitucionalidad de una ordenanza municipal y de las leyes dictadas por el Congreso, en su carácter de legislatura local, habiendo sido la resolución recurrida en favor de la validez de las mencionadas leyes y ordenanzas. (*Suprema Corte Nacional*, T. 100, pág. 351, Octubre 8 de 1904).

Cuando se ha puesto en cuestión en el pleito, la validez de una ley de provincia como contraria a las disposiciones del Código Civil y pronunciándose la sentencia final en favor de su validez. (*Suprema Corte Nacional*, T. 94, pág. 366, Abril 19 de 1902).

Cuando la sentencia desconoce el fuero federal que se ha reclamado, invocándose la Constitución Nacional y la ley nº 48, también procede el recurso, pues se niega un privilegio (*Suprema Corte Nacional*, T. 112, pág. 203, Octubre 7 de 1909), aún cuando se desconociera en resolución dictada en juicio ejecutivo. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 98, pág. 317, Diciembre 26 de 1903).

No procede por tanto:

Tratándose de la interpretación y aplicación del derecho común, por ejemplo:

Códigos Civil, Penal, Comercial o de Minería, cuando se interpretan o aplican, de acuerdo con lo que disponen los arts. 14, 15 de la ley 48 y el 67, inciso 11 de la Constitución Nacional. (*Suprema Corte Nacional*, T. 82, pág. 231, Noviembre 18 de 1899).

La interpretación y aplicación del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la Capital Federal. (*Suprema Corte Nacional*, T. 96, pág. 118, Septiembre 16 de 1902), como toda la materia concerniente a él; por eso, las condiciones que debe revestir la cosa juzgada dependen del derecho común, cuya interpretación y aplicación en cuanto no afectan un título nacional, son ajenas al recurso extraordinario. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 115, pág. 12, 17 de Octubre de 1911).

Ley n° 3981 de reformas a la justicia federal y la que lleva el número 4128, modificatoria del código de procedimientos de la capital: la interpretación de ellas no autoriza el recurso, porque se refieren al ordenamiento de los juicios, que no afectan el fondo de las instituciones fundamentales que el recurso se propone salvaguardar. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 115, pág. 12, Octubre 17 de 1911).

Ley orgánica de los tribunales de la Capital Federal, que es ley local. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 108, pág. 171, Diciembre 24 de 1907).

Código de justicia militar. (*Corte Suprema Nacional*, fallos, T. 112, pág. 121, 7° considerando, Agosto 31 de 1909).

Ley de reformas al Código Penal y la ley de defensa social, que es supletoria del Código Penal. (*Suprema Corte Nacional*, T. 113, pág. 263, Agosto 9 de 1910).

La ley n° 9688, sobre accidentes del trabajo, que debe ser aplicada por los jueces ordinarios y no por los federales, puesto que se trata de una ley reformativa del Código Civil. (*Su-*

*prema Corte Nacional*, fallos, T. 126, pág. 325, Octubre 20 de 1917).

Leyes dictadas por el Congreso para el régimen y gobierno de la Capital Federal y Territorios Nacionales; tampoco se da contra las sentencias que las interpretan y aplican. (*Suprema Corte Nacional*, T. 91, pág. 380, Septiembre 26 de 1901).

**111. 5º OPORTUNIDAD Y MODO DE PLANTEAR LA CUESTIÓN.**

*Oportunidad.* — Debe plantearse en el pleito. Es necesario que se haya cuestionado el caso federal, *en el pleito*; no basta que con posterioridad a él se invoquen circunstancias que pudieran autorizar el recurso, si hubieran sido materia del litigio. (*Suprema Corte Nacional*, T. 83, pág. 323, Febrero 22 de 1900), como por ejemplo, si se plantean al interponer el recurso (*Suprema Corte Nacional*, T. 109, pág. 325, Julio 11 de 1908), puesto que deben cuestionarse con anterioridad a la sentencia definitiva, de manera que ella pueda considerarlas y resolverlas, no haciendo procedente el recurso, las que pudieran surgir de la sentencia misma. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 125, pág. 14, Diciembre 23 de 1916).

*Modo de plantear.* — No basta citar una disposición de derecho federal. Es necesario cuestionar el caso. Como lo ha declarado la Corte, la cita de un principio general de la Constitución, es una simple indicación de la fuente del derecho positivo.

La doctrina de la Corte a este respecto se halla expresada así en los fundamentos de uno de sus fallos:

Las disposiciones de leyes especiales citadas, no pueden servir de base al recurso, desde que cualquiera que sea la inteligencia que corresponda dárselas, el actor no *las alegó en apoyo de su acción*. (Fundamento del fallo, T. 119, pág. 19, Mayo 7 de 1914).

Y son los fallos siguientes, consecuencia de esa doctrina:



La referencia general e indeterminada a una cláusula de la Constitución Nacional, no basta para decirse planteada en el pleito, algunas de las cuestiones previstas en el art. 14 de la ley 48. Y aún la invocación precisa y determinada de la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución Nacional, no autoriza el recurso extraordinario si éste no tiene relación directa e inmediata con la cuestión planteada y resuelta por el tribunal de cuya sentencia se recurre. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 121, pág. 144, Mayo 27 de 1915).

Fundada una demanda exclusivamente en disposiciones de derecho común no procede el recurso, aún cuando la sentencia apelada hubiere citado disposiciones de leyes especiales. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 119, pág. 19, Mayo 7 de 1914).

### III PROCEDIMIENTO

#### INTERPOSICIÓN DEL RECURSO

**112.—TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO.**—Dentro de cinco días contados desde el de la notificación de la sentencia, la parte que se sintiere agraviada, podrá interponer el recurso de apelación para ante la Suprema Corte. (Ley número 50 de procedimientos de los tribunales nacionales, artículo 208).

Con arreglo a la interpretación dada en varios casos por la Corte a los arts. 14 y 15 de la ley 48, el término para interponer el recurso extraordinario, corre desde que se notifica la respectiva resolución definitiva y no se suspende por los recursos que se entablen ante otros tribunales locales, sin competencia para admitirlos y substanciarlos según la inteligencia que estos den a sus leyes procesales. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 103, pág. 191, Noviembre 23 de 1905), ni lo suspende la aclarato-

ria o pedido de rectificación de un error. (Fallos, T. 121, pág. 334, Julio 31|915).

**APELACIÓN DENEGADA.** — Si el juez seccional denegare una apelación que por la ley debió conceder, la parte agraviada podrá ocurrir por el recurso de queja a la Suprema Corte, pidiendo que se ordene la remisión de los autos, y se le otorgue la apelación denegada. (Artículo 229 de la ley 50), debiendo hacerse una relación del derecho federal violado. (*Sup. Corte Nacional*, fallos, T. 109, pág. 328, Julio 7 de 1908).

El término para interponer la queja será de tres días, si fuere de providencia pronunciada por el Juez de la Sección en que tiene su asiento la Suprema Corte, aumentándose con un día por cada siete leguas, si se recurriese la providencia de otro Juez Seccional. (Artículo 231 de la ley 50).

La ley 4055 ha creado cuatro Cámaras Federales y la ley número 7099 de 20 de Setiembre de 1910, ha creado otra en la ciudad del Rosario. Ellas son las que conocen en grado de apelación en segunda instancia (Art. 16 de la ley 4055) y ante ellas, y no ante el Juez de Sección, deberá interponerse el recurso.

**EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.**—Si procediese el recurso extraordinario, y la sentencia de la Cámara o Tribunal fuese confirmatoria de la de los juzgados de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuese revocado por la Suprema Corte.

Dicha fianza será calificada por la Cámara o Tribunal que la hubiese dictado, y quedará de hecho cancelada si la sentencia recurrida fuese confirmada por la Suprema Corte. El Fisco Nacional estará exento de la fianza a que se refiere esta disposición. (Artículo 7º de la ley 4055 concordado con el artículo 6º).

OBLIGACIÓN DE FUNDAR EL RECURSO.—El artículo 15 de la ley 48. dice que el fundamento del recurso debe aparecer de autos.

La Corte ha interpretado el artículo de este modo:

El recurso debe fundarse en citas, concretas y con aplicación al caso resuelto. No basta hacer referencias generales a la Constitución o leyes del Congreso. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 85, pág. 395, Junio 26 de 1900).

El recurrente argüía que la sentencia era contraria a la Constitución Nacional y a la validez de las leyes de la Nación, con simples razonamientos.

La Corte mandó que el recurrente cumpliera con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 48.

TRÁMITE.—En los casos en que la Suprema Corte conozca en grado de apelación, recibido el expediente se dictará la providencia de autos y las partes podrán, dentro de los diez días comunes e improrrogables, siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar una memoria sobre la causa, que se mandará agregar a los autos, y sin más trámite quedará conclusa para definitiva. (Artículo 8º de la ley 4055).

El caso siguiente ha dado motivo a un fallo interpretativo de la Corte:

Se interpuso el recurso extraordinario ante la Cámara Federal, ésta lo denegó y el interesado ocurrió de hecho a la Suprema Corte. La Suprema Corte, teniendo a la vista el expediente, que como mejor informe le había sido elevado por la Cámara, declaró mal denegado el recurso, y simultáneamente, es decir, en el mismo fallo, sin dar a aquel el trámite establecido por el artículo 8º de la ley 4055. decidió sobre el fondo del asunto.

Notificado del fallo, el recurrente presentó escrito, pidiendo la nulidad del mismo, fundándose en que había sido resuelto el caso sin oírsele, con violación de la ley procesal, pues no se le había permitido expresar agravios contra el auto de la Cámara, como lo disponía expresamente el artículo 230 *in fine* de la ley nacional de procedimientos. La Corte no hizo lugar a la nulidad, pronunciando el fallo siguiente:

El trámite correspondiente a las causas traídas en apelación ante la Corte Suprema, establecido por la ley nacional de Procedimientos de 1863, ha sido modificado por el artículo 8º de la ley 4055. A fin de evitar gastos a los litigantes, con alegaciones inútiles sobre puntos de derecho ya debatidos en las instancias inferiores, procede la apertura del recurso denegado y la decisión simultánea del asunto controvertido. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 118, pág. 292, Febrero 7 de 1914).

RESOLUCIÓN.—En el recurso extraordinario, cuando la Corte Suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolverá sobre el fondo, y aún podrá ordenar la ejecución, especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón (Ley nº 48, art. 16).



## CAPITULO IV

### CONOCIMIENTO EN CONSULTA

**113.** — Los jueces letrados de los territorios nacionales elevarán en consulta, ante la Suprema Corte, aun cuando no se interponga apelación, todas las sentencias definitivas que pronuncien en las causas en que se deduzcan acciones civiles contra la Nación en su carácter de persona jurídica. (Ley 3952, art. 6 y en concordancia el art. 1.).



## CAPITULO V

### CONOCIMIENTO EN CUESTIONES DE COMPETENCIA

#### I. — TEXTO DE LA LEY

**114.** — La Suprema Corte dirimirá las cuestiones de competencia que se susciten. (Ley N° 4055, art. 9).

1° Entre las Cámaras Federales de Apelación; entre éstas y un juez o tribunal superior local de la Capital Federal o juez o tribunal superior de provincias.

2° Entre un juez de sección y un juez o tribunal superior local de la Capital Federal o un juez o tribunal superior de provincia.

3° Entre un juez letrado de territorio nacional y un juez o tribunal superior local de la Capital Federal, o un juez o tribunal superior de provincia.

4° Entre un juez o tribunal superior local de la Capital Federal y un juez o tribunal superior de provincia; entre los tribunales superiores de dos provincias; entre jueces de distintas provincias; y entre un tribunal militar y uno de cualquiera otra jurisdicción nacional o provincial.



## II.—REQUISITOS

**114 bis.**—**QUE HAYA UNA CONTIENDA.**—Iniciada y radicada una causa ante un juez de primera instancia en lo civil de la capital, se produjo un incidente durante el término de prueba. Elevados los autos en apelación, la Cámara declaró la incompetencia de la justicia civil para conocer de aquella, por tratarse de un asunto de carácter comercial en razón de ser la actora sociedad anónima. Esta apeló para ante la Corte Suprema fundando su recurso en el artículo 9 de la ley 4055, siéndole denegado.

La Corte declaró que no existía contienda de competencia. (Fallos, T. 118, pág. 289, Febrero 5 de 1914).

**QUE LA CONTIENDA HAYA SIDO TRABADA.**—No está trabada, cuando no se han llenado los trámites establecidos en los artículos 46 a 52 de la ley nacional de Procedimientos. (*Suprema Corte Nacional*, T. 108, pág. 77, Diciembre 5 de 1907). Como si hubiera pendiente un recurso de apelación contra la providencia que hace lugar a la inhibitoria. (*Suprema Corte Nacional*, T. 112, pág. 418, Diciembre 11 de 1909).

Para que la Corte pueda dirimir una contienda de competencia de conformidad a lo previsto en el art. 9 de la ley 4055, es necesario que aquella se haya suscitado y sido trabada, observando las reglas prescriptas por los arts. 457 y siguientes de la ley nacional de procedimientos. (*Suprema Corte Nacional*, fallos, T. 121, página 61).

El interesado había recurrido a un juez ordinario de la Capital Federal, quien se declaró incompetente. Luego demandó ante un juez de la provincia de Buenos Aires, el que a su vez se dijo incompetente.

AUNQUE LA CONTIENDA SEA IMPLÍCITAMENTE NEGATIVA.—

Puede ocurrir que negada la jurisdicción federal por el juez de sección y confirmado el auto por la Cámara Federal, sin interponerse el recurso extraordinario, se recurra a la justicia ordinaria. A su vez, el juez local puede declararse incompetente y así considerarlo su Cámara de Apelaciones, por atribuir el caso a la jurisdicción federal.

En realidad, no se ha trabado contienda y las leyes de procedimiento y la ley 4055, en su artículo 9, han pasado por alto la situación en que queda el litigante, que no encuentra juez.

La Suprema Corte ha resuelto que es aplicable el art. 9 de la mencionada ley 4055, y que por lo tanto, ella debe resolver la cuestión, como si se tratara de una contienda común.



## SEGUNDA PARTE

### **Leyes sobre jurisdicción y organización de los tribunales nacionales**



## CONSTITUCION NACIONAL

**Art. 100.**—Corresponde a la Corte Suprema y a los Tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 11 del artículo 67; y por los Tratados con las Naciones extranjeras; de las causas concernientes a Embajadores, Ministros públicos y Cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.

**101.** — En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a Embajadores, Ministros y Cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.

# LEY DE ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES

LEY 27, DE OCTUBRE 16 DE 1862

## CAPITULO I

### *Naturaleza y funciones generales del Poder Judicial Nacional*

Art. 1. — La justicia nacional procederá siempre aplicando la Constitución y las Leyes nacionales, a la decisión de las causas en que se versen intereses, actos o derechos de Ministros o agentes públicos, de simples individuos, de Provincia o de la Nación.

2. — Nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte.

3. — Uno de sus objetos es sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con ella.

4. — Conoce y decide en todos los asuntos regidos por la Constitución y Leyes nacionales, y en todas las causas expresadas en los arts. 100 y 101 de la Constitución, pero cuando fuere llamada, de conformidad con el art. 100, a juzgar entre vecinos de diferentes provincias, lo hará con arreglo a las respectivas leyes provinciales.

5.—No interviene en ninguno de los casos en que, com-

pitiendo ese conocimiento y decisión a la jurisdicción de Provincia, no se halle interesada la Constitución ni ley alguna nacional.

## CAPITULO II

### *De la Corte Suprema*

**6.**—La justicia nacional se ejercerá por medio de una Corte Suprema de Justicia, compuesta de cinco ministros y un procurador general.

**7.** — La Corte Suprema conoce:

1º Originaria y exclusivamente de las causas concernientes a Embajadores, Ministros, Cónsules y Vicecónsules extranjeros, y en las que alguna Provincia fuese parte;

2º En grado de apelación o nulidad de las causas que, con arreglo al art. 22 corresponden a los Juzgados de Sección, y de las que le vayan de los Tribunales superiores de provincia, con arreglo al art. 23;

3º En grado de revisión de las causas que quedan expresadas en el inciso 1º de este artículo, según las reglas que establezca una ley especial que la misma Corte propondrá al Congreso por conducto del Poder Ejecutivo.

**8.**—En caso de discòrdia o bien de impedimento o de recusación o excusación justificadas de uno o más miembros de la Corte Suprema, será integrada por abogados particulares que ella nombrará, y cuyo honorario será de cuenta del Tesoro Público.

**9.**—La Corte no podrá expedir sentencia ni auto alguno que no sea de simple substanciación, sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros.



**10.**—De los fallos de la Corte Suprema no hay recurso alguno, a excepción del de revisión, expresado en el inciso 3º del art. 7º

**11.**—La Corte nombrará y podrá remover sus empleados subalternos. Además de su reglamento interno, dictará otro uniforme para todos los Juzgados de Sección. Avisará al P. E. el número y propondrá las dotaciones de los empleados subalternos que resulte ser necesarios para el ejercicio de todo el Poder Judicial, a fin de que aquel solicite del Congreso la ley de su creación y sueldos.

**12.** — Cada miembro de la Corte Suprema gozará del sueldo mensual de quinientos pesos.

### CAPITULO III

#### *De los Juzgados Seccionales*

**13.** — La Justicia Nacional se ejercerá igualmente por medio de Juzgados inferiores de Sección.

**14.**—Cada Provincia formará uno o más Juzgados Seccionales, según fuere necesario, a juicio del P. E.

**15.**—Los Juzgados de Sección serán unipersonales, y cuando en alguna causa fuese necesaria la intervención de un fiscal, podrán nombrar para este cargo a un abogado particular, cuyo honorario será de cuenta del tesoro nacional.

**16.** — En caso de impedimento, recusación o excusación, el juez lo avisará directamente al P. E., el cual nombrará un suplente para aquella causa o causas, siendo su honorario también a cargo del tesoro nacional.

**17.**—Para ser Juez de Sección se necesita tener 25 años años de edad y ser abogado argentino con tres años a lo menos de ejercicio. Antes de entrar en funciones, jurará ante la autoridad que el P. E. delegue al efecto, el buen y fiel desempeño de su cargo.

**18.**— Los Jueces Seccionales propondrán a la Corte Suprema las personas que, con arreglo al reglamento interno de sus Juzgados, hayan de desempeñar las funciones subalternas de ellos, y podrán removerlos por sí solos.

**19.**— Cada Juez de Sección gozará del sueldo mensual de 250 pesos.

**20.**— Los Juzgados de Sección conocen en 1ª. instancia: de todas las causas que se expresan en el art. 100 de la Constitución, sin incluir en ellas las exceptuadas en el art. 101 de la misma Constitución; de las contencioso - administrativas y demás que interesen al fisco nacional; mas, en las de contrabando, lo harán por ahora, tanto en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, cuanto en el resto de la República, ajustándose a las respectivas leyes y disposiciones dictadas y vigentes en ellas.

**21.**— Pueden conocer en grado de apelación de los fallos y resoluciones de los Juzgados inferiores de Provincia, en los casos regidos por la Constitución y Leyes Nacionales, siempre que el agraviado no prefiera ocurrir al Juzgado o tribunal superior de la Provincia.

**22.**— En todas las causas mencionadas en los dos artículos precedentes, habrá los ordinarios recursos de apelación o nulidad para ante la Corte Suprema.

**23.** — Cuando en un Juzgado de Provincia hubiera duda o cuestión sobre si el asunto de que se trata, debe ser regido solamente por leyes Provinciales, y se decidiese en última instancia en ese sentido, el agraviado podrá apelar para ante la Corte Suprema.

## CAPITULO IV

### *Disposiciones especiales*

**24.** — La presente ley será puesta en ejercicio luego que se halle instalada la Suprema Corte y los Juzgados Seccionales.

**25.** — El Poder Ejecutivo podrá verificar los gastos previos que la ejecución de esta ley demandare.

**26.** — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

# LEY SOBRE JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES NACIONALES

LEY 48, DE SEPTIEMBRE 14 DE 1863

**Art. 1.** — La Suprema Corte de Justicia Nacional conocerá en primera instancia :

1º De las causas que versan entre dos o más Provincias, y las civiles que versen entre una Provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros ;

2º De aquellas que versen entre una Provincia y un Estado extranjero ;

3º De las causas concernientes a Embajadores u otros Ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la Legación, a los individuos de su familia, o sirvientes domésticos, del modo que una Corte de Justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes ;

4º De las causas que versen sobre los privilegios y exenciones de los Cónsules y Vicecónsules extranjeros, en su carácter público.

**2.** — Los Jueces Nacionales de Sección conocerán en primera instancia de las causas siguientes :

1º Las que sean especialmente regidas por la Constitución Nacional, las leyes que haya sancionado y sancionare el Congreso y los Tratados Públicos con naciones extranjeras ;

2° Las causas civiles en que sean partes un vecino de la Provincia en que se suscite el pleito y un vecino de otra, o en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero;

3° Las que versen sobre negocios particulares de un Cónsul o Vicecónsul extranjero;

4° Todo pleito que se inicie entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno Nacional;

5° Toda acción fiscal contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades debidas o por cumplimiento de contratos, o por defraudación de rentas nacionales, o por violación de reglamentos administrativos;

6° En general todas aquellas causas en que la nación o un recaudador de sus rentas sea parte;

7° Todas las causas a que den lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra;

8° Las que se originen por choques, y averías de buques, o por asaltos hechos, o por auxilios prestados en alta mar, o en los puertos, ríos y mares en que la República tiene jurisdicción;

9° Las que se originen entre los propietarios o interesados de un buque, sea sobre su posesión o sobre su propiedad;

10° Las que versen sobre la construcción y reparos de un buque, sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadía; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería simple y gruesa; sobre contratos a la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embargo de buques y penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán, tripulantes, y en general sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo.

**3. —** Los Jueces de Sección conocerán igualmente de todas las causas de contrabando, y de todas las causas criminales cuyo conocimiento competa a la justicia nacional, a saber:

1º Los crímenes cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros, serán juzgados por el Juez de Sección del primer puerto argentino a que arribase el buque;

2º Los crímenes cometidos en los ríos, islas y puertos argentinos serán juzgados por el Juez que se halle más inmediato al lugar del hecho, o por aquel en cuya sección se encuentren los criminales, según sea el que prevenga en la causa;

3º Los crímenes cometidos en el territorio de las Provincias en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas, u obstruyan o corrompan el buen servicio de sus empleados o violenten o estorben la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales o representen falsificación de documentos nacionales o de moneda nacional; o de billetes de Banco autorizados por el Congreso, serán juzgados en la Sección Judicial en que se cometieren;

4º Los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el Gobierno Nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, serán juzgados por los Jueces de Sección allí existentes.

**4. —** La Corte Suprema conocerá por apelación de las sentencias definitivas y de todo auto que tenga fuerza de definitivo en todas las causas criminales iniciadas ante los Jueces de Sección y en las civiles que quedan expresadas, siempre que el valor disputado exceda de la cantidad de doscientos pesos fuertes; y la sentencia de segunda instancia, sea que confirme o revoque, causará ejecutoria.

5.—Las cuestiones que se susciten entre los individuos de la tripulación de un buque mercante, o entre alguno de ellos y su capitán, u otros oficiales del mismo, y cuya importancia no pase de cincuenta pesos, serán decididas en juicio verbal por el capitán del puerto donde se halle el buque, con apelación para ante el juez de Sección, que conocerá también en juicio verbal.

6.—Siempre que un Juez de Sección se excuse de conocer en una causa de su competencia, o retarde el administrar justicia, se podrá ocurrir a la Corte Suprema por el recurso de justicia denegada o retardada.

Y siempre que conozca de causa que no le competa, y rehusare inhibirse, podrá igualmente apelarse a la Corte, que resolverá el artículo según su mérito.

7. — La jurisdicción criminal atribuida por esta ley a la justicia nacional, en nada altera la jurisdicción militar en los casos en que, según las leyes existentes, deba procederse por consejos de guerra.

8.—En las causas entre una provincia y vecinos de otra, o entre una provincia y un súbdito extranjero, o entre un ciudadano y un extranjero, o entre vecinos de diversas provincias, para surtir el fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa pertenezca originariamente, y no por cesión o mandato, a ciudadanos extranjeros o vecinos de otras provincias respectivamente.

9. — Las corporaciones anónimas creadas y haciendo sus negocios en una provincia serán reputadas, para los efectos del fuero, como ciudadanos vecinos de la provincia en que se hallen establecidas, cualquiera que sea la nacionalidad de sus socios actuales.

**10.** — En las sociedades colectivas, y en general en todos los casos en que dos o más personas asignables pretendan ejercer una acción solidaria, o sean demandadas por una obligación solidaria, para que caigan bajo la jurisdicción nacional, se atenderá a la nacionalidad o vecindad de todos los miembros de la sociedad o comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tenga el derecho de demandar o pueda ser demandado ante los Tribunales Nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2º del art. 2.

**11.**—La vecindad en una Provincia se adquirirá, para los efectos del fuero, por la residencia continua de dos años, o por tener en ella propiedades raíces, o un establecimiento de industria o de comercio, o por hallarse establecido de modo que aparezca el ánimo de permanecer.

**12.** — La jurisdicción de los Tribunales Nacionales en todas las causas especificadas en los artículos 1, 2 y 3 será privativa, excluyendo a los Juzgados de Provincia, con las excepciones siguientes:

1º En todos los juicios universales de concurso de acreedores y partición de herencia, conocerá el Juez competente de provincia, cualquiera que fuese la nacionalidad o vecindad de los directamente interesados en ellos, y aunque se deduzcan allí acciones fiscales de la Nación;

2º En los lugares en que no haya establecido Jueces de Sección o que se halle distante la residencia de éstos, los Fiscales o colectores de rentas, o individuos comisionados al efecto, podrán demandar a los deudores del Fisco ante los Jueces de Provincia;

3º Cuando se cometiere un crimen de los que por esta ley caen bajo la jurisdicción nacional, los Jueces de Provincia, de cualquier categoría, podrán aprehender a los presuntos reos, que pondrán a disposición del Juez Nacional de Sección co-



responsdiente, con la remisión del sumario que hayan levantado para justificar la prisión;

4º Siempre que en pleito civil un extranjero demande a una provincia, o a un ciudadano, o bien el vecino de una provincia demande al vecino de otra ante un Juez o Tribunal de Provincia, o cuando siendo demandados el extranjero o el vecino de otra Provincia, contesten a la demanda, sin oponer la excepción de declinatoria, se entenderá que la jurisdicción ha sido prorrogada, la causa se substanciará y decidirá por los Tribunales provinciales; y no podrá ser traída a la Jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el art. 14.

13. — Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional prestarán todo auxilio para la ejecución de las sentencias del Poder Judicial, y siempre que un Juez Nacional dirija un despacho precatorio a un Juez Provincial, sea para hacer citaciones o notificaciones, o recibir testimonios, o practicar otros actos judiciales, será cumplido el encargo. Y siempre que un alguacil u oficial ejecutor presente una orden escrita de un Juez o Tribunal Nacional para ejecutar una prisión o embargo, las autoridades provinciales y personas particulares estarán obligadas a prestar el auxilio que él les requiera para el cumplimiento de su comisión.

14. — Una vez radicado un juicio ante los Tribunales de Provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales Superiores de Provincia, en los casos siguientes:

1º Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión haya sido contra su validez.

2º Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o Leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de Provincia :

3º Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un Tratado o Ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio.

15. — Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, Tratados o comisiones en disputa, quedando entendido que la interpretación o aplicación que los Tribunales de Provincia hicieren de los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, art. 67 de la Constitución.

16. — En los recursos de que tratan los dos artículos anteriores, cuando la Corte Suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolverá sobre el fondo, y aún podrá ordenar la ejecución, especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón.

17. — La Corte Suprema decidirá las competencias que se susciten a instancia de parte, sobre jurisdicción de los Jueces Nacionales.

**18.** — La Corte Suprema podrá establecer los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, con tal que no sean repugnantes a las prescripciones de la ley de procedimientos.

**19.** — La Corte Suprema y los Jueces de Sección tendrán la facultad de corregir con multas que no excedan de cincuenta pesos fuertes, o prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respecto que se cometieren contra su dignidad en los alegatos o las audiencias de las causas, y las que sus subalternos u otras personas cometieren contra su autoridad, obstruyendo el curso de la justicia o en daños de las partes; sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños causados.

**20.** — Cuando un individuo se halle detenido o preso por una Autoridad Nacional, o a disposición de una Autoridad Nacional o so color de una orden emitida por Autoridad Nacional; o cuando una autoridad Provincial haya puesto preso a un miembro del Congreso, o a cualquier otro individuo que obre en comisión del Gobierno Nacional, la Corte Suprema o los Jueces de Sección podrán, a instancia del preso, o de sus parientes o amigos, investigar sobre el origen de la prisión, y en caso de que ésta haya sido ordenada por autoridad o persona que no esté facultada por la ley, mandarán poner al preso inmediatamente en libertad.

**21.** — Los Tribunales y Jueces Nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los Tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las Provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente los casos que

se sujeten a su conocimiento, en el orden de prelación que va establecido.

**22.** — Las causas que se hallen pendientes ante los Tribunales de Provincia a la promulgación de esta ley, serán terminadas y fenecidas en los mismos Tribunales, aunque por su materia o por las personas interesadas en ellas pudieran pertenecer a la jurisdicción nacional.

**23.** — La presente ley será considerada como adicional y correctiva de la de 16 de Octubre de 1862.

**24.** — Comuníquese, etc.

**LEY ADICIONAL SOBRE**  
**CAUSAS DE JURISDICCION**  
**CONCURRENTE Y JUICIOS UNIVERSALES**

LEY 927, DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1878

**Artículo 1.** — Desde la promulgación de la presente ley, quedarán excluidas de la competencia de los Juzgados de Sección todas aquellas causas de jurisdicción concurrente, en las que el valor del objeto demandado no exceda de quientos pesos fuertes, cuando, por otra parte, el conocimiento del caso, caiga bajo la jurisdicción de la Justicia de Paz de la Provincia respectiva, según las leyes de procedimientos vigentes en ella. Esta disposición no será aplicable a las causas pendientes, debiendo entenderse por tales, aquellas en las que ya ha tenido lugar la citación del demandado.

**2.** — El conocimiento de los juicios universales, de concurso de acreedores y de sucesión, corresponderá, en el territorio de la República, a los jueces respectivos de aquella Provincia en la que el fallido tuviere su principal establecimiento al tiempo de la declaración de quiebra, o en la que deba abrirse en su caso la sucesión, según las disposiciones del Código Civil.

**3.** — Si un Juez de Provincia se arrogare el conocimiento de algunas de las causas expresadas, en contravención de lo

ordenado en el precedente artículo, todo vecino de extraña provincia, que sea parte legítima en dicha causa, podrá declinar su jurisdicción, por los trámites establecidos en el título VI de la ley sobre procedimientos de los Tribunales Nacionales, debiendo la Suprema Corte resolver las cuestiones de competencia que se suscitaren con motivo de esta disposición.

4. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

### **LEY 1467, DE SEPTIEMBRE 18 DE 1884, ADICIONAL DE LA LEY 48**

Art. 1. — El fuero federal comprende a los vecinos de la Capital de la República, en los casos determinados por el inciso 1º del art. 1º y el inciso 2º del art. 2º de la Ley de 14 de Septiembre de 1863, sobre la jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales.

2. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

### **LEY DE ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES DE LA CAPITAL**

LEY 1893, DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1886

Art. 111. — Los Jueces Federales (de la Capital), conocerán en 1ª Instancia, de todos aquellos asuntos que con arreglo a la Constitución correspondan a la Justicia Nacional, en los siguientes casos:

1º Los que sean regidos especialmente por la Constitución Nacional, los tratados públicos con las Naciones extranjeras, las leyes nacionales y que sancionare el Congreso, con excepción de las que se refieren al gobierno y administración de la Capital;

2º Las causas civiles en que sea parte un ciudadano argentino y un extranjero y aquellas en que lo sea un vecino de la Capital y el de una Provincia;

3º Las que versen sobre negocios particulares de Cónsules y Vicecónsules extranjeros;

4º Las cuestiones que se susciten entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno Nacional;

5º Las acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos, por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos; y en general, todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte. En la precedente disposición, no se comprenden las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la Capital y no generales para la Nación;

6º Todas las causas a que den lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra;

7º Las que se originen por choques o averías de buques, por asaltos hechos o por auxilios prestados en alta mar; o en los puertos, ríos y mares en que la República tenga jurisdicción, si estuvieren más inmediatos a la Capital;

8º Las que se originen entre los propietarios e interesados de un buque, sea sobre su posesión o sobre su propiedad;

9º Las que versen sobre construcción y reparo de un buque; sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadías; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería gruesa y simple; sobre contrato a la gruesa ventura; so-

bre pilotaje; sobre embargo de buques o penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del Capitán y tripulantes; y en general sobre todo contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo;

10º De todas las causas de contrabando en los puertos o territorios de la Capital;

11º De todos los delitos cometidos en alta mar a bordo de los buques nacionales o piratas extranjeros, cuando los buques arribasen directamente a los puertos de la Capital;

12º Los delitos cometidos en los ríos, islas y puertos cuando el lugar donde fuese cometido el hecho, quede más próximo a la Capital, que al asiento de los demás Jueces Federales, o cuando los criminales se encuentren en el territorio de la Capital, a menos que en este último caso, otro Juez Federal hubiese prevenido en el asunto;

13º Los delitos cometidos en el territorio de la Capital en violación de leyes nacionales de carácter general para la República.

**112.** Son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 4º y siguientes de la ley de 14 de Septiembre de 1863, sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales en cuanto no se opongan a la presente.

**113.** La ley de procedimiento de 14 Septiembre de 1863 y demás vigentes sobre justicia nacional, serán aplicables a los asuntos que se promovieren ante los jueces federales de la Capital.



**114.** Cada Juzgado Federal tiene para su despacho y servicio dos escribanos de actuación, un oficial de justicia y un ordenanza.

**115.** Para optar el puesto de Escribano y Oficial de Justicia se requieren las mismas condiciones que para los de los Juzgados de Sección, y su nombramiento se hará en la forma prescripta para éstos.

## **LEY SOBRE DEMANDAS CONTRA LA NACION**

LEY 3952, DE OCTUBRE 6 DE 1900

**Art. 1.** Los tribunales federales y los jueces letrados de los Territorios Nacionales, conocerán de las acciones civiles que se deduzcan contra la Nación en su carácter de persona jurídica, sin necesidad de autorización previa legislativa, pero no podrán darles curso sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante el P. E., y su denegación por parte de éste.

**2.** Si la resolución de la Administración demorase por más de seis meses después de iniciado el reclamo ante ella, el interesado requerirá el pronto despacho, y si transcurriesen otros tres meses sin producirse dicha resolución, la acción podrá ser llevada directamente ante los Tribunales, acreditándose el transcurso de dichos plazos.

**3.** La demanda se comunicará por oficio al P. E. por conducto del Ministerio respectivo, y al Procurador Fiscal, el cual deberá proceder previa consulta y con sujeción a las instrucciones que le trasmita dicho Ministerio.

4. El término para contestar será de treinta días, y el mayor que corresponda según las distancias, con arreglo a las leyes vigentes, si la demanda se dedujere fuera del territorio de la capital de la República.

Dentro de igual término se deducirán las excepciones dilatorias que correspondan.

Si se interpusiesen éstas, el término para contestar la demanda, una vez resueltas, será de quince días.

5. — La Suprema Corte conocerá de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones definitivas de los jueces, en los casos a que se refiere la presente ley, según el procedimiento señalado para la tramitación de las apelaciones concedidas libremente.

6. Los jueces letrados de los Territorios Nacionales elevarán en consulta, ante la Suprema Corte, aun cuando no se interponga apelación, todas las sentencias definitivas que pronuncien en los casos comprendidos en la presente ley.

7. Las decisiones que se pronuncien en estos juicios cuando sean condenatorias contra la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretende.

8. Comuníquese al P. E.

## **LEY SOBRE ORGANIZACION Y JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES NACIONALES**

LEY 4055, DE ENERO 11 DE 1902

Art. 1. El Poder Judicial de la Nación será ejercido:

1º Por la Corte Suprema de Justicia.

- 2º Por cuatro Cámaras Federales de Apelación.
- 3º Por los Jueces de Sección de la Capital y de cada una de las Provincias.

## CAPITULO I

### *De la Suprema Corte*

2. La Suprema Corte conocerá originaria y exclusivamente, de las causas mencionadas en el art. 101 de la Constitución Nacional y art. 1º de la ley nº 48 de 14 de Septiembre de 1863, y en revisión, con arreglo al art. 241 de la ley 50 de la misma fecha.

3. La Corte Suprema conocerá también en última instancia por apelación y nulidad de las sentencias definitivas de las Cámaras Federales de Apelación en los siguientes casos:

1º De las que fueren dictadas en las demandas contra la Nación, a que se refiere la ley nº 3952 de 6 de Octubre de 1900.

2º De las que recayesen sobre acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos; por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos y, en general, en todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte actora, siempre que el valor disputado excediera de cinco mil pesos.

En la precedente disposición no se comprenden las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la Capital y Territorios Nacionales, y no generales para la Nación.

3º De las que recayesen en todas las causas a que dieran lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de gue-

rra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles:

4º De las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros.

5º De las dictadas en cualquier causa criminal, por los delitos de traición, rebelión, sedición y en las de homicidio, incendio o explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros; y en todos aquellos casos en que la pena impuesta excediera de diez años de presidio o penitenciaría.

4. En los casos que con arreglo a lo establecido en el art. 551 del Código de Procedimientos en lo Criminal, proceda el recurso de revisión contra las sentencias de las Cámaras Federales, la Corte Suprema conocerá de dicho recurso por apelación.

5. Conocerá igualmente de los recursos que se promovieran por retardo o denegación de justicia, en los casos a que se refieren los artículos anteriores.

6. La Corte Suprema conocerá, por último, en grado de apelación, de las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras Federales de Apelación; por las Cámaras de Apelación de la Capital; por los Tribunales Superiores de Provincia y por los Tribunales Superiores Militares, en los casos previstos por el art. 14 de la ley nº 48 de 14 de Septiembre de 1863.

7. Si procediese el recurso del artículo anterior, y la sentencia de la Cámara o Tribunal fuese confirmatoria de la de los Juzgados de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución, dando fianza de responder de lo que percibiese, si el fallo fuera revocado por la Suprema Corte.

Dicha fianza será calificada por la Cámara o Tribunal que la hubiese dictado y quedará de hecho cancelada, si la sentencia

recurrida fuese confirmada por la Suprema Corte. El fisco nacional estará exento de la fianza a que se refiere esta disposición.

8. En los casos en que la Suprema Corte conozca en grado de apelación, recibido el expediente, se dictará la providencia de autos y las partes podrán, dentro de los diez días comunes e improrrogables, siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar una memoria sobre la causa, que se mandará agregar a los autos y sin más trámite quedará la causa conclusa para definitiva.

9. La Suprema Corte dirimirá las cuestiones de competencia que se susciten:

a) Entre las Cámaras Federales de Apelación; entre ésta y un Juez o Tribunal Superior local de la Capital, o Juez y Tribunal Superior de Provincia.

b) Entre un Juez de Sección y un Juez o Tribunal Superior local de la Capital o un Juez o Tribunal Superior de Provincia.

c) Entre un Juez Letrado de Territorio Nacional y un Juez o Tribunal Superior local de la Capital, o un Juez o Tribunal Superior de Provincia.

d) Entre un Juez o Tribunal Superior local de la Capital y un Juez o Tribunal Superior de Provincia; entre los Tribunales Superiores de dos provincias; entre jueces de distintas provincias; y entre un Tribunal Militar y uno de cualquiera otra jurisdicción nacional o provincial.

10. La Suprema Corte ejercerá superintendencia sobre las Cámaras Federales, Jueces de Sección, Jueces Letrados de Territorios Nacionales y demás funcionarios de la Justicia Federal, debiendo dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de justicia.

**11.** La superintendencia de la Suprema Corte comprende:

1º Velar por el cumplimiento de esos reglamentos e imponer las penas disciplinarias que ellos fijen para los casos de infracción;

2º Exigir que se le remita anualmente o en cualquier tiempo, una relación de las causas entradas, del número y estado de las pendientes y de las falladas.

3º Acordar o denegar licencia a los miembros de las Cámaras Federales, Jueces de Sección, Jueces Letrados de los Territorios Nacionales y demás funcionarios de la Justicia Federal, para ausentarse del lugar en que desempeñan sus funciones, por más de tres días, o dejar de asistir al tribunal, juzgado u oficina por más de una semana;

4º Imponer a los mismos penas disciplinarias por faltas a la consideración y respeto debidos a la Corte o alguno de sus miembros, por actos ofensivos al decoro de la administración de justicia, o por falta o negligencia en el cumplimiento de su deber.

Las penas consistirán en prevenciones, apercibimientos o multas que no excedan de doscientos pesos.

En caso de reincidencia y cuando el abuso, la falta o negligencia fuere grave, la Corte Suprema la pondrá en conocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fuesen cometidas por miembros de las Cámaras Federales de Apelación, por los Jueces de Sección y Jueces Letrados de los Territorios Nacionales; y cuando ellas fuesen cometidas por los Procuradores Fiscales, Defensores de Menores, pobres y ausentes, los suspenderá, solicitando en seguida su exoneración del Poder Ejecutivo.

## CAPITULO II

### *De las Cámaras Federales de Apelación*

**12.** Habrá cuatro Cámaras Federales de Apelación, que serán compuestas cada una de tres miembros, y tendrán su asiento la primera en la Capital de la República, la segunda en la ciudad de La Plata, la tercera en la ciudad del Paraná y la cuarta en la ciudad de Córdoba, y ellas ejercerán en su respectiva circunscripción la jurisdicción apelada que les confiere la presente ley.

La primera circunscripción comprende la Capital de la República, las provincias de San Luis, de Mendoza y de San Juan.

La segunda circunscripción comprende la Provincia de Buenos Aires y los Territorios de la Pampa, del Neuquén, del Río Negro, del Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego.

La tercera circunscripción comprende las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y Territorios del Chaco, de Formosa y de Misiones.

La cuarta circunscripción comprende las demás Provincias y demás Territorios que no se incluyen en las otras tres.

El ministerio público será desempeñado por un funcionario que tendrá el título de Procurador Fiscal de las Cámaras Federales de Apelación en la Capital y ciudad de La Plata. En las Cámaras de Paraná y Córdoba, dicho cargo y el de Procurador Fiscal ante el Juzgado de Sección, será desempeñado por un solo funcionario.

**13.** Las condiciones para ser miembros de las Cámaras Federales de Apelación y Procurador Fiscal de las mismas, y para su nombramiento, serán las que se requieren para ser miembros de la Suprema Corte.

**14.** No podrán ser simultáneamente jueces de la misma Cámara, los parientes o afines dentro del cuarto grado civil, y en caso de afinidad sobreviviente, el que la causare abandonará su puesto.

**15.** Cada Cámara nombrará anualmente su Presidente, y actuará con el Secretario y demás empleados que le designe la Suprema Corte de conformidad con la ley de presupuesto.

**16.** Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación, en segunda instancia, en todos los casos enumerados en el art. 3º de la presente ley.

**17.** Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación y en última instancia:

1º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces de Sección en las causas de su competencia, que no fueren de las enumeradas en el art. 3º de la presente ley, y siempre que el valor disputado, en las causas civiles o comerciales, exceda de quinientos pesos.

2º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales, aunque fueren dictados en causas criminales del fuero común.

3º De los recursos por retardación o denegación de justicia por parte de los Jueces de Sección o de los Letrados de los Territorios Nacionales.

4º De las consultas que elevaren los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales en los casos del art. 42 de la ley de organización de dichos territorios.

**18.** Contra las sentencias dictadas por las Cámaras Federales en los casos del artículo anterior, sólo se concederán los recursos autorizados por los arts. 4º y 6º de la presente ley.



**19.** Las Cámaras Federales conocerán de las cuestiones de competencia que se susciten entre los Jueces de Sección, entre los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales y entre éstos y aquellos.

**20.** Las Cámaras Federales observarán en materia civil y comercial, los procedimientos establecidos para la Suprema Corte, en la ley n° 50 de 14 de Septiembre de 1863 y leyes especiales, y en materia penal el Código de Procedimientos Criminal de la Nación.

**21.** En caso de recusación o impedimento de alguno de los miembros de las Cámaras de la Capital, el Tribunal se integrará insaculando a la suerte el número de conjuces que sea necesario, de la lista a que se refiere el art. 23 de la ley n° 50 de 14 de Septiembre de 1863.

Las Cámaras Federales de La Plata, Córdoba y Paraná, se integrarán en la misma forma, de la lista de conjuces que se insaculare anualmente para suplir los Jueces de Sección respectivos con arreglo al art. 2° de la ley 24 de Septiembre de 1878.

**22.** Las Cámaras Federales dictarán un reglamento interno y lo someterán a la aprobación de la Suprema Corte.

**23.** Sin perjuicio de la superintendencia de la Suprema Corte, las Cámaras Federales de Apelación podrán corregir a sus Secretarios y demás empleados subalternos con apercibimientos, suspensión sin goce de sueldo por término que no exceda de quince días o multas hasta cien pesos por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, desobediencia o faltas a la consideración y respeto debidos al Tribunal o a alguno de sus vocales.

Tendrán también la facultad de corregir con multas que no excedan de cincuenta pesos o prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieren contra su dignidad

en los alegatos y las audiencias de las causas y las que se cometieren contra su autoridad obstruyendo el curso de la justicia o en daño de las partes, sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños causados.

**24.** Los expedientes actualmente en trámite ante la Suprema Corte, que sean del conocimiento de las Cámaras Federales de Apelación, según las disposiciones de la presente ley, se distribuirán para su resolución entre las distintas Cámaras creadas y de acuerdo con la jurisdicción del Tribunal de origen, una vez terminado su trámite. Las causas especificadas en el art. 16 de la presente ley, que a la fecha de su promulgación se encontraren pendientes del fallo de la Suprema Corte, serán decididas por ésta.

**25.** En la primera instalación de las Cámaras Federales, los jueces nombrados para la que tenga su asiento en la Capital de la República, prestarán juramento ante la Suprema Corte, de desempeñar fielmente su cargo, de conformidad a los que prescriben la Constitución y las leyes de la Nación; los nombrados para las que tengan su asiento en La Plata, Córdoba y Paraná, lo prestarán ante los gobernadores de provincia. En lo sucesivo prestarán ese juramento ante las mismas Cámaras. Los Secretarios jurarán el fiel desempeño de sus funciones ante los mismos tribunales.

**26.** Los miembros de las Cámaras Federales de la Capital y su procurador fiscal, gozarán del mismo sueldo asignado a los miembros de las Cámaras de Apelación de la Capital, y tendrán un Secretario con setecientos cincuenta pesos, un Ujier con doscientos, un Oficial primero con ciento veinte, tres escribientes con cien pesos cada uno—Gastos de oficina cincuenta—Alquiler de casa quinientos—Tres ordenanzas a cincuenta pesos cada uno—Un auxiliar para el Fiscal con cien pesos—Gastos de oñ-

cina para el mismo cincuenta—Un ordenanza para el mismo cincuenta pesos: todo al mes.

Los miembros de la Cámara Federal de La Plata y su Procurador Fiscal, tendrán mensualmente mil doscientos pesos cada uno y un Secretario con quinientos—Un ujier con ciento ochentat—Un oficial 1º con ciento veinte—Tres escribientes con ochenta cada uno—Gastos de oficina y alquiler de casa, quinientos—Tres ordenanzas con cincuenta cada uno—Un auxiliar del Fiscal con ochenta—Gastos de oficina para el mismo, cincuenta—Un ordenanza para el mismo, cincuenta.

Los miembros de las Cámaras Federales de las ciudades de Córdoba y Paraná y los Procuradores Fiscales, gozarán del sueldo mensual de ochocientos pesos, y tendrá cada Cámara un Secretario con cuatrocientos pesos—Un ujier con ciento ochenta pesos—Un oficial mayor, un oficial 1º, tres escribientes con \$ 80—Gastos de oficina y alquiler de casa \$ 300—Dos ordenanzas a \$ 40 cada uno—Un auxiliar del Fiscal \$ 80—Ordenanza para el mismo \$ 40.

Estos sueldos y asignaciones regirán mientras se provea a ellos en la ley de Presupuesto.

### CAPITULO III

#### *De los Jueces de Sección*

**27.** La jurisdicción y competencia de los Jueces de Sección, será la determinada en la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de 14 de Septiembre de 1863 y demás leyes especiales dictadas por el H. Congreso.

**28.** Quedan derogadas las disposiciones contrarias a la presente ley.

**29.** Comuníquese al P. E.

## **LEY INTRODUCIENDO REFORMAS EN LOS TRIBUNALES DE LA CAPITAL**

LEY 7055 DE 16 AGOSTO DE 1910

Art. 4. Desde la sanción de la presente ley la Cámara de Apelaciones que funciona en la Capital Federal en virtud de la ley 4055, se compondrá de cinco miembros y sus resoluciones causarán ejecutoria en materia criminal.

## **LEY CREANDO UNA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LA CIUDAD DEL ROSARIO**

LEY NÚMERO 7099 DE 20 SEPTIEMBRE DE 1910.

Artículo 1º Créase en la ciudad del Rosario bajo el régimen de la ley 4055, una Cámara Fderal de Apelaciones, que ejercerá en la Provincia de Santa Fe la jurisdicción apelada estatuida por dicha ley.

1

## TERCERA PARTE

### **Ley de Procedimientos de los Tribunales Nacionales en lo Civil y Criminal**



# LEY 50, DE SEPTIEMBRE 14 DE 1863

## TÍTULO I

### *Disposiciones comunes a todos los juicios*

**Art. 1.** La jurisdicción de los Tribunales y Juzgados Nacionales, determinada por la Constitución, no es prorrogable sobre personas y cosas ajenas de ella, aún cuando las partes litigantes convengan en la prorrogación.

**2.** Siempre que un ciudadano demande a un extranjero, o un extranjero demande a un ciudadano, o el vecino de una Provincia demande al vecino de otra, el demandante deberá presentar con la demanda documentos o informaciones que acrediten que el caso entra en la jurisdicción nacional.

**3.** Siempre que de la demanda aparezca claramente que la causa no compete a la justicia nacional, el Juez deberá deshecharla de plano sin más actuaciones.

**4.** La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo por razón de su oficio o investidura que le venga de la ley, como el tutor por su pupilo, el superior o procurador de una comunidad por ésta; el albacea de una testamentaría por la misma, u otra que esté en igual caso, acompañará con su primer escrito los docu-



mentos que acrediten su personalidad, sin lo cual no se dará curso a sus pretensiones.

5. Los apoderados y procuradores acreditarán su personalidad, desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes con la competente escritura de poder.

6. La persona que litigue por su propio derecho, o el apoderado que lo haga en nombre ajeno, debe constituir un domicilio legal dentro de un radio de diez cuerdas del asiento del Tribunal, y en su defecto nombrará procurador de causas con quien se entiendan las diligencias que ocurran en el juicio, sin lo cual no se le prestará audiencia.

7. Cuando un escrito o diligencia sea subscripto a ruego, el escribano certificará a continuación, que la parte ha consentido en esta subscripción a su presencia.

8. El proceso original no se entregará a las partes litigantes, sin permiso expreso del Juez. Cuando estas quieran examinarlo, podrán hacerlo en la oficina del Juzgado, y tomar allí los apuntes que necesiten. De toda petición o escrito de que haya de darse traslado, así como de los documentos con que se instruya, se entregará una copia en papel simple que deberá hacer y firmar la parte que la haya presentado.

9. Las declaraciones de las partes absolviendo posiciones, y las de los testigos que presentaren para probar sus intenciones, serán recibidas en presencia del Juez de la causa y de las partes litigantes. Si estas diligencias hubieren de evacuarse en diferente pueblo, serán sometidas a la autoridad judicial allí existente.

10. El actor en toda especie de juicios, ha de producir con su demanda, las escrituras y documentos que justifiquen el de-

recho que deduce; y de los que no pueda presentar por no obrar en su poder, hará mención con la individualidad posible sobre lo que de ellos resulte, y del archivo, oficina pública, o lugar donde se encuentren los originales. Después no se le admitirán nuevos documentos, que no sean de fecha posterior a la demanda, o bajo juramento de que antes no había tenido noticia de ellos.

**11.** El demandado presentará también con la contestación de la demanda los documentos en que funde sus excepciones, quedándole la facultad, en el progreso del juicio, de presentar los demás que descubra posteriormente.

**12.** Bastará acusar una sola rebeldía, la cual se despa-  
chará en el término de veinticuatro horas; y pasadas éstas, se tendrá por decaído el derecho que hubiese dejado de usar la parte a quien se le haya acusado.

**13.** La sentencia definitiva ha de contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a las acciones deducidas en juicio, condenando o absolviendo en el todo o en parte, y fijando la persona condenada o absuelta, y la cosa sobre que recae la absolución o la condenación; expresando los fundamentos de hecho y derecho.

**14.** Cuando la demanda comprenda varios puntos, que aunque tengan conexión entre sí, sean objetos distintos, se dividirá la sentencia en capítulos, arreglando sobre cada uno la decisión que proceda en justicia.

**15.** La sentencia que contenga condenación de frutos, réditos o daños, fijará: o bien la cantidad de la condenación, si resultare líquida, o al menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación; y cuando no haya méritos para lo uno ni

para lo otro, se reservará para el juicio correspondiente, la acción sobre los frutos, réditos o daños.

**16.** Los Jueces y Tribunales podrán, para mejor proveer:

1º Decretar que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes;

2º Exigir confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestión y no resulten probados;

3º Decretar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que reputen necesario.

**17.** Los términos y dilaciones en los juicios comienzan a correr desde el emplazamiento, citación o notificación de la providencia que llame la persona emplazada, citada o notificada a usar de un derecho, o a cumplir con una obligación que le imponga la ley.

**18.** El día de la notificación no se cuenta en ningún término legal, pero sí el del vencimiento.

**19.** Tampoco se cuentan en los términos legales los días feriados en que no pueden actuarse diligencias judiciales.

## TÍTULO II

### *De la recusación de los miembros de la Suprema Corte*

**20.** Los miembros de la Suprema Corte no pueden ser recusados, sino por las causas enumeradas en esta ley (1).

---

(1) Ver ley n° 3266, sobre recusación sin causa de los miembros de la Suprema Corte, pág. 225.

**21.** En ningún caso puede ser recusado el Procurador General; pero la Corte puede declararle impedido siempre que le manifieste alguna causa que a juicio de ella le inhabilite para desempeñar convenientemente su ministerio. La Corte en este caso, en el mismo auto en que declare impedido al Procurador General, nombrará un letrado que lo subrogue, cuyo nombramiento quedará sin efecto si las partes se conformasen con que intervenga aquel magistrado, no obstante el impedimento (1).

**22.** Toda vez que a consecuencia de la recusación queden separados dos de los miembros de la Corte, los tres restantes conocerán del pleito, pero si se inhabilitase mayor número, se nombrarán abogados que integren el de tres, no debiendo completarse el de cinco, sino cuando los interesados lo pidan a su costa.

**23.** Toda vez que fuesen recusados o resultaren impedidos todos o la mayoría de los miembros de la Corte Suprema, se integrará el Tribunal insaculando a la suerte el número de conjuces que se necesite de una lista de 25 abogados que la Corte formará el 1º de Enero de cada año (2).

**24.** Los conjuces deben ser recusados con los mismos requisitos que los miembros titulares; para ser conjuce no se requiere las condiciones que se necesitan para ser miembro de la Suprema Corte, debiendo, sin embargo, tener al menos las que se necesita para ser Juez de Sección.

**25.** Por el hecho de ser actor o demandado o tener interés en un pleito que girase ante la Suprema Corte un miembro de ella, no quedan impedidos los demás.

**26.** El escrito de recusación debe contener la expresión de

---

(1) Véase ley n° 4162, sobre integración de los Tribunales Federales en los casos de recusación o impedimento, pág. 232.

(2) Véase nota anterior.

una de las causas enumeradas en esta ley, la indicación de los nombres de los testigos y de su residencia, y el juramento de no proceder el recusante con malicia.

**27.** Los testigos no podrán ser más de seis, ni el recusante valerse de otros que los indicados en el escrito de recusación.

**28.** Presentando este escrito, el Secretario le pondrá cargo, y dará cuenta de él en el mismo día. Si de la lectura del libelo resultare que la causa alegada para la recusación no es de las enumeradas en esta ley, o hubiera sido deducida despues de la conclusión del pleito, la Corte la desechará de plano. Si la causa fuese legal, y la recusación deducida en tiempo hábil, se comunicará por oficio al recusado, y si éste no se reconociese impedido, se recibirá aquella a prueba con todos cargos por el término improrrogable de diez días, si ésta hubiera de hacerse dentro del Municipio, por veinte si dentro de la Provincia, aumentando un día más por cada siete leguas, si los testigos o los documentos de que haya de valerse el recusante existieren fuera del territorio de ésta.

**29.** Vencido el término probatorio, el Secretario hará relación del artículo en el acuerdo, y la resolución que pronuncie la Suprema Corte, hará cosa juzgada.

**30.** El recusado no podrá asistir a la vista ni a la votación del artículo.

### TÍTULO III

#### *De la recusación de los jueces seccionales*

**31.** Los Jueces Seccionales deben ser recusados con las mismas formalidades que los miembros de la Suprema Corte, y sólo por las causas que en esta ley se enumeran.

**32.** Si la causa alegada no fuere de las que se especifican en esta ley, el Juez la desechará de plano, y proseguirá el juicio, pues su resolución hará cosa juzgada.

**33.** En caso de que la causa alegada sea de las de la ley, el Juez, sin más trámite, recibirá a prueba el incidente con todos los cargos, por el término que corresponda, con arreglo al inciso 2º del artículo 28.

**34.** Vencido el término, el Escribano pondrá de oficio una anotación en que lo haga constar, y en el mismo día llevará los autos al despacho con la prueba producida.

**35.** El Juez, acto continuo, llamará autos para sentencia, con noticia de las partes, y resolverá el artículo dentro de los tres días subsiguientes al de la última notificación.

**36.** Si el Juez se diere por recusado y ambas partes se conformaren con la sentencia, tácita o expresamente, librará auto mandando pasar el expediente al Juez Seccional más inmediato, con conocimiento de los interesados, y previo el pago de las costas por ellos o por el que debiera pagarlas si hubiere condenación (1).

**37.** En caso de que no hiciere lugar a la recusación, condenará en costas al recusante, y le concederá sólo en relación el recurso de apelación, si lo dedujere, elevando el expediente a la Suprema Corte.

**38.** El Secretario, luego que reciba el expediente, dará cuenta a la Corte, la que mandará ponerlo en la oficina por cinco días, dentro de los cuales podrán las partes recusar a los miembros de ella.

---

(1) Ver ley 935, pág. 224 y la ley complementaria 4182, art. 3.

**39.** Pasado este término sin que se hubiere deducido recusación, el Secretario informará de ello con la correspondiente anotación, y la Corte designará el día de la vista en audiencia pública, en la que podrán informar *in voce* los interesados, sus representantes o letrados.

#### TÍTULO IV

##### *De la recusación del secretario de la Suprema Corte y de los escribanos de Sección*

**40.** No es permitido recusar al Secretario de la Suprema Corte; pero las partes pueden, y el secretario debe manifestar toda causa de recusación o impedimento que haya contra él, a fin de que, tomada en consideración, resuelva la Corte lo que juzgue más conveniente.

**41.** Los Escribanos Seccionales pueden ser recusados por alguna de las causas enumeradas en esta ley.

**42.** Deducida la recusación, el juez averiguará sumariamente el hecho en que se funde, y sin más trámite resolverá el artículo, sea desechando la recusación y mandando proceder adelante, sea admitiéndola y nombrando en ese caso otro Escribano para que actúe. (1). Esta resolución es inapelable.

#### TÍTULO V

##### *De las causas de recusación*

**43.** Son justas causas de recusación:

1° El parentesco de consanguinidad con algunos de los li-

---

(1) Ver ley 4162, art. 8, pág. 232.

tigantes dentro del cuarto grado, y el de afinidad dentro del segundo, computados civilmente;

2ª La comunidad o sociedad, que existan, pendiente el pleito, entre el Juez o sus parientes consanguíneos, o afines dentro del segundo grado civil, y cualesquiera de los litigantes, aunque la sociedad sea en participación, pero no la anónima.

3ª Ser el Juez o sus parientes, dentro del segundo grado, acreedores, deudores o fiadores del litigante, o haber recibido de él beneficios de importancia, o despues de comenzado el pleito, dádivas, aunque sean de poco valor;

4ª La amistad entre el Juez y el litigante, antes o despues de comenzado el pleito, que se manifieste por una grande familiaridad;

5ª Cuando medie odio o resentimiento del Juez contra el recusante por hechos conocidos, o que en los seis meses anteriores al pleito le hubiese amenazado en disensiones privadas;

6ª Si hubiese pleito pendiente entre el Juez y el recusante, o le hubiese acusado criminalmente antes o despues de iniciado aquél, o en cualquiera ocasión le hubiere hecho daño grave en su persona, honor o bienes;

7ª Si siendo Juez hubiese manifestado su opinión sobre el pleito antes de proferirse sentencia, o hubiese dado recomendaciones sobre él, antes o despues de principiado;

8ª Siempre que por cualquier causa o relación tenga el Juez interés en la resultas del pleito;

9ª Haber sido el Juez defensor de alguno de los litigantes, o emitido dictamen en el pleito como letrado.

**44.** La recusación puede ponerse en cualquier estado de la causa antes de declararse por conclusa para definitiva. Pero siempre que un pleito estuviese visto, y para votarse sobre artículo que cause sentencia interlocutoria, no podrá usarse de la recusación hasta despues de publicado ésta.



## TÍTULO VI

### *De las cuestiones de competencia*

45. Las cuestiones de competencia pueden proponerse como excepciones dilatorias ante el Juez que se considere incompetente, u ocurriendo al que se crea competente, y pidiéndole que dirija oficio al que estime no serlo, para que se inhíba y remita el expediente.

46. En este segundo caso, si el Juez estimare fundada la petición, mandará librar el oficio, acompañando testimonio del escrito en que se le ha solicitado, del auto recaído en él, y demás que juzgue necesario para sostener su competencia.

47. Recibido el oficio por el Juez a quien fué dirigido, oírà a la parte que ante él litiga, y resolverà inhibiéndose o negándose a hacerlo.

48. Esta sentencia, en el primer caso, será apelable en relación y en ambos efectos para ante la Suprema Corte.

49. Si accediese a la inhibición, consentida o ejecutoriada la sentencia, remitirá el expediente, con emplazamiento de las partes, al Juez que se lo haya pedido.

50. Si la denegare, le comunicará su resolución con testimonio de lo que haya expuesto la parte y lo demás que crea necesario en apoyo de su competencia.

51. En este oficio exigirá también que se le conteste para continuar actuando si se le dejare en libertad, o remitir los autos a la Suprema Corte, para que determine lo que corresponda.

**52.** Recibido este oficio, el Juez a quien fué dirigido, o proveerá inhibiéndose y mandará remitir lo actuado con noticia de las partes al Juez que reconoce como competente, o si insistiere en la inhibitoria, lo comunicará al mismo para que remita sus autos a la Suprema Corte, y él remitirá los suyos.

**53.** Cuando la cuestión de competencia se deduzca ante el Juez que se considera incompetente, se seguirá el procedimiento indicado para las excepciones dilatorias.

**54.** Cuando el Juez que se considera competente por la parte, rehusare admitir la demanda por juzgarse incompetente, podrá apelarse de su resolución para ante la Suprema Corte, a la cual se remitirá el expediente en relación.

## TÍTULO VII

### *Del orden de proceder en el juicio ordinario* *Disposiciones preliminares*

**55.** Antes de entablarse una demanda ordinaria puede pedirse:

1º Que se reciba información *ad perpetuam* de testigos gravemente enfermos, o muy ancianos, o que estén próximos a ausentarse del país, y dada, se reservará para su tiempo;

2º Que la persona que va a ser demandada conteste a las preguntas que le haga el actor por escrito con el objeto de establecer su personalidad legal;

3º El arraigo, con escritura pública o con otra prueba fehaciente, y bajo la responsabilidad del solicitante;

4º La exhibición de la cosa mueble que va a ser materia de pleito, y su secuestro, en los casos establecidos por la ley;

5° La exhibición de un testamento o codicilo al que se crea heredero, coheredero o colegatario;

6° Que el comprador o vendedor, en el caso de evicción, exhiban los títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida;

7° Que el consocio o condueño, o el que tenga en su poder los documentos o cuentas de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba. El Juez accederá en estos casos a la pretensión si estima justa la causa en que se funda.

**56.** Fuera de los casos expresados en el artículo anterior, no podrá pedir el demandante posiciones, informaciones de testigos, ni ninguna otra diligencia de prueba antes de la demanda ordinaria.

## TÍTULO VIII

### *De la demanda*

**57.** La demanda será escrita y contendrá:

1° El nombre del demandante;

2° El del demandado;

3° La cosa demandada;

4° Los hechos en que se funde, explicados claramente en párrafos separados y numerados;

5° El derecho expuesto sucintamente;

6° La petición en términos claros y positivos.

**58.** Puede el demandante acumular todas las acciones que tenga, siempre que no sean contradictorias entre sí, mudar la acción entablada antes que la demanda sea contestada; demandar la propiedad si sólo había pedido la posesión, pero no ésta si estaba reclamada aquélla.

**59.** Presentada la demanda en la forma prescripta, el Juez correrá traslado al demandado, a quien se entregarán las copias de que habla el artículo 8.

**60.** Siempre que la cantidad cuestionada, o el valor de la cosa que se pida no exceda de la cantidad de doscientos pesos, los jueces procederán en juicio verbal, levantando acta en que conste la demanda, contestación. pruebas y sentencia.

## TÍTULO IX

### *De la citación o emplazamiento (1)*

**61.** Toda providencia judicial será notificada dentro de las veinticuatro horas a las personas que sean parte formal y directa en el asunto y no a las que sean accesoriamente interesadas en él, a no ser que así lo mande el Juez.

**62.** Si las notificaciones se hicieren en la oficina, se asentarán en el expediente; si en la casa de los litigantes, se harán leyéndoles íntegramente el auto que se va a notificar, el que llevará transcripto el actuario en una cédula; y poniendo constancia en ella de haberlo así verificado, y del día, hora y lugar en que se ha hecho la notificación, exigirá que la firme el interesado, o si no pudiese o supiere, que ruegue a un testigo lo haga a su nombre, debiendo en caso de rehusarse, solicitar dos vecinos que firmen la diligencia, no pudiendo servirse nunca de los dependientes de su oficina para ello.

**63.** Cuando el actuario no encuentre a la persona a quien se va a notificar una providencia, la notificará en el día siguiente, si no fuere feriado, y en caso de no hallarla, dejará la

---

(1) Véase ley 3649, adicional. Pág. 229.

cédula de que habla el artículo precedente, a su mujer, a sus hijos, a sus sirvientes o cualquiera de su familia; o si no la tuviese, a cualquier vecino, haciendo que la persona a quien la entregue. previa lectura, firme otra de igual tenor, que el actuario se reservará para agregar al expediente.

**64.** Si la notificación no pudiese hacerse de esta manera, el escribano fijará la cédula en la puerta del domicilio del interesado.

**65.** Cuando se ignora la residencia de las personas que han de ser citadas o fueren ellas inciertas, la citación se hará por carteles fijados en los lugares más públicos, y por los periódicos donde los haya, agregando al expediente uno de sus números, e insertando en él una copia textual de aquellos.

**66.** Si el que ha de ser citado se hallase ausente del lugar del juicio, pero dentro de la circunscripción del Juzgado, la citación se hará por medio de orden al Juez o autoridad del lugar de su residencia; mas si se hallare en ajena jurisdicción, se verificará por medio de la correspondiente carta requisitoria de emplazamiento.

**67.** Ninguna cédula podrá entregarse en día feriado que no se halle habilitado previamente, o en días habilitados, antes de salir, ni despues de puesto el sol.

**68.** Las notificaciones serán hechas en los asuntos que penden ante la Suprema Corte, por el Secretario en su oficina, o por acordadas firmadas por él, cuando se hayan de hacer fuera del Municipio, y por el ujier, cuando dentro de él; en los Juzgados Seccionales por sus Escribanos, y por las órdenes requisitorias, de que habla el artículo 66.

**69.** En las causas en que una Provincia sea parte, el emplazamiento se hará por medio de oficios dirigidos, el uno al gobernador y el otro al Fiscal o Procurador de la Provincia. Estos oficios serán firmados por el Presidente de la Suprema Corte.

**70.** Ningún ujier podrá autorizar cédula alguna, ni diligencia en la cual tengan interés ellos, sus mujeres o sus parientes consanguíneos, dentro del cuarto grado civil, o afines dentro del segundo.

**71.** Toda notificación que se hiciera en contravención a lo que esta ley prescribe, anulará lo que se obre despues de ella, y el escribano o ujier que la hubiese hecho, pagará veinticinco pesos fuertes por la primera vez, cincuenta por la segunda, privándosele del oficio si despues reincidiere.

## TÍTULO X

### *De las excepciones dilatorias*

**72.** Dentro de los nueve días subsiguientes al de la notificación, si se hubiese hecho en el lugar del juicio, o al del vencimiento del término del emplazamiento si se hubiere hecho fuera de él, podrá el demandado proponer excepciones dilatorias formando artículo previo a la contestación de la demanda.

**73.** Sólo son admisibles como excepciones dilatorias:

- 1ª La incompetencia de Jurisdicción;
- 2ª La falta de personalidad en el demandante o en su procurador;
- 3ª La litispendencia en otro Juzgado o Tribunal competente:

4.<sup>a</sup> Defecto legal en el modo de proponer la demanda.

**74.** Si el demandante fuera extranjero no domiciliado, se dará también excepción dilatoria la del arraigo del juicio.

**75.** A un mismo tiempo y en un mismo escrito, el demandado debe alegar todas las excepciones dilatorias: no haciéndolo así, sólo podrá usar de las que no alegare contestando a la demanda.

**76.** Del escrito en que se proponga la excepción, se dará traslado por tres días al actor. De lo que dijere éste, se dará copia al demandado.

**77.** Se recibirá a prueba el artículo, aunque no lo pidan las partes, si el Juez lo estimare necesario.

**78.** Vencido que sea el término, se pondrán durante dos días de manifiesto en la escribanía o secretaría, las pruebas producidas para que las partes puedan enterarse.

**79.** Enteradas las partes de las pruebas producidas, o cuando no las hubiere, dada la contestación por el demandante, mandará el Juez traer los autos a la vista.

**80.** Dentro del día siguiente podrán las partes pedir que se permita informar *in voce* a ellos o sus defensores, en cuyo caso se señalará al efecto el día inmediato.

**81.** Oídas las defensas, o pasado sin solicitarlo el día en que pueden pedir las partes señalamiento para la vista, procederá el Juez a pronunciar sentencia.

**82.** La sentencia se dictará precisamente dentro de ocho días a contar desde el siguiente al de la vista, si la ha habido,

o en otro caso desde el siguiente al en que se dicte la providencia mandando traer los autos.

**83.** El Juez resolverá previamente sobre la declinatoria y la litispendencia, si se propusieren estas excepciones, y si se declara competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás excepciones dilatorias.

**84.** La sentencia que recayere es apelable en relación y en ambos efectos.

## TÍTULO XI

### *De la contestación*

**85.** Dentro de los nueve días siguientes al de la notificación, o al del vencimiento del término señalado en el emplazamiento, si no se hubieren propuesto excepciones dilatorias, o si se hubieren propuesto, dentro de seis días contados desde aquél en que se mandó cumplir la sentencia ejecutoriada que resolvió el artículo, el demandado presentará el escrito de contestación a la demanda, observando las formas prescriptas para ésta, y oponiendo contra ella todas las excepciones que le favorezcan, so pena de no serle admitidas después. De este escrito se dará copia al demandante.

**86.** El demandado deberá además confesar o negar los hechos establecidos en la demanda, y su silencio o sus respuestas evasivas podrán estimarse como confesión de los hechos a que se refieren.

**87.** Toda vez que el demandado conteste la demanda confesando simplemente la deuda u obligación cuyo cumplimiento se le reclama, el Juez mandará que comparezca y se ratifique



en su confesión a su presencia y bajo de juramento, y hecha la ratificación, llamará autos y sentenciará la causa.

**88.** Dada una sentencia en virtud de confesión hecha en esta forma, la parte contra quien se ha dado no puede apelar de ella.

**89.** Si el demandado confesare los hechos o la obligación de la demanda, y alegare al mismo tiempo excepciones fundadas en hechos, los especificará con claridad, y el Juez, sin más trámite, recibirá la causa a prueba.

**90.** Si el demandado dedujere reconvencción al contestar la demanda, el Juez correrá traslado de ella al actor, y con su respuesta llamará autos.

## TÍTULO XII

### *De las actuaciones de prueba*

**91.** Siempre que el Juez considere necesario para resolver la causa, que se esclarezcan los hechos alegados, y no consentidos o confesados por las partes, aunque éstas no lo pidan, la recibirá a prueba.

**92.** El término ordinario de prueba no bajará de diez días, ni excederá de treinta si ella hubiere de hacerse dentro del municipio, aumentando en un día por cada siete leguas, si fuera de él, y dentro del territorio de la República.

**93.** El Juez, sin embargo, en el segundo caso, podrá conceder un término mayor, si el estado de las comunicaciones lo requiere.

**94.** Cuando la prueba haya de rendirse fuera de la República, se dará el término extraordinario que el Juez considere suficiente, atendidas las distancias y facilidad de las comunicaciones.

**95.** Para obtenerse cualquiera de los términos preindicados, el que lo solicite deberá:

1º Designar el lugar donde residen los testigos que nombrará, o los documentos cuyas fechas, contenido, registro o archivo indicará;

2º Consignar el valor de los costos en que hubiese de incurrir su colitigante, constituyendo apoderado que lo presente durante la prueba o dar fianza por la suma que estime el Juzgado;

3º Pedir ese término dentro de diez días contados desde la recepción a prueba, con juramento de que se vale de esos testigos, por no tener, dentro del país, otros con que probar los hechos contenidos en el interrogatorio.

**96.** Si esta petición se hiciera fuera de los diez días predichos, será desestimada de plano; si dentro de ellos, se comunicará traslado a la contraria, que deberá evacuarlo dentro de tres días, y con su respuesta o sin ella, el Juez resolverá el artículo. Esta resolución es apelable en ambos efectos.

**97.** Si al evacuar el traslado conviene la otra parte en la concesión del término, y presenta repreguntas a los testigos, serán insertas en el despacho rogatorio que se libre para su examen, y si les objeta tachas que sean admisibles ofreciendo probarlas en el lugar donde han de ser examinados, se insertarán también en él.

**98.** Cuando ambos litigantes hayan intentado hacer prueba fuera del territorio de la República, cada uno pagará sus

costas ; pero si uno sólo, y no hubiere probado lo que se propuso, será condenado en las costas de esa diligencia probatoria.

**99.** Concedido el término y ejecutoriada la providencia, se librarán los despachos rogatorios dentro del tercero día de la última notificación.

**100.** Los delegados se remitirán con oficio, al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República, para que éste los dirija al igual clase del Estado donde hayan de recibirse las declaraciones.

**101.** Ninguna persona, por privilegiada que sea, puede pedir restitución contra el lapso del término probatorio.

**102.** Si las partes no pidieren las diligencias necesarias de prueba, el Juez podrá ordenar de oficio :

- 1º Que los litigantes o uno de ellos, juren posiciones ;
- 2º Que se practique reconocimiento de peritos, inspección ocular y cotejo de documentos ;
- 3º Cualquiera otra diligencia probatoria que sea conducente al descubrimiento de la verdad.

**103.** El Juez asistirá siempre que le sea posible a las diligencias probatorias que hubieren de practicarse fuera de su juzgado, pero dentro del Municipio, y la Suprema Corte comisionará al efecto a uno de sus miembros.

En caso contrario o cuando las diligencias hayan de ejecutarse fuera del municipio, se comisionará a los jueces o autoridades del lugar, los cuales observarán en la probanza las disposiciones de esta ley concernientes a ella.

**104.** En toda providencia sobre prueba se señalará el día en que la diligencia deba evacuarse o darse cuenta de ella, citándose la víspera del día en que haya de practicarse.

**105.** Si la providencia se dictare en rebeldía, el contumaz podrá solicitar su rescisión en la forma y términos prescriptos en el título respectivo.

**106.** Las diferentes actuaciones de prueba se practicarán en audiencia pública, salvo los actos que deban ejecutarse privadamente para evitar escándalo.

**107.** Las partes podrán ver las actuaciones de prueba en la Escribanía o Secretaría.

### TÍTULO XIII

#### *De las posiciones*

**108.** Despues de contestada la demanda y antes de verse el pleito en definitiva, podrá cada parte pedir que su adversario responda con juramento a posiciones concernientes al punto litigioso.

**109.** No podrán exigirse nuevas posiciones sobre hechos que hayan sido una vez objeto de ellas.

**110.** El que hubiere de ser interrogado, será citado para el acto por cédula, con un día de intervalo, y bajo apercibimiento de que se le estimará por confeso, si, no asistiéndole justo motivo, dejare de comparecer o declarar.

En caso de urgencia podrá reducirse a horas el término.

**111.** La parte que no quisiere consignar por escrito las posiciones, reservándose manifestarlas en el interrogatorio, podrá hacerlo, pidiendo únicamente que la parte contraria sea citada al efecto.

En el día señalado para evacuar las posiciones, el intere-

sado las manifestará, y el juez las mandará extender, e interrogará sobre ellas si fuesen pertinentes y admisibles.

**112.** La parte será examinada sobre cada hecho, y sobre todas las circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad.

Cada parte responderá por sí misma de palabra, sin valerse de ningún borrador de respuesta, a presencia de la contraria, si asistiere. Si ésta no asistiere podrá celebrarse careo entre ellas.

En la Suprema Corte el examen se hará por el Presidente, pero los demás miembros con su venia, podrán hacer a las partes las nuevas preguntas que estimen oportunas.

**113.** Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzguen convenientes con permiso y por medio del Juez; pero sin atravesar la palabra ni interrumpirse.

**114.** El Escribano y el Secretario, en su caso, extenderán las declaraciones y contestaciones en los mismos términos que las den las partes, o al menos conservando su lenguaje tanto cuanto sea compatible con la naturaleza del acto; y terminado éste, se las leerán preguntándoles si persisten en ellas o tienen algo que añadir o variar.

Si añadieren a variaren algo a lo dicho, se extenderá a continuación, expresando en todo caso, la circunstancia, cuando ocurriere, de haber rehusado o no podido firmar.

**115.** Si no asistiéndole justo motivo no compareciere la parte a declarar, o compareciendo rehusase responder, o respondiere de una manera evasiva o ambigua, se le tendrá por confesa.

**116.** Si por achaque o enfermedad, el Juez Seccional o un miembro comisionado de la Suprema Corte, hubiere de tomar-

le declaración en su casa, lo verificarán ante el Escribano o Secretario a presencia o fuera de la presencia de la otra parte, según lo aconsejaren las circunstancias.

**117.** Si el Juez o comisionado, al trasladarse a la casa de la parte, averiguaren que ha podido comparecer, diferirán el interrogatorio a la próxima audiencia, y en ella será condenada, la que alegare falso impedimento para no comparecer, en una multa que no exceda de cincuenta pesos.

**118.** Si la parte residiere fuera del municipio, se librará despacho con los insertos necesarios, fijando término para la devolución del interrogatorio.

#### TÍTULO XIV

##### *De la prueba de testigos*

**119.** La providencia que mande recibir la causa a prueba de testigos, expresará los hechos sobre que deba ésta recaer, los cuales serán precisos y conducentes.

**120.** Tres días antes del señalado para el examen de los testigos, se pondrá de manifiesto en la Secretaría una lista expresiva de los nombres, profesión y domicilio de los testigos presentados por las partes.

Cada una de éstas podrá oponerse a que sea examinado el testigo que no estuviere incluido o claramente designado en la lista.

**121.** Los testigos que rehusaran presentarse voluntariamente a declarar, serán citados por cédula con un día al menos de anticipación al señalado para su examen en audiencia pública.

Serán citados a instancia de la parte que los presente, y en virtud del auto en que se admite la información, sin que pueda dejárseles copia de éste, ni de interrogatorio alguno.

**122.** El Juez podrá proveer:

1° Que el testigo inobediente sea conducido a su presencia por la fuerza pública;

2° Que esté arrestado hasta el día señalado para recibirse su declaración si no pudiere tomarse desde luego.

**123.** No se impondrán estas penas:

1° Si la cédula fuere nula;

2° Si la cédula no contuviere la cita de las disposiciones penales del artículo que precede;

3° Si el testigo hubiere sido citado con intervalo de tiempo menor que el prescripto en el artículo 121;

4° Si estuviere legítimamente impedido para comparecer.

**124.** Las partes pueden proponer y probar acerca de los testigos, dentro del mismo término de prueba, y el Juez calificar según las reglas de sana crítica, las circunstancias y tachas conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaraciones.

**125.** El día señalado para el examen leerá el Escribano el auto de prueba en audiencia pública, fuera de la presencia de los testigos.

Las partes darán sumariamente sobre los hechos expresados en el auto, las explicaciones que parezcan necesarias.

**126.** Los testigos serán examinados separada y sucesivamente por el orden en que vinieren sentados en las listas que les corresponden, si estuvieren presentes, empezando por los del actor, o los de la parte que sustenta los hechos controvertidos.

**127.** El testigo será primeramente interrogado:

1º Por su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio;

2º Si es pariente por consanguinidad o afinidad, y en qué grado, de alguna de las partes litigantes;

3º Si es criado suyo, doméstico o dependiente;

4º Si es acreedor o deudor suyo;

5º Si tiene interés en el pleito;

6º Si tiene alguna otra relación con alguna de las partes.

**128.** Antes de declarar, prestarán los testigos juramento en la forma acostumbrada; pero los menores de dieciseis años podrán ser examinados sin él.

**129.** En el examen de los testigos se observarán las disposiciones de los artículos 112, 113 y 114.

**130.** La parte que interrumpiere al testigo en su declaración, podrá ser condenada en una multa que no exceda de diez pesos fuertes. En caso de reincidencia incurrirá en doble multa y podrá ser expulsada de la audiencia.

**131.** Cada testigo despues que evacúe su declaración, permanecerá en la Sala del Tribunal hasta que se concluya la información, si el Juez no dispusiere otra cosa.

**132.** Los testigos cuyas declaraciones parezcan contradictorias podrán ser careados entre sí.

**133.** Si el testigo reclamare alguna indemnización pecuniaria por su asistencia al juicio, el Juez determinará la que fuere justa, tomando en cuenta el estado y profesión del testigo, y el tiempo que dure la información. La providencia del pago de la indemnización será ejecutiva contra la parte, a cuya instancia hubiere sido el testigo citado.



**134.** Si la información ofreciere indicios graves de falso testimonio o de soborno de los testigos, el Juez decretará acto continuo la prisión de los presuntos reos, mandando al mismo tiempo sacar un tanto de la parte de la prueba referente a los indicios para proceder en el juicio correspondiente al castigo de los culpables.

**135.** Si los testigos citados no pudieren ser examinados en el día señalado para ello, lo serán en los siguientes sin necesidad de nueva citación.

**136.** A petición de cualquiera de las partes que pretenda producir nuevos testigos, podrán prorrogarse el término concedido para la prueba, si fuere menor que el ordinario.

**137.** En los asuntos en que haya urgencia podrán abreviarse los términos señalados en los arts. 120 y 121.

También podrán ser examinados los testigos el mismo día en que se provea el auto de la prueba.

**138.** Si la inspección del lugar contribuyere a la claridad del testimonio, podrán ser examinados los testigos en dicho lugar.

**139.** Si un testigo no pudiese comparecer en persona, será examinado en su casa ante el Escribano o Secretario, en presencia o fuera de la presencia de las partes, según las circunstancias.

Cuando se solicite su examen fuera del municipio, se librará, con citación contraria, despacho al juez o autoridad del lugar, señalando un término dentro del cual debe volverse diligenciado; y las partes podrán designar personas que las representen en las actuaciones que ante aquéllos hayan de practicarse.

**140.** El Presidente y el Vicepresidente de la República, y los Ministros de aquél, los Gobernadores de Provincia y sus Ministros, los Obispos, los miembros de los Tribunales Superiores, los del Congreso Nacional y Cámaras Provinciales, los Jueces, los Jefes Militares de Coronel inclusive arriba, y demás empleados y Jefes de Oficina, que, por la naturaleza de sus funciones, no podrían permanecer durante las audiencias en que se examinen los testigos, cuando fueren presentados como tales, serán examinados por medio de informe.

## TÍTULO XV

### *De la prueba de peritos*

**141.** Cuando el Juez ordenare algún reconocimiento facultativo, designará el objeto sobre el cual deba recaer.

**142.** Dentro de las veinticuatro horas posteriores a la notificación de la providencia relativa al reconocimiento, las partes, de común acuerdo, nombrarán uno o tres peritos, para que lo practiquen; y no haciéndolo, el Juez los designará en el mismo número, limitándose a uno si se tratare de un objeto de poco valor.

**143.** Los peritos podrán ser recusados por causas posteriores a su nombramiento. También podrán serlo por causa anterior cuando hubieren sido nombrados de oficio.

En el último caso no se admitirá la recusación si no se propusiere dentro del término de tres días siguientes al del nombramiento.

**144.** Los peritos podrán ser recusados por las mismas causas expresadas en el art. 43. con citación y audiencia de las partes.

**145.** Los peritos serán citados en la misma forma que para los testigos prescribe el art. 121.

Si no comparecieren o rehusaren dar su dictamen, incurrirán en las mismas penas, salvo la de arresto.

Su indemnización se determinará en la propia forma.

**146.** Si el objeto del reconocimiento facultativo fuere de tal naturaleza que los peritos puedan dar su dictamen despues de hecho, serán examinados acto continuo en audiencia pública cada uno por separado, en el orden que el Juez determine y en la forma prescripta respecto a los testigos.

**147.** Si el reconocimiento decretado exigiere la inspección ocular del sitio, o algún otro examen previo, el Juez hará prestar de antemano a los peritos juramento de llenar bien y fielmente el cargo.

También señalará el día en que hayan de dar su dictamen, determinando si lo han de hacer de palabra o por escrito.

**148.** Si el Juez determinare que den su dictamen por escrito, los peritos lo extenderán, despues de haber conferenciado entre sí.

El dictamen comprenderá su juicio motivado, y en caso de discordia el de cada uno de ellos.

El dictamen será extendido por uno de los peritos, y firmado por todos.

El perito que desintiere del dictamen de la mayoría podrá extender el suyo por separado.

**149.** Si todos los peritos no supieren escribir, o si ninguno de ellos pudiese redactar el dictamen, el Juez comisionará para que lo escriba, a la persona que estime conveniente.

En este caso, el dictamen será firmado por el que lo hubiere escrito y por los peritos que supieren.

El actuario extenderá por diligencia la entrega del dictamen anotando en éste el día.

**150.** La diligencia será firmada por el actuario y por el que le haya entregado el dictamen si supiere.

**151.** En la audiencia pública señalada para ver el dictamen de los peritos, lo leerá el actuario. El Juez podrá proveer que comparezcan los peritos a dar las explicaciones conducentes al esclarecimiento del dictamen.

**152.** Si el Juez no se creyese suficientemente ilustrado con el primer reconocimiento y dictamen pericial, podrá proveer que se practique otro por los mismos peritos o por otros.

#### TÍTULO XVI

##### *De la inspección ocular*

**153.** Cuando se hubiese acordado la inspección ocular de algún sitio, podrá examinarse éste de la manera prescripta por los Títulos precedentes respecto a las partes, a los testigos y a los peritos.

#### TÍTULO XVII

##### *De la comprobación de los documentos y de las escrituras no reconocidas o argüidas de falsas*

**154.** Tendrá lugar la comprobación de documentos y escrituras, siempre que las presentadas sean útiles para la decisión del negocio, y se encuentren en los casos siguientes:

1º Si una de las partes sostiene que la escritura producida es falsa;

2º Si tratándose de un documento privado, la parte a quien se atribuye negare su letra y firma.

3º Si una de las partes no reconociere como escrito o firmado de puño de su causante, o de un tercero, el documento privado que a uno de éstos se atribuya.

**155.** En los casos del artículo anterior, el Juez mandará comparecer a las partes en persona, el día que determine.

De la comparecencia sólo se dispensará a la parte que no pueda asistir por ausencia o impedimento grave, en cuyo caso deberá representarla un apoderado especial.

**156.** El día señalado el Juez intimará a la parte que hubiere presentado el documento argüido de falso, que declare si está en ánimo de servirse de él.

**157.** Si la parte incurriere en rebeldía, rehusare responder ó declarare que no trata de servirse del documento argüido de falso, será éste desechado del proceso.

**158.** Si la parte declarare que piensa servirse del documento, el Juez mandará a la contraria que declare si persiste en sostener que el documento es falso, o en no reconocerle por suyo o no estimarle de aquel a quien lo atribuya la contraria.

**159.** Si esta parte incurriere en rebeldía, rehusare responder o no persistiese en su primera declaración, el documento presentado se admitirá como auténtico, y se estimará por reconocida su letra y firma.

**160.** Si la parte persistiere en la declaración, el Juez ordenará que explique los fundamentos que le inducen para argüir de falso el documento o no reconocerlo por auténtico.

Si la parte arguye de falso el documento, será interpelada para que declare qué clase de falsedad es la que le atribuye.

**161.** En el caso del artículo anterior, el documento se entregará inmediatamente al Escribano para que lo custodie, reconociéndolo el Juez, y haciendo constar por diligencia el estado material en que se encuentre, las enmiendas, entre renglonaduras y raspados que en él se advirtieren, y rubricando todas sus hojas.

También las rubricarán las partes o sus apoderados y si no pudieren o no quisieren, se hará constar así por diligencia que firmará el Escribano.

**162.** El Juez mandará por un auto preparatorio:

1º Que las partes produzcan los documentos, y articulen los hechos conducentes para probar la autenticidad o la falsedad de lo impugnado.

2º Que señalen las escrituras o documentos, que pueden servir para el cotejo. Si del documento impugnado existiere protocolo o registro, el Juez podrá disponer que sea traída la matriz.

**163.** Las partes, antes del día señalado, se comunicarán respectivamente los documentos que piensen producir y los hechos que traten de alegar.

**164.** El depositario del original o matriz cuya presentación se hubiere ordenado será citado o apremiado a hacerlo en la forma prevenida respecto a los testigos en los artículos 121, 122 y 123.

**165.** Luego que venga la matriz se procederá en la forma prescripta por el art. 161. Sin embargo, el Juez podrá dejar la matriz en poder de su depositario, imponiéndole la obligación de producirla en las audiencias sucesivas.

**166.** El día señalado por el auto preparatorio, si los documentos producidos fueren concluyentes en favor o en contra de la autenticidad del impugnado, el Juez proveerá en seguida admitiéndolo o desechándolo del proceso.

**167.** En el caso contrario, por un segundo auto preparatorio, el Juez decretará la comprobación del documento por medio del cotejo con otro u otros indubitados. En el mismo auto señalará los documentos indubitados que deban servir para el objeto, disponiendo que sean traídos al efecto.

También recibirá prueba de testigos sobre los hechos pertinentes articulados por las partes.

**168.** Se admitirán como auténticos para el cotejo los documentos y escrituras, que de común acuerdo señalaren las partes.

**169.** Si las partes no estuvieren acordes en la designación, no se tendrán como indubitados para el cotejo más que los siguientes:

- 1° Los documentos auténticos;
- 2° Los privados reconocidos por las partes;
- 3° El impugnado en la parte que no hubiese sido argüido de falso.

la parte a quien se atribuya lo escrito en el impugnado, o la firma que lo autorice, podrá ser requerida a que forme un cuerpo de escritura que en el acto le dictará el Juez. Si la parte se negase, se le podrá estimar confesa en el reconocimiento del documento impugnado.

**170.** En defecto o insuficiencia de documentos de cotejo,

**171.** En defecto de los medios de comprobación expresados en los dos artículos que preceden, podrá emplearse cualquiera otro que sea bastante para calificar de indubitado el que sirva para el cotejo.

**172.** Respecto a los documentos de cotejos, y sus depositarios, se procederá con arreglo a los artículos 164 y 165.

**173.** El Juez por sí mismo hará la comprobación por medio del cotejo, después de haber oído las observaciones de las partes.

**174.** Sin embargo, siempre que lo estime conveniente, podrá consultar el dictamen de peritos, observando lo dispuesto en el art. 141.

Los peritos, en este caso, serán nombrados de oficio, con arreglo en cuanto a su número a lo prevenido en el art. 142 y examinados verbalmente en la forma prescripta para los testigos.

**175.** La prueba testimonial de los hechos se practicará con arreglo al Título XIV.

**176.** Si las diligencias de comprobación resultaren indicios acerca de los autores o cómplices de la falsedad, y éstos vivieren y fuere indispensable la decisión previa del proceso criminal para fallar el civil, se suspenderá el curso de éste hasta la decisión de aquél.

#### TÍTULO XVIII

##### *De la conclusión de la causa para definitiva*

**177.** A los dos días de vencido el término probatorio, el Escribano pondrá de oficio el certificado de las pruebas que se hubieren producido, agregándolas y hará saber a las partes por cédula, que el expediente está en la oficina por seis días, para que puedan instruirse de aquellas, y presentar, si les conviene, dentro del mismo término, un escrito sobre su mérito.



**178.** Pasados los seis de que habla el artículo precedente o si en la causa no se hubieren alegado hechos o las partes hubieren convenido en la certeza de los alegados, despues de contestada la demanda o la reconvención, el escribano pondrá el expediente al despacho y el Juez, acto continuo, llamará autos para sentencia, mandando en la misma providencia que se tasen y paguen las costas por quién corresponda.

**179.** Si la causa pendiere ante la Suprema Corte, el Secretario presentará el expediente en el acuerdo, y se mandará en el día que pase al relator (1).

**180.** En los Juzgados Seccionales, las partes podrán pedir dentro de dos días siguientes al de la notificación de la providencia de autos, que se señale día para que ellas o sus defensores puedan informar *in voce*, y el Juez lo designará a la posible brevedad (2).

**181.** En la Suprema Corte se podrá informar *in voce*, el día de la vista de la causa.

**182.** No haciéndose la pretensión de que habla el art. 180, el Juez dictará sentencia dentro de veinte días siguientes al en que se hubiere notificado a las partes la providencia de autos.

Si se hubiere celebrado audiencia pública, dentro de veinte días siguientes al en que hubiere terminado aquella.

## TÍTULO XIX

### *Del procedimiento en rebeldía*

**183.** No compareciendo un litigante en virtud del emplazamiento, o no contestando la demanda en el término señalado,

---

(1) Ver ley 3375, art. 7. Pág. 227.

(2) Derogado por la ley 3981, art. 3. Pág. 230.

el proceso será sentenciado en rebeldía, si la acusare su adversario.

**184.** La rebeldía podrá acusarse por escrito, o de palabra, extendiéndose en este caso por diligencia que firmará el que la acuse.

**185.** Declarado en rebeldía el demandado, el actor obtendrá lo que pidiere, si fuere justo. Declarado el actor, el demandado será absuelto.

**186.** Para mejor proveer en rebeldía el Juez podrá mandar practicar de oficio la prueba que estime conveniente, con tal que no sea la de testigos.

**187.** No se declarará la rebeldía contra el demandado y se mandará emplazar de nuevo en el caso de que hubiese sido nula la cédula de emplazamiento.

**188.** Si por fuerza mayor y notoria, alguna de las partes no pudiere comparecer en el término del emplazamiento, el Juez suspenderá la declaración de la rebeldía, y ordenará que el litigante sea nuevamente emplazado.

**189.** Cuando fundándose la demanda en un mismo título, y teniendo un mismo objeto contra diferentes personas, las unas incurran en rebeldía y las otras no, el Juez suspenderá su decisión respecto a los rebeldes hasta pronunciar sentencia definitiva, que comprenda a todos los demandados.

**190.** La sentencia dictada en rebeldía, además de notificarse por cédula, cuando fuere posible, se fijará en los lugares públicos de costumbre, y se insertará en un periódico, donde los hubiere. La inserción se acreditará poniendo en el expediente un ejemplar del periódico. La fijación, por diligencia del actuario.

**191.** Si el litigante rebelde compareciere, cualquiera que sea el estado del juicio, será admitido como parte, y cesando el procedimiento en rebeldía, se entenderá con él la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradar. Si se presentara despues del pronunciamiento de la sentencia definitiva en última instancia, sólo podrá interponer contra ella el recurso de rescisión.

**192.** La rescisión podrá solicitarse por el rebelde dentro de quince días, contados desde el siguiente al de su notificación.

**193.** Si el condenado en rebeldía estuviere ausente, el Juez podrá señalarle en la sentencia un plazo más largo para que pueda solicitar su rescisión.

**194.** Aunque sean pasados dichos plazos, el condenado en rebeldía podrá solicitar su rescisión, acreditando que no ha podido tener noticia de la demanda ni de la sentencia, o solicitar la misma rescisión por ausencia, enfermedad grave u otro accidente semejante.

**195.** En el caso del artículo anterior, no se admitirá el recurso que entable el condenado, si estando presente lo dedujere pasados los quince días posteriores al de haber cesado el impedimento o haber llegado a su noticia la demanda, la sentencia o alguna diligencia de su ejecución; o si estando ausente, dedujere el recurso despues de pasado el término preciso para hacerlo, según las distancias.

**196.** Tampoco se admitirá el recurso un año despues de haber tenido cumplido efecto la sentencia en rebeldía, en el caso de que ésta no se haya notificado.

**197.** El recurso de rescisión se comunicará por cédula de emplazamiento, so pena de nulidad. En la cédula se señalará para comparecer el término de seis días.

**198.** El recurso de rescisión deducido en la forma prescripta y plazos señalados suspenderá la ejecución de la sentencia en rebeldía, a menos que el Juez al dictarla no hubiere ordenado su ejecución, sin perjuicio de la rescisión y previa fianza o sin ella.

**199.** En el caso del artículo 194, no se suspenderá la ejecución de la sentencia, si el Juez no lo mandare al admitir el recurso de rescisión.

**200.** Si se rescindiere la sentencia, continuará la actuación desde el punto en que se hallaba antes del incidente en rebeldía.

**201.** El Juez podrá mandar que se guarde, o rescindir en todo o en parte su primera sentencia dictada en rebeldía.

**202.** La parte que por segunda vez fuere condenada en rebeldía, no podrá entablar el recurso de rescisión en el mismo negocio.

## TÍTULO XX

### *De la reposición de las providencias interlocutorias*

**203.** Dentro de tres días contados desde la notificación, la parte a quien perjudique podrá solicitar la reposición de las providencias interlocutorias (1).

**204.** La reposición se decidirá por el mismo Juez que pronunció la providencia, con un sólo traslado.

**205.** La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso de reposición fuese acompañado del de apelación

---

(1) Modificado en esta forma por la ley 3981, art. 3, pág. 230.

en subsidio, y la providencia reclamada reunire las condiciones establecidas en el art. 206, para que la interlocutoria sea apelable (1).

## TÍTULO XXI

### *De los recursos de apelación*

**206.** El recurso de apelación sólo se otorgará de las sentencias definitivas y de las interlocutorias que causen perjuicio irreparables por aquéllas.

**207.** El auto que abra la causa a prueba, es inapelable; contra el que la deniegue podrán interponerse los recursos de reposición y apelación en subsidio (2).

**208.** Dentro de cinco días contados desde el de la notificación de la sentencia, la parte que se sintiere agraviada, podrá interponer el recurso de apelación para ante la Suprema Corte.

**209.** La apelación se interpondrá por escrito y se hará saber al apelado por cédula.

**210.** El Juez seccional proveerá sobre ella lo que corresponda, sin traslado ni otra substanciación.

**211.** Si la apelación fuese admitida libremente y en ambos efectos, se mandará por la misma providencia que se remitan los autos originales a la Suprema Corte. La remesa se hará por conducto del correo y bajo certificado, a costa del apelante, previa citación y emplazamiento de las partes y señalamiento de un término suficiente para la mejora del recurso. Este término no podrá exceder de tres días, si la providencia de que

---

(1) Modificado en esta forma por la ley 3981, art. 1, pág. 230.

(2) Véase nota anterior.

se apelare hubiere sido pronunciada por el Juez de la sección en que tenga su asiento la Suprema Corte; y de uno más por cada siete leguas, cuando fuere de otras secciones.

**212.** Si sólo se concediese la apelación en el efecto devolutivo, se mandará sacar compulsas de los autos, prefijándose término al escribano para darla concluida, y que se remita a la Suprema Corte. Pero si estuviese ejecutada la sentencia apelada, o no hubiere de practicarse diligencia alguna en su cumplimiento, se remitirán los autos originales.

**213.** En el mismo día en que los autos o las compulsas lleguen a la Corte, el Secretario dará cuenta, poniendo la correspondiente anotación para hacer constar el de su entrada, expresando en la misma, el día en que expire el término del emplazamiento.

**214.** Si el apelante no mejorase el recurso en el término señalado, se declarará desierta la apelación, y la sentencia consentida a la primera rebeldía que le acuse el apelado; devolviéndose los autos al Juez seccional, para que lleve a efecto su providencia (1).

**215.** Compareciendo el apelante, o quien debidamente lo represente, a mejorar el recurso, la Corte le señalará el término de nueve días para que exprese agravios. De la expresión de agravios se dará traslado al apelado o a su representante, por seis días, y con su respuesta, de la que se dará copia al apelante, se llamarán los autos y se pasarán al relator.

**216.** Si la parte a quien favorece la sentencia no se hubiere adherido a la apelación en primera instancia, podrá hacerlo en el escrito de contestación a la expresión de agravios, y en este caso se dará al apelante traslado de la adhesión.

---

(1) La ley 3375 ha suprimido la mejora del recurso, artículos 3 y siguientes. Pág. 227.

**217.** Si el apelante no expresase agravios en el término competente, con una sola rebeldía se declarará desierto el recurso, y se devolverán los autos. Pero si el apelado no contestara la expresión de agravios, se seguirá la instancia en rebeldía.

**218.** Los interesados, sus representantes o sus letrados, pueden informar verbalmente al tiempo de la vista de la causa, pudiendo también los últimos pedir venia para escribir en derecho, que no les deberá ser otorgada sino cuando, a juicio de la Corte, sean muy arduas las cuestiones jurídicas que se debaten. La venia debe pedirse antes de la vista de la causa, no debiendo exceder de quince días el plazo que se dé para expresarse. Producidos los informes, se agregarán al expediente, como parte integrante de él.

**219.** En las apelaciones de sentencia definitiva, podrán, así el apelante como el apelado, presentar nuevos documentos que se refieran a actos posteriores a la contestación de la demanda, o que siendo de fecha anterior, jure la parte que haga uso de ellos, que no habían llegado a su noticia, o que no pudo proporcionárselos en tiempo oportuno para producirlos en la primera instancia. Si el apelado los presentase con la contestación, se correrá traslado de ellos.

**220.** En esta instancia no podrá recibirse la causa a prueba sino sobre hechos deducidos de nuevo, o sobre aquellos que sin embargo de ser conducentes, no fueron admitidos a prueba en la primera.

**221.** En cuanto al término de prueba, medios probatorios de que puede usarse, y formalidades con que han de practicarse las probanzas, regirán las mismas disposiciones establecidas para la primera instancia.

**222.** La Suprema Corte, para mejor proveer, podrá ordenar que se practiquen de nuevo ante ella, las diligencias probatorias de primera instancia, que estimare viciosas o insuficientes.

**223.** Podrá también, a petición de todas las partes, resolver sobre lo principal, aun cuando la apelación hubiera recaído sobre un incidente de la causa.

**224.** No podrá fallar la Suprema Corte sobre ningún capítulo que no se hubiere propuesto a la decisión del inferior, salvo:

1º De compensación por causa posterior a la definitiva de primera instancia;

2º De intereses y cualesquiera otras prestaciones accesorias, vencidas después de la definitiva;

3º De daños y perjuicios causados desde su pronunciamiento.

**225.** Cuando lo pidiese el apelante, o cuando la cuestión que se ventila fuere de fácil resolución, o el objeto litigioso de poca importancia, y en los casos designados en esta ley, el Juez concederá el recurso sólo en relación, mandando remitir los autos a la Suprema Corte, con noticia de las partes.

**226.** Llegados los autos, el Secretario dará cuenta en el acuerdo, y la Corte los pasará al relator, señalando oportunamente día para la vista.

**227.** Si de la vista resultare que al apelación ha debido otorgarse libremente, la Corte, de oficio o a petición de parte, mandará que el recurrente exprese agravios, y substanciará el recurso antes de resolverlo.



**228.** Si la apelación en relación ha sido otorgada en alguno de los casos expresados en el artículo 224, la Corte resolverá la instancia con lo actuado y sin admitir escrito de las partes.

**229.** Si el Juez seccional denegare una apelación que por la ley debió conceder, la parte agraviada podrá ocurrir por el recurso de queja a la Suprema Corte, pidiendo que se ordene la remisión de los autos, y se le otorgue la apelación denegada.

**230.** La Corte pedirá informe al Juez de la causa, y evacuado por éste, resolverá con su vista, desechando la queja o mandando la suspensión de los procedimientos y remisión de los autos, con emplazamiento de las partes para que se exprese agravios.

**231.** El término para interponer la queja será de tres días, si fuere de providencia pronunciada por el Juez de la Sección en que tiene su asiento la Suprema Corte, aumentándose con un día por cada siete leguas, si se recurriese de providencia de otro Juez Seccional.

**232.** No se interpondrá recurso de apelación de una sentencia por obscuridad o ambigüedad de sus cláusulas, por error material respecto de los nombres, calidades y pretensiones de las partes, o por simple error de cálculo en su parte dispositiva; pero se podrá pedir en estos casos, dentro de tres días, aclaración de la duda o rectificación del error. El Juez resolverá lo que corresponda respecto de esta petición sin substanciarla, y de su resolución sobre este punto, no admitirá recurso alguno.

*Del recurso de nulidad*

**233.** Tiene lugar el recurso de nulidad contra las sentencias dadas con violación de la forma y solemnidad que prescriben las leyes, o en virtud de un procedimiento en que se haya incurrido en algún defecto de los que por expresa disposición de derecho anulasen las actuaciones.

**234.** No procederá el recurso de nulidad sino contra las sentencias definitivas de los Juzgados Seccionales, interponiéndose ante estos, conjuntamente con el de apelación, en el término prefijado para éste.

**235.** La Corte conocerá al mismo tiempo de ambos recursos en la segunda instancia.

**236.** Si el procedimiento estuviere arreglado a derecho, y la nulidad consistiere en las formas de la sentencia, la Corte, declarando ésta por nula, proveerá también sobre el fondo de la cuestión del pleito.

**237.** Cuando la nulidad provenga de vicio en el procedimiento se declarará por nulo todo lo obrado desde la actuación que dé motivo a ella, y se devolverán los autos al Juez Seccional, para que, volviendo a substanciar el proceso desde aquella misma actuación en adelante, pronuncie sentencia con arreglo a derecho.

**238.** Si el recurso de nulidad se interpusiese de sentencia pronunciada, en causa de menor cuantía, se remitirán los autos a la Suprema Corte, citadas y emplazadas las partes del mismo

modo que para el recurso de apelación. El recurrente expondrá las causas de nulidad al interponer el recurso.

**239.** La Corte, concluido el término del emplazamiento, mandará traer los autos para pronunciar sobre nulidad, citando a las partes que se hayan apersonado ante ella; y oyendo en voz a las partes o a sus defensores, si lo quisieren verificar el día de la vista, fallará lo que halle arreglado a justicia, devolviendo los autos al Juez Seccional.

**240.** La interposición del recurso de nulidad sobre providencia que cause ejecutoria, no impedirá la ejecución de ésta, a cuyo fin se reservará copia certificada en el Juzgado Seccional.

#### TÍTULO XXIII

##### *Del recurso de revisión*

**241.** El recurso de revisión creado por el artículo 7º de la ley de 16 de Octubre de 1862, solamente tendrá lugar en los casos siguientes:

1º Cuando la sentencia definitiva de la Suprema Corte en primera instancia hubiere recaído sobre cosas no pedidas por las partes;

2º Cuando en ella se omitiere proveer sobre alguno de los capítulos de la demanda o de la reconvencción si la hubiere;

3º Cuando despues de pronunciada la definitiva, la parte perjudicada hallase o recobrase documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado;

4º Cuando la definitiva se hubiere pronunciado en virtud de documentos reconocidos o declarados falsos, ignorándolo el recurrente, o cuya falsedad se reconociere o declarase despues;

5º Cuando habiéndose dictado en virtud de prueba testimonial o de posiciones, alguno de los testigos o la parte absolvente fueren condenados como falsarios en sus declaraciones.

**242.** No se interpondrá recurso de revisión de la sentencia definitiva en los casos expresados en el artículo 232, quedando salvos a las partes los recursos de aclaración o de rectificación.

**243.** El recurso de revisión, en los casos previstos por los incisos 1º y 2º del artículo 241, deberá interponerse dentro de ocho días, contados desde el siguiente a la última notificación.

**244.** En los casos expresados en el inciso 3º, el término para la interposición empezará a correr desde el día en que los nuevos documentos se descubrieren o recobraren.

**245.** En los casos de los incisos 4º y 5º desde el día en que se tuvo noticia del fraude o desde aquel en que se reconoció o declaró la falsedad.

**246.** En la substanciación de este recurso se observará lo prescripto para el de apelación concedido libremente.

**247.** La sentencia que en este grado pronunciare la Suprema Corte, sea confirmatoria o revocatoria de la que se dictó en primera instancia, hará cosa juzgada.

#### TÍTULO XXIV

##### *Del juicio ejecutivo*

**248.** Se procederá ejecutivamente siempre que se demande con un instrumento que traiga aparejada ejecución, una cantidad de moneda líquida, o cuya base de liquidación exista en el título de obligación.

**249.** Los instrumentos que traen aparejada ejecución, son los siguientes:

- 1º Las sentencias ejecutoriadas;
- 2º Los laudos arbitrales con los requisitos de derecho;
- 3º Las escrituras públicas, presentándose testimonio en forma;
- 4º Los documentos privados reconocidos ante el Juez competente;
- 5º Las letras de cambio, vales o pagarés protestados en forma, o en defecto de protesta, reconocidos ante el Juez;
- 6º La confesión de deuda líquida y exigible, hecha en juicio;
- 7º Las cuentas aprobadas y las reconocidas ante el Juez;
- 8º El juramento decisorio.

**250.** Puede prepararse la acción ejecutiva pidiendo previamente que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traen aparejada ejecución.

**251.** Reconocida la firma de un documento de obligación, quedará preparada la acción ejecutiva aunque se niegue su contenido.

**252.** La citación del demandado para efectuar el reconocimiento de la firma, se hará en la forma prescripta por los arts. 62 y siguientes, y bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer se tendrá por reconocido el documento.

Las citaciones por edictos se harán por medio de publicaciones en dos diarios, durante seis días.

No compareciendo, se hará efectivo inexcusablemente el apercibimiento, y se procederá como si el documento hubiera sido reconocido por el deudor en persona.

**253.** El Juez examinará el instrumento con que se deduce la acción, y si hallare que es de los comprendidos en el art.

249, libraré mandamiento de embargo, el que será entregado al ejecutante.

Con él se requerirá al deudor por un Oficial de Justicia o por el Escribano que proponga el acreedor, y no verificando el pago en el acto, se procederá a embargar bienes suficientes a cubrir la cantidad demandada y las costas, depositándolos judicialmente.

El embargo se practicará aún cuando el deudor no se halle presente. En este caso se le hará saber dentro de los tres días siguientes al de la traba; y en caso de ignorarse su domicilio, se le nombrará defensor, previa citación por edictos durante tres días.

**254.** Del auto que negare la ejecución podrá pedirse revocatoria o interponerse apelación, que será concedida en relación.

**255.** Si el documento no fuese reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en el correspondiente juicio ordinario (1).

**256.** Si del título de la ejecución resultare deuda de cantidad líquida, y otra que fuese indeterminada o ilíquida, se procederá ejecutivamente por la líquida, reservando la repetición de lo ilíquido para otro juicio.

**257.** Si el mandamiento de ejecución no designare bienes en que se ha de hacer la traba, se embargará lo que ofrezca el deudor, conformándose el ejecutante; y si no, los que éste señalare, hallándose en la posesión del deudor.

**258.** El embargo de bienes se hará en el orden siguiente:

1º Dinero efectivo;

2º Alhajas, piedras o metales preciosos;

---

(1) Conforme con la ley nº 3981.

- 3º Bienes muebles ;
- 4º Semovientes ;
- 5º Inmuebles ;
- 6º Créditos o acciones ;
- 7º Sueldos o pensiones .

**259.** Si hubiese bienes dados en prenda o hipoteca se procederá contra ellos antes que contra ningunos otros.

**260.** No se trabará nunca embargo en el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su propio uso, ni en los instrumentos indispensables para la profesión, arte u oficio que ejerza. Ningunos otros bienes se considerarán exceptuados.

**261.** En el caso de procederse contra los sueldos o pensiones, sólo se embargará la cuarta parte de ellos.

**262.** Inmediatamente despues de trabado el embargo se exigirá al deudor la fianza de saneamiento, a menos que este embargo se haya hecho en bienes hipotecados (1).

**263.** No dando la fianza o no presentando bienes al embargo, se asegurará en prisión al deudor, si no fuere de las personas exceptuadas por las leyes generales (2).

**264.** Trabándose embargo de bienes raíces, el Escribano lo hará saber dentro de veinticuatro horas al encargado del registro de hipotecas, quien lo anotará en un libro especial que al efecto llevará en la forma de los demás registros: de esta anotación se pondrá constancia en autos.

**265.** Si el deudor no pudiere ser habido despues, de buscársele dos veces en su domicilio por dos días consecutivos, se

---

(1) Derogado por la ley nº 3981, art. 3, pág. 230.

(2) Derogado por la ley nº 3981, art. 3, pág. 230.

le citará por cédula en la forma de estilo, trabándose el embargo al día siguiente (1).

**266.** Si no se supiere el paradero del deudor, se trabará el embargo con citación de su defensor (2).

**267.** Hecho el embargo se citará de remate al deudor o a su defensor.

**268.** Dentro de los tres días siguientes a la citación, podrá el deudor oponerse a la ejecución; y no haciéndolo el juez pronunciará la sentencia de remate.

**269.** Si se opusiere, deberá hacerlo expresando las excepciones que tuviere, y no se le admitirán sino las que entonces manifieste.

**270.** Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son:

Incompetencia de jurisdicción (3);

Falsedad o inhabilidad del título;

Prescripción;

Fuerza o miedo, de los que con arreglo a la ley hacen nulo el consentimiento;

Pago;

Compensación de crédito liquido, que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva;

Quita, espera o remisión;

Novación;

Podrá también el deudor alegar la nulidad de la ejecución, por violación de las formas que para ella quedan establecidas (4).

---

(1) Substituido por el art. 252. Ver ley 3981, pág. 230.

(2) Substituido por el art. 253. Ley 3981.

(3) Agregado de la ley 3981.

(4) Agregado de la ley 3981.



**271.** Opuestas las excepciones se dará al actor traslado, con calidad de autos, que deberá evacuar dentro de tres días. En seguida se recibirá la causa a prueba por diez días.

**272.** Si se declarase que las excepciones opuestas no son de las expresadas en el artículo 270, podrá apelarse en relación para ante la Corte Suprema.

**273.** El término de prueba no puede suspenderse ni prorrogarse, sino de conformidad de ambos litigantes.

**274.** El término de prueba será común, y puede en él usarse de los mismos medios probatorios que en el juicio ordinario, y con las mismas formalidades establecidas en esta ley.

**275.** Todas las notificaciones durante el término de prueba se harán en el día.

**276.** Vencido el término probatorio, se procederá como queda prevenido en los artículos desde el 78 hasta el 82 de esta ley.

**277.** La sentencia de remate sólo podrá mandar que se lleve la ejecución adelante, o declarar que no ha lugar a la ejecución. En el primer caso se condenará en costas al ejecutado y en el segundo al ejecutante.

**278.** Cualquiera que sea la sentencia en el juicio ejecutivo, quedará, tanto al actor como al reo, su derecho a salvo para promover el ordinario.

**279.** La sentencia de remate es apelable en ambos efectos. Pero sólo se concederá en el efecto devolutivo, si en el caso de ser condenatoria, el ejecutante dió fianza, al arbitrio del Juez.

---

(1) Agregado de la ley 3981.

de responder de lo que pueda percibir, si la sentencia fuera revocada por el superior.

**280.** Si se apelase y no se presentase la caución dentro de los seis días siguientes a aquel en que se otorgó el recurso, se elevarán los autos al Superior con citación de las partes.

**281.** Si se diera la fianza se remitirán también los autos dejando testimonio de lo necesario para que prosiga la ejecución.

**282.** Esta fianza, en ningún caso, es extensiva al resultado del juicio ordinario; confirmada la sentencia de remate por el Superior, queda de derecho cancelada.

**283.** Consentida la sentencia de remate, confirmada por el Superior, o dada la fianza en el caso de pedirse su ejecución, sin embargo de apelación, se hará pago inmediatamente al acreedor del principal, intereses y costas, previa tasación de éstas, si lo embargado fuese dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto.

**284.** Si los bienes embargados fuesen muebles, semovientes o alhajas, se procederá a su venta en remate, por un martillero público, sin necesidad de tasación.

**285.** Si fueren bienes raíces, se procederá a su justiprecio por peritos que nombren las partes; y en caso de discordia, la dirimirá un tercero nombrado por el Juez.

**286.** Practicada la tasación, y hecha saber a las partes, deberán éstas manifestar su conformidad o disconformidad dentro de cuatro días fatales y comunes a ambos, permaneciendo los autos en la oficina; y sin más trámite, el Juez resolverá, aprobando o desaprobando.

**287.** Si las tasaciones no fueren aprobadas, se ordenará la retasa por peritos nombrados por el Juez, y en vista de ello resolverá.

**288.** Si se aprobare la tasación de los bienes, se ordenará su venta en pública subasta. El remate no podrá verificarse antes de quince días, contados desde la fecha del auto que lo ordena, y sin que haya sido anunciado por los diarios, diez días, y una vez en la cabeza del Partido, lugar de los bienes embarcados, ampliándose el término, según las distancias respectivas.

**289.** No se admitirán en los remates, posturas que no alcancen a las terceras partes de su tasación.

**290.** No habiendo postores, quedará al arbitrio del actor pedir: o un nuevo remate, previa reducción de la tasación en un veinticinco por ciento, o que se le adjudiquen los bienes por las dos terceras partes de la tasación.

Si no obstante la reducción a que se refiere la primera parte de este artículo, no se presentaren postores, se ordenará la venta sin limitación de precio.

**291.** Si por culpa del postor dejare de tener efecto el remate, se procederá a nueva subasta en la forma que queda establecida, siendo el mismo postor responsable por la disminución de precio del segundo remate y de las costas causadas con este motivo.

**292.** Aprobado el remate, si los bienes fuesen muebles, semovivientes o alhajas, ordenará el Juez sean entregados al comprador, previa consignación de su precio. Si fuesen raíces, se otorgará la competente escritura judicial, debiendo previamente consignarse el precio.

**293.** En seguida se mandará hacer liquidación del capital, intereses, costas y costos que se adeuden, previa regulación y tasación de estos, y practicada la liquidación, se hará saber a los interesados, quienes en el acto de la notificación, deberán expresar su conformidad o disconformidad, indicando en este último caso las razones en que la fundan, para que el Juez, sin más trámite, apruebe o mande reformar la liquidación.

**294.** Aprobada la liquidación, se hará entrega de su importe, otorgándose caución, si el ejecutante lo pidiere.

**295.** El objeto de esta caución será garantizar el resultado del juicio ordinario que puede promover el deudor ejecutado; y ella será calificada exclusivamente por el Juez.

**296.** El ejecutado no podrá pedir la caución, si no se ha opuesto legalmente y tentado probar sus excepciones; ni cuando siguiéndose la ejecución en virtud de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, la excepción deducida fuese anterior a la fecha de esa sentencia.

**297.** Si dentro de sesenta días, el ejecutado no promoviere el juicio ordinario, quedará *ipso jure* cancelada la caución.

**298.** Sin estar reintegrado completamente el ejecutante, no podrá aplicarse las sumas realizadas a otros objetos, a menos que sean para las costas de la ejecución, o que otro acreedor haya sido declarado preferente por ejecutoria.

**299.** Las costas causadas por la defensa del deudor en el juicio ejecutivo no tendrán en ningún caso prelación.

**300.** Sólo son apelables en el juicio ejecutivo los autos que se declaren tales en la presente ley.

**301.** Cuando el juicio ejecutivo se deduce tercera de oposición excluyente, ella ha de fundarse precisamente en el dominio de los bienes embargados, o si fuere coadyuvante, en el mejor derecho para ser reintegrado; y deberá substanciar por cuerda separada en juicio ordinario, sin suspender el juicio ejecutivo, con el ejecutante y ejecutado.

**302.** Si la tercera deducida fuese de dominio, consentida o ejecutoriada que sea la sentencia de remate, se suspenderán los procedimientos de la vía ejecutiva hasta que se decida. Si la tercera fuese de mejor derecho, seguirá el juicio ejecutivo, hasta la realización de los bienes embargados, cuyo importe se depositará, suspendiéndose el pago hasta que se decida quién tiene mejor derecho.

**303.** La deducción de cualquiera tercera será bastante fundamento para que se amplie y mejore el embargo, si el actor lo solicitare.

**304.** Si se hubieren embargado o embargaren bienes no comprendidos en la tercera de dominio, podrán continuar contra ellos los procedimientos ejecutivos no obstante la tercera.

**305.** Cuando se interponga apelación de la sentencia, elevados los autos a la Corte Suprema, se dará cuenta en acuerdo y se mandarán pasar al relator, viéndose en audiencia pública, donde podrán informar las partes o sus abogados.

**306.** No se admitirá en la Corte Suprema, escrito alguno de alegato, ni pruebas que no consten en documentos públicos.

**307.** La sentencia confirmatoria deberá contener condena en costas al apelante.

## TÍTULO XXV

### *Del procedimiento de apremio*

**308.** La vía de apremio tendrá lugar contra los deudores de las clases siguientes:

1º Los consignatarios a quienes sean entregadas la mercadería que les viniesen consignadas, o cualquiera otra persona que las hubiera recibido con título legítimo, por los fletes en los transportes marítimos y los portes en las conducciones terrestres, con tal que no hayan transcurrido treinta días desde la entrega.

2º Los capitanes de las naves por las vituallas suministradas para la provisión de éstas, y los consignatarios o cargadores de las mismas, cuando se haya hecho de su orden este suministro.

3º Los dueños o capitanes de las naves por el pago de los salarios vencidos de la tripulación.

**309.** En la ejecución de las sentencias de los Tribunales o de las arbitrales que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada, y de los laudos de amigables componedores, que sean ejecutables, se procederá también por la vía de apremio, intentándose ésta en los tres meses siguientes al día en que dicha sentencia o laudo hubieren adquirido fuerza ejecutiva. Después de este plazo tendrá solamente lugar el procedimiento de ejecución por los trámites señalados en el Título XXIV de esta ley.

**310.** El apremio no podrá decretarse si los acreedores que lo pidieren no justifican su derecho en la forma siguiente: Los créditos por fletes o portes con la carta de fletamento o conocimiento original, y el recibo de las mercaderías contenidas

en este documento. — Los suministros hechos para la provisión del buque, por las facturas valoradas de los efectos suministrados, aprobados por el capitán, consignatario o cargador de cuya orden las haya entregado el acreedor. — Los salarios de la tripulación, por las copias de las contratas extendidas en el libro de cuenta y razón del buque, de que el capitán debe facilitar copia a cada interesado con la nota de los alcances que le resulten, conforme al artículo 1150 del Código de Comercio. En el caso que aquel rehusare dar este documento, se le obligará a exhibir el libro, y se sacará testimonio de lo que resultare de sus asientos con respecto al crédito reclamado, equivaliendo éste a la certificación que el capitán hubiera debido dar.

**311.** El crédito sobre que se pida el apremio ha de resultar líquido del título que se presente. De lo contrario, no tendrá lugar hasta que se haga la liquidación por acuerdo común de las partes, por sentencia judicial o por árbitros.

**312.** Si el título del acreedor fuese un documento privado que sin previo reconocimiento no tenga fuerza ejecutiva, deberá éste preceder al auto de apremio. Si el deudor negare la legitimidad del documento, usará el acreedor de su derecho en el juicio competente.

**313.** Con presencia del título ejecutivo de su crédito pedirá el acreedor el apremio, y hallando el Juez que procede de derecho, despachará mandamiento cometido a los oficiales de justicia, para que con asistencia de Escribano requieran al deudor el pago de la deuda; y no haciéndolo en el acto, procedan al embargo de sus bienes. En el requerimiento y ejecución se observarán las disposiciones de los artículos desde el 257 al 261 de esta ley.

**314.** Hecho el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes embargados, si dentro de tercero día no propusiese excepción legítima contra el apremio.

**315.** En este procedimiento se admitirán solamente las excepciones siguientes: Falsedad del título. — Falta de personería en el portador. — Pago. — Transacción o compromiso.

Cualquiera de ellas que competa al deudor, la ha de proponer por escrito y probarla, en los tres días prefijados en la citación.

**316.** La prueba de la excepción ha de ser con documentos, o por confesión judicial del acreedor y no por otro medio probatorio.

**317.** En el caso de que se pida la confesión judicial del acreedor, el Juez la recibirá inmediatamente.

**318.** Vencido el término de tres días, el escribano dará cuenta, y el Juez citará a las partes señalando día para que ellas o sus defensores aleguen verbalmente sobre sus derechos respectivos. En este día podrán las partes presentar cualquier documento que convenga a la defensa; y haciéndolo se hará relación por el Escribano de lo que de él resulte.

**319.** Si el deudor no hubiere hecho oposición a la demanda, o no hubiese probado sus excepciones, el Juez mandará proceder a la venta de los bienes ejecutados y al pago del acreedor. En caso contrario el Juez revocará el auto de apremio condenando en costas al actor.

**320.** De esta decisión del Juez no se dará recurso de apelación, quedando a salvo el derecho de las partes para que puedan usarlo en juicio ordinario.



**321.** En el caso de que por la sentencia se mande llevar a efecto el apremio, estará obligado el acreedor, antes de hacérsele el pago, si el deudor lo exigiere, a asegurar con fianza idónea las resultas del juicio que éste puede intentar contra el título del acreedor. Esta fianza caducará de derecho si en el término de sesenta días no se promoviese esta repetición. No se exigirá la fianza cuando el apremio se haya pedido en virtud de una sentencia ejecutoriada, y la excepción opuesta no sea de fecha posterior a la sentencia.

#### TÍTULO XXVI (1)

##### *De la prisión por deudas*

**322.** Por deuda civil de que no se deduzca acción criminal, nadie estará preso por un término mayor de seis meses.

**323.** Pasados tres meses de estar un deudor en prisión, podrá pedir que se le ponga en libertad prestando juramento de que no tiene bienes algunos con que verificar el pago.

**324.** De esta solicitud se dará traslado al acreedor, quien podrá oponerse a ella sólo en el caso de ofrecer probar alguno de los hechos siguientes: Que el deudor ha ocultado bienes o hechos que arrojen vehemente sospecha de tal ocultación. — Que ha dilapidado bienes. — Que ha hecho pérdidas considerables en cualquier especie de juego o en operaciones dependientes exclusivamente del azar. — Que sus gastos domésticos o personales han sido excesivos respecto de su fortuna.

**325.** No alegando alguno de estos hechos o no probándolos en el término de diez días, desde que el Juez le ordene dar

---

(1) El título ha sido modificado por la ley 514, que suprime la prisión por deudas. Pág. 236.

la justificación, el deudor será puesto en libertad prestando ante el Juez el juramento de que trata el artículo 323.

## TÍTULO XXVII

### *De los interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión*

**326.** Para que proceda el interdicto de adquirir son requisitos indispensables:

1° Que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo a derecho;

2° Que nadie posea a título de dueño o de usufructuario los bienes cuya posesión se pida.

**327.** Para que tenga lugar el interdicto de retener, se requiere:

1° Que el demandante se halle en actual posesión;

2° Que se haya tratado de inquietarlo por actos que deberán expresarse en la demanda.

**328.** Para que tenga lugar el interdicto de recobrar la posesión, es menester:

1° Que el que lo intente o su causante, hayan tenido la posesión o tenencia de la cosa demandada;

2° Que haya sido efectivamente despojado de esta posesión o tenencia, debiendo designarse los hechos y el autor del despojo.

**329.** En el interdicto de adquirir, presentada la demanda, el Juez examinará el título, y si no lo hallare suficiente, negará la posesión.

**330.** De este auto podrá pedirse dentro del tercero día reposición, y si el Juez no la otorgare, quedará expedita la apelación para ante la Suprema Corte.

**331.** Si el título fuese hallado suficiente, y los bienes no estuvieren detentados, se llamará por edictos, a los que se consideren con derecho a la misma posesión señalándoles el término de treinta días para comparecer, y si ninguno se presentare, se mandará poner en posesión al demandante.

**332.** Si alguna persona compareciere en virtud de los edictos, o cuando la demanda se dirige contra el detentador de los bienes, y también en los casos de los interdictos de retener y recobrar la posesión, así que sea recibida la demanda, el Juez mandará citar a las partes a juicio verbal con el intervalo de tres días, pasándose copia de la demanda a los emplazados.

**333.** En este juicio oirá el Juez a las partes o a sus defensores, y admitirá las pruebas que adujeren, extendiéndose acta en que con claridad y precisión se consignarán los alegatos, las pruebas producidas y las manifestaciones de los testigos.

**334.** Dentro de tres días el Juez pronunciará sentencia decidiendo o no la demanda.

**335.** De esta sentencia podrá apelarse en relación para ante la Suprema Corte. — Si por ella se ordenare dar la posesión, al despojado, el recurso se concederá en efecto devolutivo. — En los demás casos se otorgará en ambos efectos.

**336.** Si en el caso del interdicto de adquirir el que saliere a oponerse, fundare sus excepciones en título que pudiera darle derecho al dominio o usufructo de los bienes demandados, la causa se substanciará por la vía ordinaria.

TÍTULO XXVIII

*Del interdicto de obra nueva*

**337.** Presentada que sea la demanda de obra nueva, el Juez decretará su suspensión, citando al denunciante y denunciado a juicio verbal con sus títulos y señalando el término de tres días para que tenga lugar.

**338.** Antes de dictar sentencia, el Juez, si lo creyere necesario, podrá trasladarse al lugar de la obra para decidir con más acierto, y acompañarse de uno o más peritos nombrados de oficio, o propuestos por las partes, las que también podrán concurrir con sus defensores a la diligencia.

**339.** De esta diligencia se extenderá acta que firmarán los que concurren.

**340.** Entre el juicio y la diligencia de inspección no podrán mediar más de tres días, a no exigir mayor dilación alguna circunstancia extraordinaria.

**341.** Dentro de otros tres días siguientes a esta diligencia, o al de la terminación del juicio verbal, si no hubiere habido inspección, el Juez dictará sentencia.

**342.** Si por ésta se ratificare la suspensión, podrá apelarse sólo en efecto devolutivo. Si no se ratificare, se otorgará el recurso en ambos efectos. En ambos casos la apelación procederá en relación.

TÍTULO XXIX

*Del interdicto de obra vieja*

**343.** El interdicto de obra vieja puede tener dos objetos :

- 1º La adopción de medidas urgentes para evitar riesgos que el mal estado de cualquier construcción pueda ofrecer ;
- 2º Obtener su demolición.

**344.** Sólo podrán intentarlo :

- 1º Los que tengan alguna propiedad contigua o inmediata que pueda resentirse o padecer por la ruina ;
- 2º Los que tengan necesidad de pasar por las inmediaciones del edificio o construcción que amenazare ruina.

**345.** Si el interdicto tuviere por objeto medidas urgentes de precaución, el Juez, previa inspección que hará por sí de la obra, acompañado de perito que nombrará al efecto, dictará las medidas oportunas para procurar provisional e interinamente la debida seguridad. A la ejecución de estas medidas serán compelidos el dueño, su administrador o apoderado, el inquilino por cuenta de alquileres ; y en defecto de todos, se ejecutará a costa del actor, reservándole su derecho para reclamar del dueño de la obra los gastos que se le ocasionen.

**346.** El Juez podrá denegar las medidas de precaución solicitadas, si de la inspección que haga con el perito no resultare la urgencia. Ni esta providencia ni la que dictare acordándolas, son apelables.

**347.** Si el interdicto tuviere por objeto la demolición de algún edificio, deducida que sea la demanda, el Juez convocará a las partes a juicio verbal.

**348.** Si por el resultado del juicio, el Juez lo creyere necesario, podrá practicar una inspección de la obra acompañado de perito que él nombre, o las partes por su mandato, y de las mismas partes o sus defensores si lo solicitaren, extendiéndose acta de la diligencia, que subscribirán los que hubieren concurrido.

**349.** Dentro de los tres días siguientes al en que hubiere terminado el juicio verbal, o practicándose la diligencia de inspección, el Juez dictará sentencia.

**350.** Cualquiera que ésta sea, es apelable en relación y en ambos efectos.

**351.** En el caso de ordenarse la demolición y de resultar del juicio, o de la diligencia de inspección la urgencia de ella, el Juez, antes de que se remitan los autos a la Corte, decretará y hará que se ejecuten las medidas de precaución que estime necesarias en la forma que queda indicado en el inciso 2º del art. 345.

## TÍTULO XXX

### *Del procedimiento en las causas criminales (1)*

**352.** El sumario en las causas criminales se instruirá en la forma que se observa en los Juzgados de Provincia.

**353.** Después de la indagatoria el procesado nombrará su defensor, que revestirá el carácter de padrino y curador *ad litem* en sus respectivos casos, y si no lo hiciere, el Juez nombrará uno de entre los abogados que patrocinan causas ante su Juzgado. — La negativa del reo a absolver las preguntas,

---

(1) Derogado por el Código de Procedimientos en lo Criminal.

cargos y reconvenções que le puede hacer el Juez en el acto de la confesión, no inducirá presunción de culpabilidad en su contra.

**354.** Tomada la confesión, el Juez nombrará un Fiscal para que desempeñe las funciones de acusador, y mandará poner el sumario por ocho días en la escribanía para que éste y el defensor se instruyan de su mérito y preparen la acusación y la defensa.

**355.** Dentro de este término presentará el Fiscal su acusación, observando en cuanto a su forma lo prescripto respecto de la demanda en el juicio civil ordinario, y acompañando copia de ella que se pasará al defensor del acusado.

**356.** Este presentará la defensa de la misma manera ordenada, dentro de los nueve días siguientes a la comunicación de la copia, y la de este escrito se pasará también al Fiscal.

**357.** En este estado el Juez recibirá la causa a prueba con todos cargos por un término que no baje de diez días ni exceda de treinta, a no ser que algún motivo especial justifique la concesión de una prórroga.

**358.** Dentro del término de prueba serán nuevamente examinados los testigos del sumario que pudieren ser habidos y los demás que se presentaren en favor y en contra del acusado, guardándose en su examen y en la práctica de las otras diligencias de prueba, que fueren necesarias para el esclarecimiento de los hechos, lo prescripto en el juicio ordinario.

**359.** Concluido el término de prueba, el proceso se conservará en la escribanía por seis días, para que tanto el acusador como el defensor del enjuiciado puedan instruirse de las pruebas producidas.

**360.** Al siguiente día de vencidos los seis de que habla el artículo precedente, el actuario pondrá el proceso en el despacho con la correspondiente nota.

**361.** El Juez dictará la providencia de autos, y señalará un día, con el intervalo de tres cuando más, para que informen ante él, *in voce*, el acusador y el defensor, a cuya audiencia podrá asistir el procesado y ser oído en su defensa si lo solicitare.

**362.** Terminada esta audiencia, el Juez examinará el proceso y pronunciará su sentencia dentro de diez días.

**363.** De esta sentencia podrá apelarse siempre para ante la Suprema Corte. — Si fuere condenatoria, el recurso se otorgará libremente y en ambos efectos. — Si fuere absolutoria, el Juez podrá conceder la libertad bajo fianza, y el recurso en relación.

**364.** El Juez remitirá el proceso con noticia de las partes y emplazamiento del procesado, señalando a éste, si fuere el apelante, un término para la mejora, y requiriéndole para que nombre un nuevo defensor.

**365.** Si no tuviese a quien nombrar, la Corte le dará un defensor para que mejore el recurso y haga su defensa en esta instancia, nombrándolo de entre los abogados que patrocinan causas ante ella.

**366.** En la substanciación del recurso, se observará lo dispuesto relativamente a las apelaciones en el juicio civil ordinario.

**367.** Pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia que pronunciare la Corte, si por ella se impusiere alguna pena,



se comunicará por oficio al Poder Ejecutivo Nacional para que la haga cumplir.

**368.** Si la pena que se impusiere fuere de la muerte, se le remitirá el proceso original antes de devolverlo al Juzgado Seccional.

**369.** Queda abolida la práctica de exponer los cadáveres de los ejecutados en la horca.

**370.** Cuando no se hubiere podido obtener la aprehensión del procesado, concluida la indagación sumaria en primera instancia y libradas por el Juez las órdenes y requisitorias que estimare convenientes, se suspenderá la causa hasta que aquél sea conducido a la cárcel o se constituya voluntariamente en ella.

**371.** Sin embargo, podrá ser demandado por las prestaciones civiles a que lo obligue el delito siguiéndose contra él, a este sólo efecto, el procedimiento en rebeldía.

**372.** Si se procediere contra reo presente por acusación de la parte ofendida, podrá el Juez nombrar un Fiscal para que represente en el juicio la acción pública.

## TÍTULO XXXI

### *Disposiciones finales*

**373.** Esta ley empezará a regir desde su promulgación.

**374.** Las leyes de procedimientos civiles y comerciales de la capital de la República, serán, en lo adaptable, supletorias de la presente.

Lo serán igualmente las leyes preexistentes que reglamen-

tan los procedimientos judiciales, en lo que aquellas no bastaren y en cuanto no se opusieren a las disposiciones vigentes.

**375.** Comuníquese al Poder Ejecutivo.

# LEY SOBRE RECUSACION O IMPEDIMENTO DE LOS JUECES FEDERALES

LEY 935, DE SEPTIEMBRE 24 DE 1878 (1)

Art. 1. Los Jueces Federales de Sección, legalmente impedidos o recusados, serán suplidos por abogados de la matrícula designados como se establece en el artículo siguiente.

2. Todos los años, por el mes de Noviembre, o por lo menos antes de las vacaciones, la Suprema Corte formará una lista de abogados residentes en el lugar en que tenga su asiento cada Juzgado, que no bajen de tres, ni excedan de diez, quienes durante el año siguiente, por turno, suplirán a los expresados Jueces en los casos indicados.

3. Los nombramientos que se hicieren de Fiscales *ad hoc*, recaerán también en los letrados comprendidos en la enunciada lista, debiendo igualmente ser llamados por turno.

4. Los funcionarios suplentes, creados por esta Ley, sólo pueden ser recusados con los mismos requisitos que los titulares, y sus honorarios serán costeados por el Tesoro Nacional.

5. En las informaciones de pobreza que se produzcan en los Juzgados Nacionales, se observarán las mismas reglas es-

---

(1) Véase la ley 4162, pág. 232, complementaria de la presente.

tablecidas en cada Provincia, determinando quienes deben ser considerados como pobres para litigar.

6. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

### **LEY SOBRE RECUSACION SIN CAUSA DE LOS MIEMBROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FEDERAL**

LEY 3266, DE OCTUBRE 3 DE 1895

Art. 1. Hasta tres días después de hacerse saber el señalado para la vista de los pleitos civiles y comerciales, cada litigante tendrá derecho de recusar, sin causa, un miembro de la Suprema Corte Federal, no pudiendo usar de esta facultad sino una sola vez cada caso.

2. Cuando en los casos de recusación sin causa deba integrarse la Suprema Corte, de conformidad al art. 22 de la ley de Procedimientos Nacionales de 14 de Septiembre de 1863, los honorarios del conjuer o conjuces nombrados serán abonados por los recurrentes.

3. Comuníquese al P. E.

### **LEY SOBRE NOMBRAMIENTO DE MEDICOS O QUIMICOS, POR LOS JUECES NACIONALES, PARA EXPEDIR INFORMES O PRACTICAR PERICIAS**

LEY 3365, DE JULIO 3 DE 1896

Art. 1. En el caso en que por las leyes los jueces de la Nación deban nombrar, de oficio o a petición fiscal, médicos o qui-

micos para expedir informes o hacer exámenes periciales, esos nombramientos deberán recaer en primer término en los médicos o químicos que desempeñen puestos públicos rentados de la Administración.

2. Salvo los casos de excusación fundada, que deberá formularse dentro de los tres días subsiguientes al de la designación y que apreciarán los mismos jueces, los empleados aludidos estarán en el deber, bajo la pena de destitución, de aceptar y desempeñar los cargos que les confieran los Tribunales sin que tengan derecho de percibir honorarios especiales por esos servicios.

3. En los casos en que a falta de empleados técnicos, los jueces designen de oficio o a petición fiscal otros peritos y las partes fueren condenadas al pago de los honorarios, dichos peritos no podrán reclamarlos al Fisco aun cuando la parte condenada resulte insolvente.

4. Todo honorario devengado a mérito de nombramientos hechos en contravención a esta ley, serán pagados por los jueces que los hayan decretado.

5. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

## **LEY SOBRE REPRESENTACION DEL FISCO Y SOBRE NOMBRAMIENTOS DE ARBITROS**

LEY 3367, DE JULIO 8 DE 1896

Art. 1. Desde la promulgación de la presente ley, en todo asunto de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que el Fisco Nacional demande o sea demandado, será exclusiva y necesariamente representado por los Procuradores Fiscales, y si el

asunto fuese a la Suprema Corte, por el Procurador General de la Nación. En los casos en que el Poder Ejecutivo lo crea conveniente podrá también representar al Fisco, en reemplazo de los funcionarios mencionados, el Procurador del Tesoro.

2. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior, los asuntos confiados a los cobradores fiscales, cuyas funciones se hallen determinadas por leyes especiales.

3. A los Tribunales y Jueces Federales, a los de la Capital de la República y Territorios Nacionales, les es prohibido aceptar nombramientos de árbitros juris, arbitradores o amigables componedores, bajo pena de nulidad absoluta, a excepción de los casos en que sean designados en tal carácter por el Gobierno de la Nación o los Gobiernos de Provincia.

4. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

5. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**LEY INCORPORANDO A LA LEY 50 DE PROCEDIMIENTOS DE LOS TRIBUNALES NACIONALES, LOS TITULOS XIII Y XIV DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS VIGENTE EN LA CAPITAL DE LA REPUBLICA.**

LEY 3375, DE AGOSTO 3 DE 1896

Art. 1. Decláranse incorporados a las disposiciones de la ley sobre Procedimientos de los Tribunales Nacionales, de 14 de Septiembre de 1863, los Títulos XIII y XVIII del Código de Procedimientos Civiles vigentes en la Capital de la República.

exceptuándose los artículos 462 y 463 del Título XIII, y reemplazándose por 200 \$ nacionales los 5000 \$ moneda corriente que determina el inciso segundo del artículo 443.

2. Quedan derogadas las disposiciones de la citada ley de 1863, que se opongan a los Títulos incorporados.

3. Suprímese la mejora del recurso y la relación en las causas civiles y comerciales ante la Suprema Corte de Justicia Federal.

4. Cuando el recurso se hubiere concedido libremente, en el mismo día en que los autos lleguen al Tribunal, el Secretario dará cuenta, y se ordenará sean puestos en la oficina para que el apelante exprese agravios, dentro del término de nueve días, contados desde el fin del término del emplazamiento, siguiéndose después conforme determina la ley vigente hasta el llamamiento de autos.

5. En el caso del artículo anterior, luego que esté terminada la tramitación en segunda instancia, se dictará la providencia de “autos” y el expediente pasará a Secretaría. Dentro del tercer día contado desde la notificación de esta providencia, o al practicarse la notificación de la misma providencia, manifestarán las partes si van a informar “in voce”, en cuyo caso se señalará día para oír los informes en audiencia pública.

6. Si el recurso se hubiere concedido en relación, luego de recibido el expediente se dictará la providencia de “autos” y se procederá como dispone el artículo anterior.

7. En las causas de jurisdicción originaria, después de contestada la demanda a las excepciones previas que se hubiesen opuesto, o de concluida la causa para definitiva, cuando se hubiera abierto a prueba, se dictará la providencia de autos y las

partes podrán hacer la manifestación mencionada en el art. 5º, procediéndose como en él se indica.

8. Modifícase el art. 4º de la ley nº 3094 en la siguiente forma: "Cuando el incidente sobre regulación se hubiese iniciado ante la Suprema Corte o se tratase de honorarios de abogados que hubiesen desempeñado las funciones de conjuces de la misma, el Secretario más antiguo regulará los honorarios, pudiendo pedirse al Tribunal su reforma dentro del tercer día".

La Corte procederá también sin forma de juicio y sin ulterior recurso.

9. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

## LEY SOBRE NOTIFICACIONES

LEY 3649, DE NOVIEMBRE 6 DE 1897

Art. 1. Mientras se sancione el proyecto de Código de Procedimientos para los Tribunales Federales, quedan incorporadas a la ley de 14 de Septiembre de 1863, las siguientes disposiciones:

1ª Las notificaciones de las providencias, salvo las que se expresan en seguida, deberán hacerse en la secretaría del juzgado o tribunal. A este efecto el juez designará dos días de cada semana que no sean consecutivos, en los que todo litigante estará obligado a concurrir a la Secretaría.

2ª Con este objeto cada secretario llevará un libro que colocará en lugar visible y en el que las partes podrán asentar su firma, con indicación de la fecha, para acreditar en cualquier tiempo su comparencia a la oficina.

3ª Toda providencia se considerará notificada desde el pri-



mero de los días designados, subsiguiente a aquel en que fué dictada, con la nota puesta por el secretario en que conste la inasistencia del interesado y corriendo el expediente en su estado.

4ª Serán notificadas a domicilio:

a) Las providencias de citación y emplazamiento de la demanda;

b) Las que ordenen requerimiento al que deba verificar el acto requerido;

c) El auto de prueba;

d) Las sentencias definitivas y autos con fuerza de tales;

e) Las demás providencias de que se haga mención especial en la ley de Procedimientos Federales.

## **LEY MODIFICATORIA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS DE LOS TRIBUNALES NACIONALES.**

LEY 3981, DE MAYO 31 DE 1901

Art. 1. Decláranse substituidos los arts. 191, 205, 207, 252, 253, 255, 265, 266, 290 y 374 de la Ley sobre Procedimientos de los Tribunales Nacionales de 14 Septiembre de 1863, por los siguientes:

“Art. 191. Si el litigante rebelde compareciere, cualquiera que sea el estado del juicio, será admitido como parte, y cesando el procedimiento en rebeldía, se entenderá con él la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradar. Si se presentara despues del pronunciamiento de la sentencia definitiva en última instancia, solo podrá interponer contra ella el recurso de rescisión.

205. La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso de reposición fuese acompañado del de apelación en subsidio y la providencia reclamada reuniere las condiciones

establecidas en el art. 206 para que la interlocutoria sea apelable.

207. El auto que abra la causa a prueba es inapelable; contra el que la deniegue podrá interponerse los recursos de reposición y apelación en subsidio.

252. La citación del demandado para efectuar el reconocimiento de la firma, se hará en la forma prescripta por los arts. 62 y siguiente y bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer, se tendrá por reconocido el documento.

Las citaciones por edictos se harán por medio de publicaciones en dos diarios, durante seis días.

No compareciendo, se hará efectivo inexcusablemente el apercibimiento y se procederá como si el documento hubiera sido reconocido por el deudor en persona.

253. El juez examinará el instrumento con que se deduce la acción, y si hallare que es de los comprendidos en el art. 249, librará mandamiento de embargo, el que será entregado al ejecutante.

Con él se requerirá al deudor por un Oficial de Justicia o por el Escribano que proponga el acreedor, y no verificando el pago en el acto, se procederá a embargar bienes suficientes a cubrir la cantidad demandada y las costas, depositándolos judicialmente.

El embargo se practicará aún cuando el deudor no se halle presente. En este caso se le hará saber dentro de los tres días siguiente al de la traba; y en caso de ignorarse su domicilio, se le nombrará defensor, previa citación por edictos durante 3 días.

255. Si el documento no fuese reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en el correspondiente juicio ordinario.

290. No habiendo postores, quedará al arbitrio del actor pedir:

O un nuevo remate, previa reducción de la tasación en un 25 %, o que se le adjudiquen los bienes por las dos terceras partes de la tasación.

Si no obstante la reducción a que se refiere la primera parte de este artículo, no se presentaren postores, se ordenará la venta sin limitación de precio.

374. Las leyes de procedimientos civiles y comerciales de la capital de la República serán, en lo adaptable, supletorias de la presente.

Lo serán igualmente las leyes preexistentes que reglamentan los procedimientos judiciales, en lo que aquellas no bastaren y en cuanto no se opusieren a las disposiciones vigentes.

2. En el art. 270 y antes de las palabras: “falsedad e inhabilidad del título”, intercalar estas: “incompetencia de jurisdicción”; y después de la palabra: “novación”, las siguientes: “podrá también el deudor alegar la nulidad de la ejecución, por violación de las formas que para ella quedan establecidas”.

3. Derógase el art. 180, la palabra *puramente* del 203, y los arts. 262 y 263 de la precitada ley de 1863.

1863.

4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

## LEY SOBRE LA INTEGRACION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, EN CASOS DE RECUSACION, IMPEDIMENTO, VACANCIA O LICENCIA.

LEY 4162, DE ENERO 8 DE 1903

Art. 1. En los casos de recusación, impedimento, vacancia o licencia de algunos de los Ministros de la Suprema Corte, se integrará este Tribunal, hasta completar el número legal para fallar, en el orden siguiente:

1º Con el Procurador General;

2º Con los miembros de la Cámara Federal de Apelación de la Capital; (1) y

3º Con los conjuces de la lista de 25 abogados, que reúnan las condiciones para ser miembros de la misma Corte y que ésta formará por insaculación en el mes de Diciembre de cada año (2).

2. En lo sucesivo la integración de las Cámaras Federales, en los casos del artículo primero, se hará:

1º Con el Fiscal de la Cámara;

2º Con el Juez o Jueces de la sección donde funcione el Tribunal (3).

3º En la de la Capital, como se establece en el inciso 3º del artículo primero;

4º En las Cámaras de La Plata, Córdoba y Paraná, con los conjuces que en Diciembre de cada año insaculará la Corte Suprema para el siguiente, en número de diez, de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros titulares, que las mismas Cámaras le pasarán al efecto en el mes de Noviembre (4).

3. Para las suplencias de los Jueces Federales y de Territorios Nacionales en los casos del art 1º, serán llamados en este orden:

1º El Fiscal Letrado;

2º El Defensor Letrado de pobres, menores e incapaces, y

3º El conjuce correspondiente de la lista anual que forma la Suprema Corte para los Jueces Federales y para los Jueces de Territorios Nacionales, el juez de Sección o territorio más

---

(1) Por orden de antigüedad y siendo ésta la misma, por orden de edad. (Acuerdo de la Suprema Corte de 5 de Febrero de 1903).

(2) Ver art. 23, de la ley 50, pág. 157.

(3) Como en el caso de la nota primera.

(4) La integración se hará por sorteo como lo prescribe el artículo 23 de la ley 50 de Procedimientos. (Acordada y citada, art. 3).

próximo, como lo prescribe el artículo 1º, inc. 4º de la Ley nº 3575, de 8 de Octubre de 1897.

4. En las secciones que fueran servidas por más de un Juez, éstos se reemplazarán recíprocamente y en su defecto, como lo determina el artículo anterior.

5. En los casos del art. 1º, el Procurador General de la Nación será substituido en primer término por el Fiscal de la Cámara Federal de Apelación de la Capital.

6. Los Fiscales de las Cámaras serán suplidos en los mismos casos:

1º Por el Procurador Fiscal de la sección, donde funciona el Tribunal;

2º Por el Defensor Letrado de menores e incapaces de la misma; y

3º Con los Fiscales *ad hoc*, que serán nombrados de las listas a que se refiere el art. 2º, incisos 3º y 4º de esta ley (1).

7. Los Fiscales y los Defensores Letrados de menores, pobres e incapaces se reemplazarán recíprocamente, reservándose para los casos de impedimento de los suplentes, la designación de funcionarios *ad hoc*, que se hará por los Jueces Federales de la lista prescripta por la ley núm. 935, de 24 de Septiembre de 1878, y por los jueces de los Territorios Nacionales, en personas que tengan título de abogado, y en defecto de ellas, en personas que sean idóneas; salvo lo dispuesto en la Ley núm. 3367, de 8 de Julio de 1896.

8. Los Secretarios de las Cámaras Federales, mientras sea uno sólo por cada tribunal, serán suplidos preferentemente por los Secretarios de los Juzgados Federales del lugar donde funcione aquella.

---

(1) El nombramiento se hace por turno (Acuerdo citado, art. 5).

En los Juzgados de sección se substituirán entre sí los del mismo Juzgado, y en caso de impedimento de ambos, el que se halle en turno de otro Juzgado.

En la localidad donde no haya sino un Juzgado con un sólo Secretario, éste será suplido por el Pro-secretario o por uno *ad hoc* designado por el mismo Juez; no pudiendo, en ningún caso, gozar el suplente de mayor emolumento que correspondería al titular.

9. Los funcionarios suplentes a que esta ley se refiere serán llamados por su orden o en el subsiguiente si se hallaren impedidos, y cuando fueran dos o más los indicados en la misma línea, la designación se hará por el turno que establezca la Suprema Corte.

10. En los casos a que se refiere el art. 460, del Código de Procedimientos en lo Criminal, los Jueces Federales de la Capital de la República y de La Plata, pasarán el proceso al Fiscal de la Cámara respectiva, quien ejercerá las funciones que el mismo artículo atribuye al Procurador General en la primera parte, y al Fiscal, especial en la última.

11. Además de las atribuciones que le confiere la Ley número 4055, las Cámaras Federales de Apelación, tendrán las siguientes:

Nombrar y remover sus Secretarios y demás empleados subalternos, y acordar o denegar a los mismos, licencia para ausentarse en los mismos casos y por el mismo término que establece el art. 11, inc. 3º de la Ley nº 4055.

12. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

13. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

# LEY SUPRIMIENDO LA PRISION POR DEUDAS

LEY 514, DE JUNIO 26 DE 1872

**Art. 1.** Suprímese la prisión por deudas en todas las causas civiles y mercantiles, que se tramiten ante los Tribunales Nacionales.

**2.** Exceptúanse solamente de esta disposición:

1º Los casos de quiebra mercantil, regidos por el art. 1549 del Código de Comercio.

2º Los casos de insolvencia en que, por información sumaria se acredite que ha habido dolo o fraude por parte del deudor.

**3.** La prisión preventiva a que se refiere el art. 1549 del Código de Comercio y la establecida en el inciso segundo del artículo anterior, no podrá durar más de un mes, pasado el cual el deudor será puesto en libertad, si no hubiese mérito para proceder criminalmente contra él.

**4.** Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

**5.** Comuníquese al Poder Ejecutivo.

## **LEY SOBRE PERENCION DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL**

LEY N° 4550, DE JUNIO 9 DE 1905

**Art. 1.** Se tendrán por abandonadas las instancias en materia civil y comercial del fuero común o federal de la Nación, si no se insta su curso:

- a) Dentro de dos años cuando el litigio se encuentre en primera o única instancia.
- b) De un año cuando estuviere en segunda o tercera instancia por apelación o nulidad.
- c) De seis meses si estuviere pendiente de un recurso de revisión y en los juicios ante la Justicia de Paz y Alcaldes.

En las acciones que deban ser deducidas por las leyes generales, en un término menor del fijado en este artículo, la caducidad de la instancia se producirá en el mismo término en que se opera la prescripción de esas acciones.

El término para la caducidad de la instancia, empezará a contarse desde la última notificación, motivada por petición o diligencia practicada que tuviere por objeto activar el procedimiento.

**2.** La perención de la instancia se producirá contra el Estado, los Establecimientos Públicos, los menores y cualquier otra persona que no tenga libre administración de sus bienes salvo el recurso contra los administradores y representantes.



3. La perención de la instancia se operará de pleno derecho.

Los litigantes podrán pedir su declaratoria por vía de acción o de excepción antes de consentir en ningún trámite del procedimiento. Esta gestión se substanciará con las reglas y con los recursos establecidos para los incidentes.

4. La perención en primera y única instancia anula todos los procedimientos, pero no extingue la acción, que podrá ejercitarse en el juicio correspondiente entablado nueva demanda. En las demás instancias o en revisión, la perención dará fuerza de cosa juzgada a la sentencia recurrida.

5. No obstante la perención de la Instancia, las partes podrán utilizar en el nuevo juicio que promovieren, los instrumentos públicos o privados, la confesión, las declaraciones de testigos y demás pruebas producidas, sin que ninguna de todas ellas tenga el efecto de interrumpir la prescripción de la acción o el derecho principal.

6. Las costas causadas en el juicio que es objeto de la perención, serán a cargo del actor.

7. Las disposiciones de esta ley no son aplicables respecto de las actuaciones para la ejecución de las sentencias firmes, las que podrán proseguirse hasta establecer el procedimiento de la ejecutoria aunque hayan quedado sin curso durante los términos señalados en el artículo primero.

8. Notificada la sentencia, el incidente de perención deberá promoverse ante el tribunal de apelación rigiéndose por las disposiciones relativas a la perención de segunda y tercera instancia.

9. En los pleitos que actualmente se encuentran paralizados, los términos para la caducidad de la instancia se contarán desde el día de la promulgación de esta ley.

10. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**LEY PROHIBIENDO SE CONFIERA FUNCIONES DE INGENIERO CIVIL, MECANICO, ARQUITECTO, QUIMICO O AGRONOMO Y AGRIMENSORES A LAS PERSONAS QUE CAREZCAN DE TITULO.**

LEY N° 4560, DE JUNIO 26 DE 1905

Art. 1. Desde la promulgación de esta ley, el Poder Ejecutivo y los Tribunales de la Nación no conferirán cargo, empleo o comisión en los ramos de ingeniería civil, mecánica, arquitectura, agronomía y agrimensura, sino a los diplomados por las Universidades y Escuelas Especiales de la Nación, o a los que rivaliden su título extranjero de acuerdo con las disposiciones vigentes.

2. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior:

a) Las personas que se encuentren actualmente desempeñando cargos, empleos o comisiones nacionales de la índole de los referidos en el artículo 1°;

b) Quedan también exceptuados de lo dispuesto en el artículo anterior, las personas que posean conocimientos técnicos, a quienes el Poder Ejecutivo necesite encomendarles trabajos especiales, que no puedan efectuarse con los elementos del país;

c) Los profesionales indicados en el artículo 1°, que ten-

gan títulos expedidos por universidades, escuelas y tribunales provinciales hasta el 1° de Enero de 1904, o que se encuentren hasta la misma fecha matriculados o reconocidos en alguna repartición nacional o municipal de la Capital.

d) Los idóneos que en las provincias y territorios nacionales donde no hubiere diplomados, ejerzan las profesiones antes enumeradas, con sujeción a los reglamentos que se dicten.

### 3. Comuníquese al Poder ejecutivo.

